

58ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION EXTRAORDINARIA (Especial) —
ENERO 24 Y 25 DE 1974

Presidencia de los señores diputados Raúl Alberto Lastiri, Salvador F. Busacca
y Luis Antonio García

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
ACUNA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAOLLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONES, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARCE, Rodolfo Juvenio
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRUE, Wilhebrordo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto C.
AVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BEHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efraín
BONIFATTI, Arolinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CABEZAL, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CARDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CASAZZA, Luis Ángel
CATALANO, José Armando
CITATI, Ángel

COLELIO, Clemente J.
COMINGUEZ, Juan Carlos
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
CROCCO, Luis Ferdinando
CHAQUIREZ de PALACIOS, María
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
DAVICO, Miguel Ángel
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ, Juan Máximo
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNANDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GAITAN, Adelmo Alberto
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCIA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRÉ, Nilda Cella
GASS, Adolfo
GIMENEZ, Nicolás Alberto
GOLE, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
GUZMAN de ANDREUSSI, María Cristina
HAIEK, José
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo

INSUA, Carlos Raúl
KELLY, Rodolfo Feliciano
LABAKE, Juan Gabriel
LASTIRI, Raúl Alberto
LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LÉPEZ, Lysis Augusto
LITERAS, María Haydée A. de
LONCH, RICH FRANCH, Cándido
LOPEZ, Domingo
LOPEZ, Horacio Fidel
LOPEZ, Miguel Ángel
LOPEZ de GALLO, Amelia
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Elio
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTINEZ, Juan Antonio
MARTINEZ, Pedro Nicolás
MARTOS, Mario Raúl
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLOKENZO, Vicente
MAUJUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio T.
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRA, Jesús
MOLINA, Gliberto H.
MOLINA, Manuel Isauro
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MONACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.
MONTERO FELLO, Régulo L.
MORAL, Ángel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, María Teresa Mercadri de
MOYANO, Francisco J.
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NARANJO, Decio B.
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio

PALACIO DEHEZA, Carlos
 PARENTE, Rodolfo Domingo
 PATALAGOITIA, Osvaldo E.
 PAZ, Guido Ulises
 PEDRINI, Ferdinando
 PEREIRA, Antonio
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PORTERO, Héctor
 PORTO, Jesús E.
 RABANAL, Rubén Francisco
 RACCHINI, Juan Nicolás
 RAFAEL, Juan
 RAMIREZ, Juan Manuel
 RITVO, Miguel
 RIZO, Eusebio Victor
 RODRIGUEZ, Alfredo S.
 RODRIGUEZ FLORES, Argentina
 ROJAS, Ramón Pa lo
 POLANDO, Esteban Domingo
 ROMAN, Irene Graciela
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Juana N.
 ROSAS, Alberto Horacio
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SALIM, Luis
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo
 SAMBUEZA, Osvaldo
 SANCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio

SANDLER, Héctor Raúl
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SAUL, Roberto
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Neio I.
 SILVA, Anacleto
 SLAMOVITS, Ludovico
 STECCO, Alberto Eleodoro
 SUAREZ, Humberto F.
 SUAREZ, Leopoldo M.
 SUELDO, Horacio Jorge
 SULETA DE ARRAYA, Arminda
 SVISEK, Enrique A.
 TACHELLA, Elber: S. J.
 TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino
 TRABOULSI, Eduardo Elías
 TROCCOLI, Antonio A.
 URDINEZ de VOLPE, Clotilde Isolina
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENZUELA, Héctor R.
 VALERI, Salvador
 VÁZQUEZ POL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VIALE, Jorge Omar
 VILLADA, Mario Anselmo
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 VINTI, Carmelo
 ZAMANILLO, José Miguel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES. CON AVISO:

BAJCZMAN, Raúl I.
 BRAVO, Carlos Alberto
 CAMPOS, Ernesto Manuel
 CARRERAS, Ruperto R.
 CASTELLANO, Hugo Luis
 FALÚ, Ricardo Munir
 HARRINGTON, Luis José D.
 LIMA, Hugo Ramón
 MALDONADO, Clemente
 MARINO, Rafael Francisco
 MERCHENSKY, Marcos
 MIGUEL, Pedro Honorio
 MOMBELLI, Fausto J.
 ODENA, Isidro J.
 PASQUAL, Paulino Rubén
 PETRUCCELLI, Agustín
 RATTI, Luis Carlos
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOLANA, Jorge D.
 TULA DURAN, Joaquín

AUSENTES SIN AVISO:

CROATTO, Armando Daniel
 DIAZ ORTIZ, Santiago Francisco
 GLELLEL, Jorge
 ITURRIETA, Anibal A.
 KUNKEL, Carlos Miguel
 MUÑIZ BARRETO, Diego
 VIDAÑA, Roberto
 VITTAR, Rodolfo Oscar

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones del señor presidente de la Honorable Cámara, de homenaje a las víctimas y de repudio de los luctuosos sucesos acaecidos en Azul. (Pág. 5489.)
- 2.—Moción de tratar sobre tablas el proyecto de resolución del señor diputado Cárdenas, por el que se invita a los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa a concurrir a las sesiones en que considere la modificación del Código Penal y de la ley 48. Se rechaza. (Pág. 5490.)
- 3.—Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del Código Penal. Se sanciona definitivamente. (Pág. 5491.)
- 4.—Licencia del señor secretario parlamentario doctor Alberto Luis Rocamora, por el tiempo que ejerza las funciones de ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se concede. (Página 5568.)
- 5.—Indicación del señor diputado Pedrini relacionada con la consideración de los órdenes del día 353 y 356, que se refieren a la aprobación de tratados celebrados con las repúblicas del Uruguay y del Paraguay. Se aprueba. (Pág. 5568.)
- 6.—Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Energía y Combustibles en el proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Yaciretá, suscrito entre la República Argentina y la República del Paraguay; y del dictamen de la Comisión de Rela-

ciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, suscrito entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. (Pág. 5569.)

- 7.—Aclaración del señor diputado Fernández Valoni respecto de su posición favorable a la reforma del Código Penal. (Pág. 5607.)
- 8.—Termina la consideración de los dictámenes a que se refiere el punto 6 de este sumario. Se sancionan. (Pág. 5607.)
- 9.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 5618.)

II.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

- 1.—Mensaje y proyecto de ley: cesión a la provincia de Mendoza de una fracción de terreno. (Pág. 5620.)
- 2.—Mensaje y proyecto de ley: condonación de una deuda de la Asociación Civil La Anunciata. (Página 5620.)
- 3.—Mensaje y proyecto de ley: modificación del régimen jubilatorio establecido por la ley 20.578. (Página 5621.)
- 4.—Mensaje y proyecto de ley: creación del Instituto Nacional de Tecnología Comercial (INTEC). (Página 5622.)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra la señora diputada Guzmán de Andreussi.

Sra. Guzmán de Andreussi. — Deseo adherir, en nombre del bloque de la Alianza Popular Federalista, a la moción del señor diputado Cárdenas, pues la consideramos sumamente pertinente.

Voy a sumar un antecedente más a todos los que él ha mencionado. Es la entrevista que sostuvo el señor presidente de la República con los diputados del sector juvenil, donde aportó una serie de elementos. Además se refirió también anteriormente, en un mensaje al pueblo, a la necesidad de una movilización total. Queremos saber por qué se ha pedido eso.

Nos sentimos tan representantes del pueblo como quienes pertenecen al sector mayoritario de esta Cámara; por eso no podemos admitir que los señores ministros concurren a dialogar únicamente con los diputados de la mayoría. ¿Acaso se nos están escondiendo elementos o armando estrategias que no conocemos?

Consideramos que de ninguna manera podemos afrontar el debate plenamente si no contamos con todos los elementos de juicio.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Moyano.

Sr. Moyano. — Señor presidente: adherimos a la moción formulada por el señor diputado Cárdenas, agregando a lo manifestado por los señores diputados preopinantes que, de acuerdo con el régimen republicano de gobierno, el Poder Ejecutivo es colegislador, y como la Cámara va a tratar un proyecto de enorme trascendencia social para el país, estimamos indispensable la presencia de los señores ministros en este recinto.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Colello.

Sr. Colello. — Señor presidente: vamos a adherir con nuestro voto a la moción presentada por el señor diputado Cárdenas.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Además de los elementos de juicio jurídicos y políticos con que contamos para tratar esta reforma al Código Penal, es de suma importancia conocer las razones de hecho que impulsaron al Poder Ejecutivo a proponer semejante modificación de la legislación penal. Por ello, nuestro bloque adhiere a la moción formulada por el señor diputado Cárdenas.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: la bancada del Frente Justicialista de Liberación se va a oponer al tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del señor diputado Cárdenas, pues está absolutamente convencida de que de ninguna manera es necesaria la presencia de los señores ministros del Poder Ejecutivo. Entendemos que los asesores enviados por los señores

ministros a las comisiones de Legislación Penal y de Justicia han informado suficientemente a los señores diputados.

Si las bancadas de la oposición solicitan la presencia de los señores ministros, es lógico deducir que lo hacen para consultar aspectos referentes a algunos de los artículos de la reforma en consideración. Desde ya anticipo a los señores diputados de la oposición que nuestro criterio de ninguna manera puede afectar la armonía y el espíritu solidario de trabajo que tiene esta Honorable Cámara. Además, les aseguro que ante cualquier duda con respecto al tratamiento de este proyecto de ley, los señores diputados de esta bancada así como el miembro informante, señor diputado Porto, evacuarán las consultas que se formulen.

Por ello, señor presidente, nos vamos a oponer al tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución presentado por el señor diputado Cárdenas.

Sr. Presidente (Lastiri). — Se va a votar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución del señor diputado Cárdenas. Se requieren dos tercios de votos.

— Resulta negativa.

3

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL

(Orden del día número 352)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de ley en revisión caratulado: «Modificación del Código Penal»; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 3 de enero de 1974.

Jesús E. Porto. — Clara Cristina Ser-
vini García. — Edgar Cossy Isasi.
— Lorenzo Francisco D'Angelo. —
Pedro Nicolás Martínez. — Gilber-
to H. Molina. — José Carlos W.
Moreno Ferrer.

En disidencia total:

Juan Carlos Cárdenas. — Vicente Mi-
guel Musacchio. — Héctor R. Va-
lenzuela.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1973.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presi-
dente a fin de comunicarle que el Honorable

Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el Código Penal (ley 11.179), en la forma siguiente:

1. Agrégase como inciso 4º del artículo 80 del Código Penal el siguiente:

Al que matare a otro con el concurso premeditado de dos o más personas.

2. Auméntase la escala penal correspondiente al artículo 141 del Código Penal fijándose la misma en prisión o reclusión de seis meses a tres años.
3. Auméntase la escala penal correspondiente al artículo 142 del Código Penal, fijándose la misma en prisión o reclusión de dos a seis años.
4. Inclúyese como artículo 142 bis del Código Penal el siguiente:

Se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años, al que substraere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

La pena será de diez a veinticinco años de prisión o reclusión:

- 1) Si la víctima fuere mujer o menor de dieciocho años de edad.
- 2) En los casos previstos en el artículo 142, incisos 2º y 3º de este código.

Si resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua.

5. Suprímese del artículo 142, inciso 1º, del Código Penal, la frase «o con propósitos de lucro».
6. Inclúyese como artículo 149 bis del Código Penal, el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

7. Inclúyese como artículo 149 ter del Código Penal, el siguiente:

En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:

- 1) De tres a seis años de prisión o reclusión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.
- 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión, en los siguientes casos:

- a) Si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;
- b) Si las amenazas tuvieran como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

8. Reemplázase el inciso 2º del artículo 166 del Código Penal, por el siguiente:

Si el robo se cometiese con armas, o en despoblado y en banda.

9. Suprímese del inciso 1º del artículo 167 del Código Penal la frase «y con armas».
10. Elévase la escala penal correspondiente al artículo 168 del Código Penal, fijándose la misma en reclusión o prisión de cinco a diez años.
11. Elévase la escala penal correspondiente al artículo 169 del Código Penal, fijándose la misma en prisión o reclusión de tres a ocho años.
12. Substitúyese el artículo 170 del Código Penal, por el siguiente:

Se impondrá reclusión o prisión de cinco a quince años, al que substraere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate.

Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho años.

13. Inclúyese como artículo 189 bis del Código Penal, el siguiente:

El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, fabricare, suministrare, adquiriere, substraere o tuviere en su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años.

La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinados a causar

daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de substancias o materiales mencionados en el párrafo anterior.

La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de tres a seis años.

La pena será de tres a ocho años de prisión o reclusión, en caso de acopio de armas. Si se tratare de armas de guerra la pena será de tres a diez años de prisión o reclusión.

Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que tuviere o acopiare municiones correspondientes a armas de guerra, piezas de éstas o instrumental para producirlas.

14. Elévase la escala penal correspondiente al artículo 209 del Código Penal fijándose la misma en prisión de dos a seis años.
15. Auméntase la escala penal correspondiente al artículo 210 del Código Penal, fijándose la misma en prisión o reclusión de tres a diez años. Y agrégase a dicho artículo, como párrafo final, el siguiente:

Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

16. Elévase a prisión de dos a seis años la pena establecida en el primer párrafo del artículo 211 del Código Penal, y a prisión de tres a diez años la fijada en el segundo párrafo del mismo.
17. Substitúyese el artículo 212 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

18. Substitúyese el artículo 213 bis del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación

19. Elévase a tres años de prisión la pena mínima establecida por el artículo 226 del Código Penal.

20. Agrégase como segundo párrafo del artículo 292 del Código Penal el siguiente:

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.

21. Agrégase como segundo párrafo del artículo 293 del Código Penal el siguiente:

Si se tratare de los documentos mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de tres a ocho años.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

José Antonio Allende. — Aldo Hermes Cantoni.

INFORME

Honorable Cámara:

La comisión adhiere a los fundamentos expuestos en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

Jesús E. Porto.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

La reforma que propiciamos es ampliación y reelaboración de los proyectos que, oportunamente, enviara el Poder Ejecutivo nacional a vuestra honorabilidad.

La inclusión del inciso 4º al artículo 80 del Código Penal, prevista en términos semejantes en los proyectos nacionales de 1937 y 1960, responde a la idea de someter a la más severa sanción, hipótesis cuya existencia abona la experiencia cotidiana, y en las que se aúnan a la más grande peligrosidad de sus autores, la mayor indefensión de las víctimas.

La sanción del proyectado artículo 142 bis es de vastos alcances y, con las circunstancias calificativas de agravación que contiene, obedece a la necesidad de reprimir severa y adecuadamente conductas que al presente, por su notable auge, no es posible disimular y han llegado de zozobra a la población. Con él se logra ampliar el tipo penal correspondiente en lo relativo a la acción material y en lo que concierne a su elemento subjetivo; agravar la sanción en todos los casos, llevándola a límites que, por supuesto, impiden la excarcelación y resultan ajustados a la extrema peligrosidad demostrada por sus autores, y agravarla aún más cuando las víctimas fueren mujeres, menores de dieciocho años de edad, parientes o personas merecedoras de respeto particular o se ocasionaren graves daños o la muerte del ofendido.

Se prevé, mediante la incorporación al Código Penal de los artículos 149 bis y 149 ter, la debida represión del delito genéricamente denominado de amenazas y coacción, y que una vieja tradición legislativa considera como atentado a la libertad individual. Las diversas escalas que se proponen, en razón de la distinta naturaleza de ambas especies delictuosas, los medios empleados y los propósitos perseguidos por los autores, contemplan otras tantas situaciones que, por la personalidad de sus responsables y la natural incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados, resultan acabadamente satisfactorias para lograr la más amplia y justa protección de intereses jurídicos del más subido respeto.

La reforma propuesta a los artículos 166 y 167 del Código Penal, relativos a los robos calificados, encuentra su propia razón de ser en la experiencia diaria. Se considera que el uso de armas, en todos los casos, debe ser merecedor de un más severo castigo por los riesgos que ello importa para la víctima y su mayor estado de indefensión, que es también particularmente tenido en cuenta cuando el robo, aun sin el empleo de aquéllas, tiene lugar en despoblado y en banda.

También se incorpora el artículo 189 bis, destinado a reprimir conductas muy frecuentes y que no tienen ninguna justificación en los tiempos que corren. Se prevén, por un lado, atentados contra la seguridad común, de los bienes o las personas, adelantando el momento de consumación hasta castigar la mera tenencia de materiales peligrosos, como lo exige el subido valor de los intereses comprometidos; y para no llevar la disposición a límites incompatibles con las libertades individuales, se la ciñe merced a la exigencia de definido propósito en el autor: «el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos». Este último agregado obedece a la necesidad de cubrir el vacío que provocaría la modificación incluida en el presente proyecto, del artículo 212 del Código Penal.

Comprende el artículo, asimismo, el dar instrucciones para la preparación de aquellos elementos y materiales, con lo cual se intenta impedir la difusión de técnicas susceptibles de crear riesgos a la población y el Estado.

También la tenencia de armas de guerra, así como su acopio y el de municiones, está prevista en el texto que se ha proyectado mediante diversas escalas penales que cubren adecuadamente las diversas situaciones que puedan presentarse. El propósito es el de llegar a un estricto control, por parte de la autoridad correspondiente, de todos esos elementos.

La reforma que se auspicia con relación a los artículos 212 y 213 bis del Código Penal tiende a sancionar, como delitos de pura actividad, ciertas formas de conducta altamente peligrosas. Se procura, por el primero, la re-

presión de aquellos que integran asociaciones que al recurrir a medios absolutamente incompatibles con un régimen republicano —en el que el cambio de ideas y la crítica constructiva por parte de todos los sectores de opinión no sólo es permitida sino alentada por el gobierno— se colocan, por esa sola circunstancia, al margen de la sociedad. Y se persigue, con el segundo, desterrar la incitación a la violencia colectiva e indeterminada que, no teniendo las características que presenta el delito previsto en el artículo 209, de otra manera quedaría impune.

Los agregados a los artículos 292 y 293 del mismo cuerpo legal están dirigidos a sancionar en forma particularmente severa, tanto que resultarían no excarcelables, aquellas falsificaciones materiales e ideológicas en documentos públicos que, por recaer sobre aquellos destinados a acreditar la identidad de las personas, se convierten, en la práctica, en verdaderos actos preparatorios de los más graves delitos.

El aumento de las escalas penales correspondientes a los artículos 141, 142, 168, 169, 170, 209, 210, 211 y 226 del Código Penal, reconoce por causa la necesidad de reprimir más severamente las conductas a que se refieren, en razón de la intranquilidad que despiertan en la población, la peligrosidad demostrada por sus autores y la potencialidad ofensiva que invisten por las consecuencias que de ellas puedan derivar.

La supresión de la frase «o con propósito de lucro» en el artículo 142, inciso 1º del Código Penal, resulta impuesta por la reforma que se propone al artículo 142 bis de la misma ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.

Benito Llambi. — Antonio J. Benítez.
— Angel F. Robledo.

MENSAJE Nº 559

En disidencia total

En disidencia total en razón de estimarse indispensable contar con la opinión de los integrantes de la comisión creada por el artículo 5º de la ley 20.509. De ser necesarias las modificaciones, las mismas se incorporarían en el proyecto que producirá la mencionada comisión. Igualmente se discrepa con la iniciativa toda vez que la misma importa un retroceso con la legislación penal del actual gobierno, concretada a través de las leyes 20.509 y 20.510.

Juan Carlos Cárdenas.

En disidencia total

Encontrándose en funcionamiento la comisión de reforma de las leyes penales, creada por el artículo 5º de la ley 20.509, no resulta aconsejable modificaciones parciales.

En cuanto al fondo del proyecto, la disidencia total encuentra su fundamento en el hecho de que implica un retroceso en la política concretada a través de las leyes 20.509 y 20.510.

Vicente Miguel Musacchio.

**Disidencia formulada por el señor diputado
Valenzuela**

Honorable Cámara:

Examinado en la Comisión de Legislación Penal el proyecto sobre reformas al Código Penal, venido en revisión del Honorable Senado, y teniendo en consideración la filosofía que inspira al precitado proyecto es que presento a vuestra honorabilidad este dictamen en disidencia total, por los fundamentos que a continuación paso a exponer:

19 — El proyecto en cuestión tiende a la reforma de una veintena de artículos del Código Penal y a la creación de nuevas figuras delictivas, reforma ésta que no ha tenido otra originalidad que la elevación simple y llana de la escala penal de los respectivos delitos cuya modificación se pretende.

Compartimos la inquietud generalizada acerca de la necesidad de la reforma integral de nuestro Código Penal, pero entiendo que tal cual está concebida la presente, constituye un injerto draconiano en una legislación de neto corte liberal. No se intenta ensamblar el proyecto en cuestión con indispensables modificaciones a la «Parte General» de nuestro Código, ni la adecuación de las normas procesales vigentes, que ya fueran modificadas, morigerándolas, haciéndolas más benignas por esta Honorable Cámara, en fecha reciente.

20 — Existe por otra parte un antecedente significativo: la sanción por parte de esta misma Honorable Cámara y del Honorable Senado, de la Ley de Amnistía y la derogación de toda la legislación represiva, significativamente similar a las reformas que estamos tratando. Si en aquella oportunidad uno de los argumentos de peso que se utilizaron para la sanción de la «ley del olvido» fue evidentemente que resultaba absurdo pretender detener la escalada delictiva en el país con la simple elevación de la escala penal de los distintos delitos. Que la «violencia de arriba engendraba la de abajo», que había que mejorar las condiciones de vida del pueblo tendiendo a una más equitativa distribución de la riqueza, fueron expresiones comunes a todos los que, en mayor o menor medida, tuvimos intervención en aquellas jornadas históricas. El «Gobierno del Pueblo» había recibido la pesada herencia de una crítica situación económica y una estructura jurídica en materia penal de neto corte opresivo, draconiano. Es evidente, en consecuencia, que no podemos exigir del Poder Ejecutivo que en el corto lapso de seis meses se

modifiquen radicalmente las condiciones políticas, sociales y económicas de un país en crisis como el nuestro. Pero no es menos cierto que complacerlo en sus pretensiones de reformas como la que tratamos exige un ponderable esfuerzo dialéctico para justificarlas con argumentos que el 25 y 26 de mayo próximo pasado habíamos enjuiciado duramente y descartado por su inconsistencia. Todo ello sin contar, por supuesto, con la absoluta certeza que tenemos de que la escalada delictiva que sufre la sociedad no habrá de decrecer por el solo hecho de sancionarse una reforma como la que estamos tratando. Las estadísticas en el mundo así lo demuestran, lo que no ha impedido que sean desconocidas, al parecer, tanto por las empresas extranjeras cuyos representantes entrevistaron al ministro del Interior en fecha reciente, como para los propios asesores políticos y jurídicos del señor presidente de la República.

39 — Por otra parte, debo manifestar a vuestra honorabilidad que no hemos recibido la información técnica del nivel necesario, adecuada, como para justificar algunas de las reformas propuestas. Tal el caso del proyectado artículo 189 bis del Código Penal, que reprime la tenencia de armas de guerra o de explosivos. Entendemos que no se puede dejar librado al arbitrio del Poder Ejecutivo la determinación, por decreto y/o resolución, del significado de «armas de guerra», toda vez que de la mayor o menor amplitud o elasticidad con que se presente el problema —criterio que podrá caprichosamente cambiar según las circunstancias— dependerá la mayor o menor amplitud con que se aplique la ley de fondo, cuyas penas oscilan entre los tres a ocho años para el delito más benigno, o los cinco a quince años para el más grave. Todo, sin contar las causas calificantes.

Por todo lo expuesto, y por las razones que exponremos en el recinto, solicito a vuestra honorabilidad el rechazo en todas sus partes del proyecto en cuestión.

Buenos Aires, 5 de enero de 1974.

Héctor R. Valenzuela.

**Observaciones formuladas por el señor
diputado Day y otros**

Buenos Aires, 10 de enero de 1974.

Señor presidente:

El dictamen de mayoría propicia resucitar normas represivas las que, inmediatamente de instalado el gobierno constitucional, fueron separadas de la legislación positiva argentina, en uno de los primeros actos que efectuara el Honorable Congreso, con idéntica composición representativa que en la actualidad.

Dejamos señalada nuestra protesta mediante esta disidencia total; ello así porque pensamos que las leyes represivas con penas exageradas

no son instrumento adecuado para frenar o disminuir la acción de cualquier tipo de delincuencia. Otros son los métodos que sigue la ciencia penal moderna, así como también distinta debe ser la filosofía que inspire la reforma del Código Penal.

No nos negamos a que la sociedad sea dotada de instrumentos legales que precisa para su defensa y el Estado para su desenvolvimiento, pero cualquier innovación en esta materia puede convertirse en retroceso, de no existir el suficiente estudio y el amplio debate; ambas cosas se nos niegan, ya que existe, por parte de la mayoría, el confesado propósito de impulsar las modificaciones, que cuestionamos, con urgencia, manteniéndose impermeable a sugerencias de posibles cambios.

Además, en la actualidad nuestro sistema penal permite que el gobierno pueda actuar, cumpliendo los fines que le indica la Constitución, por lo que nos resistimos a facilitar la sanción de una improvisada ley que amenace convertir a la Argentina de hoy en el país ocupado del ayer cercano.

Alberto Ricardo Day. — Carlos A. Fonte. — Francisco Alberto Latrubesse. — Mario Lavalle. — Manuel Ernesto Molinari Romero.

Modificación propuesta por los señores diputados Colello y Toller

Redactar el penúltimo párrafo del artículo 189 bis de la siguiente manera:

La pena será de tres a ocho años de prisión o reclusión, en caso de acopio de armas de guerra.

Sr. Presidente (Lastiri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Porto. — Señor presidente: el Poder Ejecutivo mandó al Honorable Congreso de la Nación un mensaje y proyecto de ley sobre reformas a una veintena de artículos de la parte especial del Código Penal, firmados por el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan D. Perón, y por tres de sus ministros, sus excelencias los ministros del Interior, embajador Benito Llambí, de Justicia, doctor Antonio J. Benítez, y de Defensa, doctor Angel F. Robledo.

En el Honorable Senado obtuvo amplia sanción, luego de un extenso debate donde actuó como miembro informante de la mayoría de la Comisión de Legislación General el doctor Alejandro Díaz Bialek, produciendo un enjundioso estudio, que mereció la aprobación del cuerpo, aunque con discursos en disidencia de los senadores de la Rúa y Perette.

Llegado el proyecto en revisión a esta Honorable Cámara fue pasado a su Comisión de Legislación Penal, que me honro en presidir y, en un primer momento, varios de sus miembros,

tanto de la bancada de la mayoría como de la minoría, nos sentimos tentados a efectuarle algunas reformas, con ánimo de perfeccionarlo, pues, como toda obra humana, nos pareció que adolecía de pequeñas deficiencias técnicas. Pero las propias autoridades de la Honorable Cámara y de nuestro bloque, y los señores asesores de los tres ministerios que habían intervenido en su redacción, reconociendo y compartiendo muchas veces nuestras observaciones y la posibilidad de su mejora, nos dijeron que, dado el auge que habían experimentado últimamente cierto tipo de delitos, era indispensable para el gobierno contar en el más breve término con la ley proyectada a fin de poder luchar con más eficacia contra esa delincuencia, garantizando así mejor los bienes jurídicos de la población y llevando a ella tranquilidad.

La comisión efectuó, no obstante, otras reuniones, en conjunto a veces con la de Justicia de esta Cámara, y con asistencia, a una de ellas, de los señores presidente y vicepresidente de la Honorable Cámara, con más el jefe de nuestra bancada, el señor ministro del Interior, el de Defensa, el señor subsecretario del Ministerio de Justicia, el señor jefe de la Policía Federal y varios asesores letrados de los citados ministerios y repartición, donde todos los asistentes, con distintas argumentaciones jurídicas, políticas y estadísticas insistieron, aunque respetuosamente en última instancia de las decisiones de esta Honorable Cámara, en la necesidad de una pronta vigencia de este instrumento legal por considerarlo indispensable para la lucha contra tal criminalidad. Lo mejor era enemigo de lo bueno. El tiempo apremiaba. Las exposiciones escuchadas nos convencieron a los miembros firmantes del despacho de la mayoría de la comisión de que el proyecto debía ser sancionado en la misma forma en que había venido aprobado por el Honorable Senado de la Nación.

El ahorro de tiempo resultaba más valioso que la perfección de la obra, y ante esta consideración utilitaria y estimando que el proyecto de ley es útil para el propósito perseguido y está bien pensado y logrado en términos generales, y luego de nuevas reuniones, resolvimos aprobarlo por mayoría y produjimos despacho que fundamentamos en las razones expuestas en su mensaje por el Poder Ejecutivo. Como miembro informante de la comisión y en nombre de ella, adhiero, también en este acto, a los medulosos y sintéticos razonamientos del doctor Díaz Bialek en sus discursos en el Honorable Senado con motivo del tratamiento de este asunto.

El proyecto tiene como fundamento la frecuencia actual, el auge, el incremento de los delitos que trata, lo que obliga al Estado a defender a la sociedad, a garantizar mejor la tutela jurídica, la protección jurídica, la defensa social contra ellos, ya que atentan contra los bienes fundamentales de sus componentes: la vida, la libertad, las instituciones, la propiedad, la segu-

ridad pública, el orden público, etcétera, y han ocasionado grandes daños y creado el desasosiego, la intranquilidad y el repudio de la población, que ve atacadas a sus instituciones fundamentales, a sus dirigentes políticos y gremiales y a sus empresarios, al punto que muchos de éstos se han ido, o amenazan con irse del país, con el consiguiente daño para su economía y sus fuentes de trabajo.

Se ha alterado así la paz social que nuestro jefe, el general Perón, considera indispensable para reconstruir la República, demolida espiritual y materialmente por los años de la reciente dictadura, y para liberarla definitivamente de su yugo de dependencia de los imperialismos extranjeros.

El aumento ha sido, esencialmente, de los ilícitos consistentes en asesinatos de dirigentes, de funcionarios o de personas destacadas, mediante la actuación de varios victimarios; en atentados contra el Ejército y las fuerzas de seguridad; en secuestros, robos, explosión de bombas, fabricación o tenencia de explosivos poderosos, o de armas, generalmente de guerra y a veces en grandes cantidades; en amenazas y coacciones, extorsión, incitación a la violencia, y una serie de hechos colaterales o coadyuvantes con éstos, como la organización de bandas o agrupaciones delictivas, falsificación de ciertos documentos, intimidación pública, etcétera.

Hasta los más grandes opositores públicos que ha tenido este proyecto, los senadores radicales antes citados, han reconocido en el debate de la Cámara alta que existe un recrudecimiento de la violencia y de aquellos delitos en la República, que ellos también repudian, afirmaciones que no se compadecen mucho con el voto que finalmente emiten.

Estos hechos criminales han venido sucediéndose casi a diario, cometidos usualmente por un pequeño número de personas, pero el domingo 20 de este mes, una partida de terroristas, compuesta de unas 60 personas, intentó tomar por asalto el Regimiento de Tiradores Blindados C 10, con sede en Azul, con el resultado de que asesinaron al jefe de la unidad, coronel Camilo Gay, y a su esposa, mataron alevosamente a soldados —que podrían haber sido nuestros hijos que nutren al Ejército—, hirieron a un oficial y a un suboficial y huyeron, finalmente, llevándose como rehén al teniente coronel Ibarzábal.

Estamos ante un hecho gravísimo ejecutado contra el gobierno del pueblo y contra las instituciones que lo sustentan, por individuos al servicio de intereses bastardos, que no desean el reencuentro nacional, sino que pretenden sembrar el caos y el terror, oponiéndose a la voluntad prácticamente unánime del país, pretendiendo la destrucción de la República y del régimen de vida de sus habitantes. La genialidad de nuestro conductor, el excelentísimo señor presidente de la República, se puso una vez

más de relieve porque, precisamente para contribuir a evitar hechos como el que ahora lamentamos, había previsto, con más de dos meses de anticipación a ese gravísimo y luctuoso suceso, la ley que estamos tratando.

Para evaluar adecuadamente lo ocurrido, nada me parece mejor que reproducir textualmente los principales párrafos del mensaje que, con firmeza y patriotismo, dirigió al país, pocas horas después de ese episodio, su excelencia el señor presidente de la Nación. El teniente general Perón expresó: «El gobierno del pueblo, respetuoso de la Constitución y la ley, hasta hoy ha venido observando una conducta retenida frente a esos desbordes guerrilleros que nada puede justificar en la situación que vive la República...

»Anhelamos la paz y propendemos a la unión y solidaridad de todos los argentinos, hoy ocupados en la reconstrucción y liberación nacional. Pero todo tiene su límite. Tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se ataca una institución nacional con los más alevosos procedimientos, está demostrando palmariamente que estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado, al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales...

»Ya no se trata sólo de grupos de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foráneas, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúan mediante la simulación de móviles políticos tan inconfesables como inexplicables.

»En consecuencia, ni el gobierno, que ha recibido un mandato popular claro y plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana, ni tolerar el abierto desafío a su autoridad, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal de esta banda de asaltantes...

»Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones, que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro.»

Nadie podrá negar que el Estado tiene como una de sus principales obligaciones la de defender a la sociedad contra la delincuencia. La legítima representación del pueblo que este gobierno ejerce lo obliga a defenderlo contra las agresiones internas y externas, en primer término, y luego a conseguir su bienestar material y espiritual.

Pese a toda la alharaca periodística y muchas veces de pura propaganda política que ciertos e importantes dirigentes han hecho criticando hasta con injuriosas palabras al proyecto, debemos destacar, de entrada, que sólo se trata de una reforma cauta y moderada que consiste, con una sola excepción, en la elevación de las penas y la más precisa y adecuada configuración de tipos o delitos ya existentes todos en el Código Penal en vigor, bien desde su promulgación por la ley 11.179, de 1921, bien desde la sanción de la ley 15.276, de 1960, durante el gobierno del doctor Frondizi, que también está vigente; bien desde la sanción de la ley 16.648, de 1964, durante la presidencia de ese gran ser humano que es mi distinguido amigo el doctor Illia y que fuera propuesta por su partido político, según un proyecto del penalista Ricardo C. Núñez y que mereciera el apoyo de otros movimientos políticos que están representados hoy en esta Cámara.

La ley 15.276 crea el artículo 212 vigente en el actual Código Penal y con él los delitos de fabricación o tenencia de explosivos o de armas de guerra o de divulgación de su forma de fabricación, considerando agravante el acopio de esos materiales. La ley 16.648, entre otras numerosas reformas que agravan sus figuras y penalidad, incorpora al código su actual artículo 213 bis donde, en sus cuatro incisos, se incrimina, por primera vez en la legislación argentina: en su inciso 1º el delito de formar parte de agrupaciones que, aun sin ser la banda del artículo 210, tienden a imponer sus ideas ilícitamente; en su inciso 2º, el de realizar propaganda que propugne la discriminación racial o religiosa; en su inciso 3º, el de incitar a la violencia o realizar actos de violencia individual o colectiva contra grupos de personas de otra raza, religión, color u origen étnico; y en su inciso 4º, el de instigar pública e idóneamente a los militares a desobedecer las leyes, o sus deberes específicos, para comprometer el orden público.

Esto que parece sorpresivo es tan cierto que si consideramos que el artículo 142 bis del proyecto tiene base en el artículo 170 del Código, sólo se introduce con éste un delito nuevo —la excepción de que hablamos antes—, consistente en las amenazas y coacciones, que si bien es cierto que no está delimitado como tal en el actual código, sí lo estuvo en el anterior de 1887, de donde, inconsultamente, fue borrado por el artículo 20 de la ley de reformas 4.189, de 1903. La no existencia de este delito es una rémora de nuestra legislación, ya que goza de una honda, arraigada y antigua tradición legislativa, al punto de estar vigente en casi todas las legislaciones del mundo y en muchos de nuestros precedentes nacionales y proyectos de sustitución del actual Código Penal, puesto que, en definitiva, no hace sino dar protección legal al principio del artículo 19 de la Consti-

tución Nacional de que nadie está obligado «a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe».

Tienen este delito el proyecto de Código Penal de Tejedor, parte 2ª, libro I, título 6º, párrafo 5º, artículos 1º a 5º; el Código Penal de la provincia de Buenos Aires del año 1877, artículos 296 a 300; el proyecto de Código Penal de 1881, artículos 234 a 238; el Código Penal de 1887, artículos 168 a 171; el proyecto de Código Penal de 1891, artículos 177 a 179; el proyecto de Código Penal de 1937, artículo 188; el proyecto de Código Penal de 1941, del doctor Peco, artículos 176 y 177; el proyecto de Código Penal de 1960, artículos 191 a 193; el código penal brasileño, artículos 146 y 147; el código penal uruguayo, artículos 288 a 290; el código penal peruano, artículos 222 y 224; el código chileno, artículos 296 y 297; el código boliviano, artículos 600 a 602; el código colombiano, artículos 298 y 299; el código mexicano, artículo 282; el código costarricense, artículo 249; el código cubano, artículos 185 y siguientes; el código paraguayo, artículos 280 y 281; el código guatemalteco, artículos 380, 381 y 470; el código ecuatoriano, artículos 352 y siguientes; el código español, artículos 493, 494 y 496; el código francés, artículos 305 a 308; el código italiano, artículos 610 a 612; el código griego, artículos 330 a 333; el código suizo, artículo 181; el código alemán, artículos 240 y 241; el código sueco, artículos 222 y 227; el código noruego, artículo 222; el código finlandés, XXV, artículos 12 y 13; el código polaco, artículos 250 y 251; el código holandés, artículo 284, 1º; el código australiano, artículos 98 y 99; etcétera.

Sr. Monsalve. — ¿Por qué no nos hace el favor el señor diputado de leer esos artículos?

Sr. Porto. — Nos parece que tan copiosos antecedentes son más que suficientes para respaldar la inclusión de este ilícito en el Código Penal.

Pero resta aún decir que el proyecto que estamos tratando suprime dos figuras del Código Penal, las de los incisos 2º y 4º del artículo 213 bis, vigentes desde la sanción de la ley 16.648, del año 1964, propuesta por el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo y votada por legisladores de otros bloques.

Se ha dicho de este proyecto que es draconiano, que constituye un injerto en el código, que sólo aumenta las sanciones y que no conseguirá con ello disminuir la criminalidad, y otra serie de cosas por el estilo. La ley 16.648, de 1964, dictada por los radicales con el apoyo de otras bancadas del Congreso, que modificó como veinticinco artículos del Código Penal entonces vigente —reformas que aún subsisten—, consiste en la creación de tres delitos, entre ellos algunos ideológicos, y por ello repudiados del artículo 213 bis, amén de los artículos 268 (1) y 268 (2); en la ampliación y modificación agravatoria de figuras como los artículos 218,

222, 157, 261, 256, 258, 259 y 302; en el aumento de las penas de los artículos 226, 229, 230, 265, 266 y 267; en el cambio así mismo de vocablos en los artículos 226 y 229 citados; y en la modificación en contra del imputado de dos cánones de la parte general: los artículos 67 y 73, además de derogar algunos decretos leyes.

¿Esta ley se salva de los reproches que injustamente se le quieren hacer a la que estamos debatiendo? ¿O es que cuando los otros partidos injertan, aumentan las penas, crean nuevos delitos y agravan los existentes no hay tales injertos ni agravaciones, aunque sumen alrededor de veinticinco, y sí cuando pretende hacerlo el peronismo, es decir, el gobierno auténticamente representativo del pueblo?

Sr. Day. — El señor diputado está dando el tono del debate.

Sra. Guzmán de Andreussi. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Porto. — No permitiré ninguna interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Lastiri). — Sirvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

Sr. Porto. — ¿O es que nos olvidamos que esta Cámara votó así mismo la que fuera llamada ley de emergencia 15.293, de 1960, con el apoyo escrito y el voto de legisladores no justicialistas que se sientan en este recinto actualmente, ley para la represión del terrorismo, que negaba el beneficio de la excarcelación bajo caución y la condenación condicional, y que abarcaba incendios, explosiones, inundación u otros estragos, etcétera, y que tenía penas de reclusión o prisión, según los distintos casos de los delitos antes citados: de ocho a quince años, de diez a veinte años, de quince a veinticinco años, de reclusión o prisión perpetua, además de otras penas menores?

Y no nos olvidemos que esta ley había sido propuesta en 1960 por el Poder Ejecutivo, incluyendo en ella la pena de muerte. Esta ley 15.293, repito, de 1960, introducía además los delitos de: 1º, suscitar tumultos o desórdenes que, cuando ocurrieran con armas de fuego, agresivos químicos o materias afines, llevaba pena de hasta nueve años de reclusión o prisión; 2º, difusión de procedimientos para causar estragos; 3º, tenencia de armas, municiones y demás materiales considerados como de guerra; 4º, acopio de armas de fuego o municiones de uso civil, y 5º, la proposición o conspiración para cometer delitos de esa ley. Además, esta misma ley establecía la competencia federal para el juzgamiento de sus delitos y que el procedimiento sería sumarísimo. Fue derogada por el decreto ley 788 del año 1963, en época de Guido, aunque a costa de que ese decreto ley instituyera en sus 54 artículos muchas más incriminaciones, siguiendo la línea de la ley 15.293, y estableciera penas excesivamente grandes para numerosos delitos, incluso muchos sacados de la ley que derogaba.

¿Es que esas leyes, 15.276, 15.293 y 16.648, eran defensivas y nuestro proyecto, el del peronismo, es represivo? No, señores; el peronismo siempre se caracterizó porque para él el hombre, la dignidad del hombre, es el supremo valor, y todo debe estar a su servicio, y de ahí su doctrina de amor y de justicia social y de respeto por la ley, de modo que siendo todos esclavos de ésta nos salvaguardemos de serlo nuevamente algún día de algún tiranuelo.

Por eso el peronismo pide esta ley: para defender mejor esos valores. Todos sabemos muy bien que la sola instauración o agravación de las penas de los ilícitos penales no acaban por sí solas con los delitos, pero también todos sabemos que ellas son casi siempre, tal vez, el más importante medio de lucha contra ellos. Desde luego que el delito depende de una serie casi infinita de factores sociales, antropológicos, físicos, políticos y hasta de la existencia de luz eléctrica o de simples factores climáticos, cuales son el frío o el calor, pues es axiomático y acreditado por las estadísticas que en los países fríos hay menos delitos contra la honestidad y en cambio hay más robos, mientras que en los cálidos los delitos contra la honestidad abundan porque el desarrollo fisiológico es más prematuro y la necesidad sexual es mayor, y los robos disminuyen, porque el sustento está más fácilmente al alcance de la mano, y no hace falta calefacción ni casi casa habitación.

Nosotros no creemos que la pena sea una pancea y que constituya el único remedio contra el delito; pero que es importante no nos cabe duda alguna. De lo contrario, habría que admitir que la humanidad ha vivido, hasta ahora, siempre en el error, siempre equivocada, ya que en las más primitivas organizaciones humanas está acreditado, históricamente, que siempre tuvieron un sistema sancionador, por más primitivo que fuere, y está acreditado que todos los países que posteriormente se organizaron como Estados siempre definieron delitos y penas en sus leyes. Así lo hacen hoy todas las naciones civilizadas que tienen un complejo y muy elaborado sistema tipificador de crímenes y de sanciones, generalmente en forma de códigos escritos. No conocemos ningún autor que postule la derogación de este sistema. Para unos, como Kant, la pena es un mal; para otros, como Roeder o Dorado Montero, la pena es un bien tanto para la sociedad cuanto para el delincuente, como lo son los remedios para un enfermo; pero lo que ningún tratadista sostiene es que no deben existir penas porque son innecesarias e ineficaces para la lucha contra el delito.

Nosotros no subscribiríamos las palabras demasiado pesimistas del insigne filósofo Schopenhauer cuando dijo, refiriéndose a la pena, que el hombre es una fiera a la que la ley le impide morder colocándole un fuerte bozal. Ni las de Maquiavelo, cuando expresó que las leyes hacen buenos a los hombres. Pero si pensamos que puede tener razón Quintiliano cuando afirmó que la «indulgencia con los malvados hace que muchos se atrevan a cometer idénticos crímenes».

La pena debe ser proporcionada a la importancia de los bienes jurídicos agredidos, a la peligrosidad de sus autores, a la indefensión en que puedan estar las víctimas, a la frecuencia de ciertos hechos, a la alarma social que producen, a la perversión moral que revelan en sus autores. Dice Soler que «la mayor virtud de una pena legal es su perfecta coincidencia con la valoración media de los bienes que sanciona», y nadie podrá sostener que el secuestro o la tenencia de armas de guerra, o de bombas, tiene hoy en la Argentina, por la frecuencia y el desparramo con que ocurren, una misma valoración media, por el pueblo, como hace cincuenta años cuando el código actual entró en vigencia y esos hechos eran rarísimos. Las penas y los delitos, pese a su heterogeneidad, son pasibles de ser comparados, aplicándoseles así, a éstos, distintas medidas, según la importancia del bien jurídico tutelado, la peligrosidad que su vulneración revela en el autor y la intranquilidad pública que su acaecimiento genera. Se compara, se contrapone, el valor del bien jurídico lesionado con el disvalor del mal o de la sanción amenazada.

Lo contrario nos llevaría a pensar como Dracón, quien aplicaba el último suplicio a todos, pues razonaba que no encontraba ningún ilícito, por pequeño que fuera, que no mereciera la pena de muerte, y que en cuanto a los que comprendía que eran horribles, ya no tenía otra peor que aplicarles. Los ilícitos penales tienen, en todos los códigos, sanciones que se ajustan a aquellas ideas y que son mayores o menores, que son diferentes, para cada uno de ellos, según la importancia que se dé a su violación. Y no podrá negarse que nuestro pueblo, aun los señores senadores que se opusieron a este proyecto, repudian la violencia y los secuestros, quieren vivir en paz y en armonía, y están alarmados por la frecuencia e impunidad con que ocurren los hechos a que se refiere este proyecto, que tiende a dificultarlos mediante una prevención general y una prevención especial más eficaz contra los posibles infractores de la ley.

Decir que las penas no tienen importancia para acabar o disminuir los delitos nos parece casi absurdo porque, llevada esta postulación hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que sostener que deben derogarse todos los códigos penales, ya que la pena, que es su característica, no es apta para batallar contra el crimen. Bastaría con el derecho preceptivo, con el que indicase la conducta que se desea de los hombres sin amenazarlos con pena alguna. Este estado casi angelical no existe y todos los países y autores postulan penas como consecuencia de los delitos. Y las penas son tanto más graves cuanto más graves son los ilícitos y mayor alarma y peligro público producen. (*Aplausos prolongados.*)

Dijo Feuerbach que la fuerza que lleva a los hombres a delinquir es de naturaleza psíquica, son sus pasiones y sus apetitos, y por eso, como el Estado no puede ordinariamente coaccionar

físicamente para impedir los delitos, lo que hace es coaccionar psíquicamente, con anterioridad al hecho, de modo que los impulsos delictivos sean coonestados, haciendo que con la publicación de las penas que acarrearán los ilícitos «todos sepan que a su hecho le seguirá inevitablemente un mal mayor que el que deriva de la insatisfacción del impulso de cometer el delito».

Expresa Carrara que los hombres transgreden naturalmente las leyes, incluso las divinas, y que la pena tiende a tranquilizar, restableciendo en las gentes la confianza en la ley.

Para Merkel, el motivo de la pena se halla en la importancia valorativa que se acuerda ética y socialmente al acto a que accede y su fin es fortalecer el deber de no violar la norma. La escuela positiva del derecho penal puso de relieve, por boca de sus apóstoles Lombroso, Garófalo y Ferri, y de sus demás seguidores, que la pena es un medio de defensa social, ya que la sociedad es un organismo que se comporta como todos los organismos, mediante el principio de autoconservación.

Manzini expresa que «la pena está justificada por la necesidad de inducir a la observancia de determinados preceptos» fundamentales para la subsistencia de la sociedad. Agrega que «si la pena no existiese, los hombres de escasa inteligencia o resistencia moral, que, al menos en relación a los delitos menores, representan la gran mayoría delinquirían ciertamente, mientras hoy, en grandísima mayoría, se abstienen, retenidos por un cálculo de conveniencia». También expresa que el que ha delinquido «encuentra en la sujeción a las penas más graves una fuerza material obstativa, continuativa y realmente insuperable de su voluntad maléfica y, respecto de cualquier pena, un contraimpulso psíquico generador de autoinhibición para el porvenir». Por fin, y a esto nos parece importante llegar, advierte que la indudable utilidad de la pena se demuestra por la comprobación estadística de que la mayor parte de los delinquentes que la han sufrido no incurrir en reincidencias, no recaen en el delito.

Edmundo Mezger enseña «que la disposición criminal es un fenómeno común a todas las personas. La tendencia a realizar hechos criminales no se circunscribe, en el sentido de la teoría lombrosiana del delincuente nato, a una determinada especie humana, sino que como criminalidad latente, instintiva, existe en todos los hombres, incluso en los mejores», y es por eso por lo que estima indispensable la pena adecuada a la importancia de cada delito, a fin de que ella realice las funciones que le son propias, de prevención general, como contraimpulso al delito, y de prevención especial, sobre el autor aislado, al objeto de evitar futuros delitos.

Repito que decir que las penas no tienen influencia sobre el delito llevaría a la consecuencia lógica de que todos los códigos penales deben ser derogados y contradiría el hecho innegable ya señalado de que los condenados a

largas penas, en general, no reinciden. Es indudable que si no existieran penas, o éstas fueran demasiado leves, el número de hechos delictivos crecería.

Al afirmarse que las penas no tienen ninguna influencia sobre la criminalidad, se pretende extender un axioma que sólo se ha demostrado válido para la pena de muerte, ya que está estadísticamente probado, como puede verse en las que he recogido en mi libro *La pena de muerte*, que la existencia de ésta no determina ninguna disminución de los delitos en los países en los que se la introduce, ni su abolición produce un aumento de ellos en los que se la suprime. La pena de muerte sólo se la configura, en los códigos en que impera, para los delitos más graves, para aquellos que son cometidos por los delincuentes más feroces. Tomando la comúnmente aceptada clasificación de Ferri, de 1878, de los delincuentes dolosos en cinco grupos: natos, locos, habituales, ocasionales y pasionales —clasificación que en seguida mereciera la aprobación de Lombroso y de la mayoría de los antropólogos criminalistas, y que constituye hoy uno de los pilares fundamentales del derecho penal—, tenemos que los que cometen los más grandes delitos son los natos, locos, habituales o pasionales. Concuerdan con esto los maestros Dorado Montero, Cuello Calón, Ramos y mi admirado maestro Peco, quien, elegantemente, dice que «la pena de muerte no tiene imperio sobre los delincuentes profesionales e instintivos, impenetrables a la amenaza penal, y no puede aplicarse a los alienados y pasionales por innecesaria a la par que injusta». La pena de muerte intimida sólo a los delincuentes ocasionales que, en general, no son sino la gente de bien que difícilmente delinque y que, cuando lo hace, nunca comete los delitos más feroces, o sea aquellos que atraen el último suplicio. Por eso la pena capital no tiene influencia sobre la criminalidad, sino que la tienen más bien otros factores antropológicos, físicos y sociales.

Las penas privativas de la libertad, incrementadas en general con respecto al Código en la forma en que quedó vigente después de la sanción de la ley 20.509, que hicimos nosotros en mayo del año pasado, son en cambio efectivas con respecto al tipo de delitos de que trata el proyecto. Por eso apoyamos la reforma y conceptuamos que no es válido extender a todas las penas un argumento que sólo es correcto para la pena de muerte.

Expresa Eugenio Florián (*Parte General del Derecho Penal*, 1929, tomo I, página 2 y siguientes) que «si todos los hombres poseyesen una perfecta y elevada conciencia de sus deberes y de sus derechos y estuvieran dotados en igual grado de la virtud de obrar conforme a la misma, no habría violaciones a las normas que forman el derecho del pueblo; bastaría el derecho puramente preceptivo... pero el hombre es un desenfrenado violador de los mandatos jurídicos, y por ello surge el acto jurídicamente ilícito... y

de aquí la necesidad de que junto al derecho de las normas de conducta se coloque un derecho que podría llamarse de las sanciones», que con respecto «a la norma jurídica es su protección, la cual puede ser más o menos enérgica. Estas sanciones o consecuencias jurídicas del acto ilícito son de dos especies. Algunas veces basta, para la restauración del derecho violado, la aplicación de una disposición de naturaleza y de función privadas», cuando la violación no ha traspasado los confines del interés individual y estamos por ello sólo ante un acto ilícito privado y civil. «Otras veces, por el contrario, la violación del derecho va más allá del interés individual, lesiona al propio tiempo los intereses privado y público, o solamente este último. En este caso lesiona o perturba elementos o condiciones esenciales a la existencia del agregado social y la sociedad interviene entonces para protegerse a sí misma. Es el acto público o penal el que surge en este caso, al cual se contrapone una medida que no se limita a restablecer o a proteger el interés puramente privado ofendido, sino que castiga al infractor con un criterio y con una medida que van más allá del interés privado e invaden el amplio campo de los intereses colectivos o generales. El primer orden de disposiciones comprende las sanciones que pertenecen al derecho privado; el segundo corresponde a las sanciones que señalan la esfera de aplicación del derecho penal».

Siguiendo a Merkel, agrega Florián que hay una unidad esencial de las dos clases de actos ilícitos: civil y penal. El segundo interviene cuando el primero es insuficiente para proteger bienes jurídicos esenciales para la comunidad. Lo mismo afirma Giuseppe Maggiore cuando expresa que «la pena es la forma de coerción más intensa que la ley conmina, por su violación, cuando todas las demás sanciones serían insuficientes».

Desde un punto de vista extrínseco, señala Florián que el acto ilícito civil tiene como consecuencia una de estas cuatro: una obligación de dar, una obligación de hacer, una indemnización o la nulidad del acto. «El hecho ilícito penal, por el contrario, puede generar todas estas consecuencias legales, pero además de ellas, determina siempre una consecuencia especial, la pena», que constituye un plus para proteger más fuertemente algo cuya violación se trata de que no ocurra por ser indispensable a las condiciones de vida de la comunidad. «Las sanciones del derecho penal se aplican cuando resultan insuficientes las del derecho privado.» «La esfera del derecho penal es esencialmente variable, y así vemos que se amplía continuamente y en grado paralelo con el progreso y con el aumento de las relaciones jurídicas en el seno de la sociedad. Tan pronto como una forma de acto ilícito lesiona más vivamente los intereses generales y la vida de la sociedad, surge con mayor eficiencia y se afirma en relación con ella la sanción penal.»

En el proyecto tenemos que, frente a un incremento de ciertos delitos (secuestros, asesinatos, atentados contra las instituciones básicas, tenencia de explosivos o de armas de guerra) que lesionan muy vivamente los intereses generales y la vida de la sociedad, el Poder Ejecutivo propugna que surja, con mayor eficiencia, la sanción penal, incrementando sus topes máximo y mínimo y tipificando más precisa y adecuadamente algunas figuras ya existentes, todas ellas, en el Código Penal, salvo una.

Es cierto que el proyecto incrementa algunas penas, pero lo hace porque ello es necesario para defender y resguardar a la sociedad contra el incremento de los delitos de que trata, considerando que la medida de la pena tiene que tener en cuenta la naturaleza del bien jurídico, la peligrosidad del sujeto activo, su potencia ofensiva, la intranquilidad y el desasosiego que produce el ilícito, la indefensión de la víctima, la necesidad de la prevención general y de la prevención especial, siendo útil, para esto último, que ciertos delitos no sean excarcelables, porque la salida de los imputados implicaría su continuación en la mala vida, y también que las penas sean lo suficientemente largas para eliminar, primero, del consorcio social, a un individuo de alta peligrosidad, y para readaptarlo después mediante un tratamiento suficientemente largo. Cuando una ley, teniendo en cuenta todas estas cosas, mensura las sanciones, no puede decirse de ella que sea represiva, como se ha dado en decir de la que estamos tratando, sino que hay que decir que es defensiva, que ejercita justicieramente la defensa social contra el delito.

La probable y esperada eficacia de esta ley está demostrada, si algo faltara, por un hecho objetivo: las amenazas que nos han hecho llegar a los legisladores que la apoyamos quienes se sienten los probables destinatarios de ella. Repitiendo al Quijote podríamos decir: «Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos». (Aplausos prolongados.)

Se le ha reprochado al proyecto que rehabilita algunas figuras y penas que derogó el actual Congreso mediante la emisión de la ley 20.509. El hecho es cierto, pero el reproche es injusto. Nosotros derogamos, mediante la ley 20.509, todos los decretos leyes dictados con nombre impropio de ley por los gobiernos de facto habidos en el país entre 1966 y 1973, en materia penal, por un doble orden de razones: jurídicas unas y políticas las otras.

Jurídicamente hemos desconocido, por su origen, todo valor a los decretos leyes que instituyeron, en ese lapso, delitos y penas. No hicimos con ello sino seguir la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantenida entre 1930 y 1947, que comenzara con el caso «administración de impuestos internos contra Malmonge Negreda» y que terminara con el caso «Arlandini», fallado el 22

de agosto de 1947, y que consistió en sostener que los gobiernos de hecho pueden dictar decretos leyes en la medida indispensable para cumplir los fines de la revolución y mantener el funcionamiento del Estado, los cuales caducan una vez vuelto el país a la normalidad, dejando de tener efecto para el futuro, salvo que fueren ratificados por el Congreso, pero con la salvedad de que en materia penal tal legislación por decretos leyes sería inconstitucional por violar la garantía del artículo 18 de la Constitución, que consagra el principio «*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penale*».

Esta doctrina jurisprudencial fue mantenida por todos los parlamentos argentinos, desde 1946 hasta el presente, pues siempre se consideraron obligados a ratificar o convalidar esos decretos leyes dictando leyes ratificatorias. Puso en esa doctrina especial énfasis este Parlamento argentino, más ortodoxo jurídicamente que ninguno anterior, al debatir la expresada ley 20.509 en la noche del 25 al 26 de mayo de 1973. Que tal fue la doctrina motriz de esa derogación de los decretos leyes emitidos entre 1966 y 1973 fue puesto de relieve en el Senado tanto por el miembro informante de la mayoría, doctor Díaz Biale, como por el de la minoría, doctor de la Rúa. Fue también la doctrina del Parlamento en 1964, cuando se trató la ley 16.648, y la de Núñez, Jiménez de Asúa y Soler en esta misma oportunidad.

El gobierno representativo de la soberanía popular, surgido por amplia mayoría en libérrimas elecciones que encabeza el excelentísimo señor teniente general Perón, consciente de que el Estado de derecho no debe ser abandonado de ninguna manera y de que debe conseguirse la seguridad jurídica para los habitantes de nuestro suelo, a fin de erradicar la violencia, los secuestros, los asesinatos, no actúa como un Estado policial, no contesta a la violencia con la violencia, a la fuerza física con la fuerza física, sino que se somete a la Constitución y a la ley y pide al poder legislativo las armas jurídicas que estima indispensables, y muy urgentes, para garantizar a todos el libre goce de sus derechos y garantías contra los delincuentes. El gobierno solicita lo que considera indispensable, pero se somete al criterio del Poder Legislativo y a la ley. Perón, una vez más, con este proyecto demuestra al pueblo argentino todo que quiere gobernar con la ley y nada más que con la ley, dejando de lado toda arbitrariedad y discrecionalismo.

Políticamente, cuando dictamos las leyes 20.508 de amnistía de presos políticos y comunes conexos, 20.509 de derogaciones y modificaciones del Código Penal, 20.510 de derogación de normas de creación y funcionamiento de la Cámara Federal en lo penal, y 20.516 de modificaciones del régimen de la excarcelación, lo que buscamos fue restituir al consorcio social el mayor número de argentinos, para que trabajáramos todos juntos, en paz, para la reconstrucción de la República.

Especialmente quisimos efectuar un acto de justicia con los guerrilleros y combatientes populares, muchos de ellos verdaderos héroes y mártires, que se habían opuesto a la tiranía anterior, devolviéndoles la libertad que nunca debieron haber perdido, porque lucharon por nuestra independencia económica por la justicia social, por la libertad, por la democracia, por los derechos del hombre y del pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Pero un grupo de habitantes no ha comprendido esto así y no ha cejado en la violencia que se venía ejerciendo legítimamente contra la dictadura para desgastarla y destruirla, como en efecto ocurrió. Ese pequeño grupo ha seguido ejecutando los mismos actos de violencia que antes: siguen las bombas, los atentados a las instituciones, la tenencia de armas de guerra, los secuestros, los asaltos. Tales actos de violencia van ahora dirigidos, no contra la tiranía, como antes, sino contra el Estado de derecho republicano y contra el pueblo de nuestra patria. Hay sólo una similitud material entre la violencia de entonces y la de ahora, porque antes se iba contra la dictadura y ahora se va contra el gobierno popular y democrático, tratando de sembrar el caos y creando una gran intranquilidad y desasosiego en el pueblo. Se trata, una vez, de delincuentes comunes, y otras veces, de un pequeño sector que pareciera querer oponerse a la voluntad ampliamente mayoritaria de la ciudadanía, que ha consagrado por 7.500.000 votos, el 62 % de todos los emitidos, a Perón como presidente de la Nación; aunque debemos señalar que la doctrina que él representa consiguió, en esos mismos comicios, cerca del 90 % de adhesión de los ciudadanos.

Decían los romanos, esos maestros insuperables del derecho y de la política: «La salud pública es la suprema ley». Y bien, señores legisladores, el genio político de Perón, que no discute ni siquiera sus opositores, más de dos meses antes del asalto infame y cruel de Azul, estimó indispensable la pronta sanción de esta ley para restablecer la salud pública. La mayoría de la comisión aboga ante esta Honorable Cámara sin vacilación alguna, la pronta sanción de esta ley, que es necesaria para «afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino», según proclama el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. (*Aplausos prolongados.*)

Para terminar ahora este informe general, dejando el análisis de las disposiciones particulares para cuando se trate en especial este proyecto, quiero hacerme cargo de las principales críticas de que él ha sido objeto en el Honorable Senado por los doctores de la Rúa y Perette y en los informes en disidencia en esta Cámara

por los distinguidos señores diputados doctores Musacchio, Cárdenas y Valenzuela.

Sr. Presidente (Lastiri). — Me permite, señor diputado.

Ha vencido el término de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Pedrini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: si bien es cierto que ha vencido el término de una hora que correspondía al señor miembro informante, el señor diputado Porto va a hacer uso de la palabra computando el tiempo que corresponde a nuestro sector, de conformidad con el reglamento de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Lastiri). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Lastiri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Porto. — Se dice por casi todos los nombrados legisladores que, existiendo una comisión de reforma de las leyes penales, nombrada por el Poder Ejecutivo en virtud de las facultades que le diera el artículo 5º de la ley 20.509, es conveniente esperar la opinión de esa comisión sobre el proyecto, o que ésta dé cima a sus trabajos de preparación del nuevo Código Penal incorporando o no, a su texto, las normas del mismo.

En efecto, existe tal comisión, que se ha subdividido en tres, estando, por decisión de sus propios integrantes, compuesta la redactora del Código Penal con la presidencia del que habla, la vicepresidencia del penalista y jusfilósofo doctor Enrique J. Aftalión, la secretaria del penalista doctor Enrique Bacigalupo y las vocalías de los criminalistas diputados doctores Carlos L. Acevedo, José A. Catalano y Alberto Day y los profesores y magistrados doctores Alfredo Masi y Ricardo Levene.

Esta comisión recién ha podido terminar, bajando a presión, y con la muy buena voluntad de todos, la primera redacción, o borrador, de la parte general, o libro I, del futuro Código Penal. No ha tenido tiempo material para empezar la consideración de la parte especial, o libro II, a que pertenecen todas las reformas que estamos tratando. Los componentes de la comisión redactora del Código Penal hemos estimado que no podremos culminar nuestra tarea sino en un plazo de dos a tres años. Y el país no puede esperar porque debe salir inmediatamente al cruce de la violencia delictiva que lo aqueja.

Nuestra Nación tardó cinco años en darse el actual Código Penal, sancionado por la ley 11.179, de 1921. Nuestro primer Código Penal fue puesto en vigencia, por la ley 1.920, de 1886, como veinte años después de que Tejedor realizara nuestro primer proyecto de Código Penal

de 1865-1867, y más de setenta años después de nuestra formación como Nación independiente. Suiza tardó cincuenta años, desde que comenzaron por Carlos Stooss los trabajos, en darse su actual código penal.

Alemania hace muchísimos años que está trabajando en la redacción de un nuevo código penal que substituya al vigente desde 1871. Y así todos los países del mundo. La tarea de redactar un código penal completo lleva muchos años y por eso todas las naciones optan por ir reformando de a poco el vigente, a medida que las nuevas necesidades sociales lo imponen, mediante reformas parciales como la que estamos tratando. Así lo ha hecho Francia, por ejemplo, en la que aún impera, con numerosas reformas parciales, el Código Penal de Napoleón del año 1810. Y nuestro actual Código Penal de 1922 no es una excepción, pues desde entonces hasta su actual forma ha sufrido decenas de reformas parciales o «injertos», como han dado recientemente en llamarle algunos señores legisladores.

La impunidad es, por cierto, uno de los mayores factores productores de delitos. Las mejores estadísticas, que pueden verse en mi libro mencionado antes, prueban que en todos los países del mundo es importante el porcentaje de delitos no descubiertos y de procesados, presumiblemente autores, contra los que las pruebas son insuficientes. En nuestro país, estas cifras de los delitos impunes, compiladas por Rodolfo Moreno (h) y por Alfredo L. Palacios, muestran que, ya entre los años 1923 y 1931, alrededor del 50 % del total de delitos ocurridos en la Capital Federal quedaron sin descubrir, y que, sumados a ellos los imputados que resultaban absueltos por falta de pruebas, no es aventurado afirmar que, durante esos años, alrededor del 75 % de los delitos ocurridos quedaron sin sanción. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires entre los años 1920 y 1931. Pero, pese a esa elevada impunidad entonces existente, a nadie se le ocurrió que el remedio fuese suprimir o atenuar los delitos y penas, pues un hecho de tal naturaleza seguramente aumentaría el número de crímenes.

No es exacto, como ha dicho el doctor de la Rúa, que nuestro código se encuentre, con respecto a las penas privativas de la libertad, entre los más represores del mundo, pues cuando no proceden las perpetuas, su máximo llega a veinticinco años, mientras que la tendencia universal limita la pena privativa de la libertad a quince años, como lo hace el código alemán —dice— y está por hacerlo Italia.

Afirmamos que el Código Penal alemán de 1871 tiene la pena de muerte, que nosotros no tenemos, y tiene también la pena de reclusión perpetua, de modo que es lógico que pueda limitar esa sanción, para los delitos menores, a quince años. Italia tiene, en su código de 1931, la pena de muerte, la terrible del *ergástulo* que

es perpetua, y la reclusión que puede llegar a los veinticuatro años (artículos 17, 21, 22 y 23). Los soviéticos, incluso, que a pesar de que tenían la pena de muerte no autorizaban la prisión por delitos comunes por más de diez años, han tenido que aumentarla a veinticinco años. El Código Penal de Colombia de 1924 tiene, en su artículo 65, la pena de presidio por tiempo indeterminado y, por su artículo 143, el presidio temporal que puede durar hasta veinticuatro años. El Código Penal del Perú de 1924 tiene, en su artículo 11, el internamiento absolutamente indeterminado más allá de los veinticinco años, y en el artículo 12 la pena de penitenciaría hasta veinte años. El Código Penal español, luego de su reforma de 1944, tiene, en su artículo 27, la pena de muerte, y en el 30 la reclusión mayor de veinte años y un día a treinta años. El código del Paraguay de 1914, en su artículo 62, tiene la pena de muerte y la de penitenciaría hasta por treinta años. El código de Chile, según su edición oficial de 1949, tiene, en su artículo 21, la pena de muerte, la de presidio perpetuo y la de reclusión perpetua, y en su artículo 25 la de presidio mayor hasta por veinte años. El código persa de 1928 tiene la pena de muerte y la de trabajos forzados a perpetuidad. El código de Colombia posee en su artículo 45 la pena de presidio hasta veinticuatro años. En muchos códigos penales de los Estados Unidos de América, pues es sabido que allí cada uno de los cincuenta y dos Estados tiene su código penal, por el sistema de la acumulación material o aritmética para el concurso real de delitos que en ellos impera, es posible aplicar, y se aplican, a un reiterante en varios ilícitos, sanciones que lleguen a cincuenta, setenta y cien años de privación de la libertad, es decir, a más de lo que presumiblemente vivirá el condenado.

Se ha dicho que este proyecto impide, en muchos casos, la excarcelación, al elevar a tres años el mínimo de las penas. Es exacto, pero en todas partes del orbe se impide la excarcelación para ciertos delitos cuando verosíblemente el imputado ha de proseguir cometiéndolos si recupera en seguida su libertad. Tal es el caso de los componentes de una asociación ilícita, o banda, donde sus integrantes se han agrupado, o asociado, para cometer delitos indeterminadamente. Por eso este tipo legal estaba excluido expresamente en el Código de Procedimientos de la Capital Federal antes de su reforma por la ley 20.516, y resultará ahora también inexcusable.

Tampoco podemos subscribir la afirmación del senador de la Rúa de que el delito del artículo 142 bis del proyecto sea un delito político. Es típicamente un delito común y, más precisamente, una figura agravada de la figura básica del artículo 141 del Código Penal.

No es cierto lo afirmado por el senador Perette de que durante el gobierno constitucional

de 1963-1966 se derogaron todas las leyes represivas, porque de esa época es, precisamente, la instauración del artículo 213 bis, por la ley 16.648, de 1964, en la forma aún existente en el Código Penal, que todos estuvieron contestes en que era de persecución ideológica, y del que, precisamente, el proyecto del Poder Ejecutivo suprime dos de los delitos previstos en sus cuatro incisos, precisamente para acabar con tal acusación. Y mucho menos es ello cierto cuando recordamos, como ya hemos explicado antes, que en esa ley 16.648 se crearon tres delitos y se agravaron, en sus penas y/o en su *tabestand*, en su tipo, alrededor de veinte delitos más.

No es exacto que la reforma de algunas disposiciones de la parte especial de un código requiera condignas modificaciones de la parte general. Es todo lo contrario; normalmente no hace falta modificar disposición alguna de ella. Tanto es así que a veces se confecciona, primero, la parte general de un código y luego la parte especial. Así lo hizo Tejedor, entregando su libro I en 1865 y el II en 1867. El actual Código Penal francés fue sancionado en siete leyes sucesivas, entre el 12 y el 20 de febrero de 1810.

No puede sostenerse que el Código Penal es de corte liberal, cuando Jiménez de Asúa y Peco han dicho que es un documento político-criminal, y yo agregó que otros autores lo encuentran también algo influido por la escuela positiva. Ni puede decirse que la pena mínima del proyecto para la tenencia de armas de guerra sea de tres a ocho años cuando lo es de tres a seis años.

Tampoco puede afirmarse que el Poder Ejecutivo no ha dado las razones en que fundamenta su iniciativa, pues nos ha enviado un mensaje de varias páginas fundamentándola; y tampoco puede afirmarse que no hemos recibido suficiente información técnica del nivel necesario para sustentar algunas de las reformas propuestas, como la del artículo 189 bis, pues han venido asesores de los tres ministerios que subscriben el proyecto han venido dos de los tres ministros y el subsecretario del faltante, ha venido el jefe de Policía, y nos han dado razones y hasta estadísticas.

Por otra parte, está muy mal buscado el ejemplo de este artículo 189 bis, que reprime la tenencia de armas de guerra o de explosivos, porque no es sino la reproducción perfeccionada del delito del artículo 212 ya existente en el Código Penal desde 1960, en que fuera incorporado al mismo, repito, por la ley 15.276, de manera que la información técnica al respecto existe desde hace catorce años. Y si alguna información técnica faltaba, la han dado los sucesos de Azul con el lenguaje descarnado de los hechos.

Tampoco puede uno acordarse recién ahora de que no puede dejarse a un decreto del Poder Ejecutivo que declare cuáles son las armas de guerra. Esto debió decirse en 1960 cuando se dictó la ley 15.276 del 11 de febrero de ese año,

que está vigente y que, en su artículo 2º, dispone que «El Poder Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria las características de las armas, municiones y demás materiales que serán considerados, a los efectos de esta ley, como armas de guerra». Se trata de una típica ley en blanco, de las que me he ocupado hace veintidós años en mi libro *Fuentes del derecho penal*, legítima para todos los penalistas del mundo, de la misma especie de las existentes en el código, por ejemplo, en sus artículos 143 inciso 4º 205 y 206. El decreto reglamentario de esta citada ley 15.276 es el 3.189, del 28 de marzo de 1960, y discrimina, por delegación de la ley, cuáles son las armas de guerra. Nadie lo había objetado hasta ahora.

Se ha reconocido por todos que existe la violencia, que cierto tipo de delitos que ataca esta ley han recrudecido. Se ha producido el terrible y bárbaro suceso de Azul. Es innegable que hay una gran alarma e intranquilidad social. Napoleón, arengando a sus tropas, dijo antes de entrar en la batalla contra los genizaros, en Egipto: «¡Soldados, desde lo alto de esas pirámides cuarenta siglos de historia os contemplan!». Yo les digo a los señores legisladores: señores diputados: desde todos los rincones de la República, veinticinco millones de argentinos atribulados os contemplan. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sancionemos rápidamente esta ley que nos pide el Poder Ejecutivo y así habremos contribuido a que este gran hombre que es Perón pueda algún día decir, como Cicerón en su época: «Juro haber salvado a la República» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Lavalle.

Sra. Guzmán de Andreussi. — Pido la palabra para demostrar la incoherencia del miembro informante...

Sr. Presidente (Lastiri). — El señor diputado Lavalle está en el uso de la palabra.

Sr. Lavalle. — Señor presidente: he escuchado muy atento el largo discurso del señor miembro informante de la mayoría, quien nos ha hecho una versión jurídico-penal de largo metraje en defensa del proyecto de reformas enviado por el Poder Ejecutivo.

El señor diputado Porto ha confesado pública y solemnemente, al empezar su discurso, que a su juicio el proyecto tenía algunas deficiencias y errores pero, como venía con recomendación de pronto despacho, dejaron de subsanarse esas deficiencias. Ha confesado públicamente que vamos a sancionar esta noche una ley que tiene, como él lo dijo, defectos de forma, según el sentido que debe darse a lo que ha querido expresar. Yo agregaré que también tiene sus defectos de fondo. Y ése será el resultado del debate: va a sancionarse una mala ley, pero quedará un largo y erudito discurso del diputado Porto.

El diputado Porto también ha traído reiteradamente a colación los dramáticos sucesos de

Azul, cuando es notorio y público que lo acontecido en esa ciudad ocurrió en fecha muy posterior a la de la presentación del proyecto de reformas por el Poder Ejecutivo nacional.

Como contrapartida, y para bonificar la convivencia, confieso que los recuerdos amables para un gran presidente argentino como lo fue el doctor Illia y un gran profesor de derecho penal que también fue diputado de la Nación, el doctor José Peco, nos llenan de complacencia. Pero yo que conocía, no tanto como el doctor Porto, al distinguido penalista, tengo la casi certeza de que Peco, que era un hombre excesivamente prolijo, detallista y a quien le gustaba dar los pasos muy medidos, de ninguna manera hubiera apoyado un proyecto que viene, como he dicho anteriormente, con confesada defección.

También aclaro que la posición de la Unión Cívica Radical es clara y rotunda. A nosotros no nos cuesta ningún trabajo defender las libertades públicas argentinas. Nosotros tenemos una historia que defender y un mandato que cumplir.

Como aquí se ha explicado la filosofía del peronismo, yo también tengo la obligación de decir alguna palabra, pero no a título personal sino mediante la cita de la plataforma de la Unión Cívica Radical, en la que se explica el sentido de la lucha del radicalismo. En uno de sus párrafos se establece: «El futuro gobierno radical que surja de la consulta popular libre y sin proscripciones ejercerá el poder dentro del marco de la Constitución Nacional, teniendo al hombre como el protagonista principal y su último objetivo. A estos fines volcará su esfuerzo en la construcción del país del mañana, en una Argentina donde el hombre y sólo él sea sujeto y objeto del desarrollo tantas veces postergado, transformando el actual sistema capitalista en crisis por una democracia social que asegure la liberación nacional».

En las pautas establecidas por la convención nacional sobre política nacional —porque nosotros aquí venimos con un mandato, es decir, no somos hombres sueltos que llegamos para decir una palabra personal e individual sino que, por el contrario, estamos sujetos a los dictados y a los mandatos que nos ha ofrecido la convención nacional—, también se hace referencia al tema. La plataforma dice en alguno de sus puntos: «Primero, sancionar una verdadera legislación defensiva de los derechos y libertades constitucionales; ...tercero, reafirmar el principio de que el gobierno se fundamenta en poderes suficientes que otorga el respaldo de la ciudadanía; cuarto, revisar toda la legislación y los decretos dictados durante el gobierno de facto; sexto, asegurar que las normas que integran la democracia social mantendrán la plena vigencia de todos los derechos y libertades del hombre». Y en la parte específica referida al tema que estamos abordando esta noche, la convención de la Unión Cívica Radical estableció la derogación de las leyes represivas, entre otras aquellas que

importan discriminaciones ideológicas, movilización militar de civiles, extrañamiento de extranjeros, fueros especiales, etcétera, debiendo derogarse la pena de muerte y desterrarse las torturas.

Con ese mandato vinimos a este recinto y mediante iniciativas que contaron con el apoyo de legisladores de nuestra bancada y con la aprobación unánime de todas las expresiones políticas representadas en esta Cámara se sancionaron las siguientes leyes: 20.508, relativa a la amnistía política; la 20.509, referente a supresión de normas penales de represión y a ineficacia de las disposiciones no emanadas del Congreso de la Nación; y finalmente, entre otras de la misma índole, se sancionó la ley 20.510, de supresión del fuero especial.

Deseo aclarar a esta altura de mi exposición, por haberlo omitido con anterioridad, que el informe del despacho de la primera minoría estará a cargo, además del que habla, del señor diputado Day.

En estos momentos nos encontramos considerando una serie de modificaciones sustanciales al Código Penal, contenida en algo más de veinte artículos. Se trata de una ley parecida a la que se trajo al Parlamento hace muchos años y que trataba distintas materias, ya que las figuras que vamos a examinar en profundidad esta noche —y de las que se ocuparán no sólo el señor diputado Day sino también otros legisladores— no tienen únicamente una connotación política.

Cuando se planteó por primera vez en la comisión esta serie de reformas, expusimos las objeciones que nos merecían, las que voy a tratar de exponer ahora en la forma más escueta y breve posible. En primer lugar, porque teníamos mandato expreso de la convención de nuestro partido de derogar todo lo relativo a normas represivas. En segundo término, por la forma de considerar este proyecto de ley. A nuestro juicio, este despacho no debe ser tratado tan rápidamente. Sobre este particular no debemos olvidar que en una de las últimas reuniones del año pasado se estuvo a punto de considerarlo sobre tablas y sancionarlo, si se hubieran obtenido los dos tercios para ello, lo que aún es peor.

Sabemos que, para la reforma de nuestra Constitución, el artículo 30 de nuestra Carta Magna establece una serie de reglas de juego a fin de que se observen todos los recaudos y se examinen todas las posibilidades y ponderaciones del caso. Si bien no se trata ahora de la reforma de la Constitución, el proyecto de consideración establece cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico del país. Luego de la Constitución Nacional hay muy pocas leyes que tengan tanta importancia como la que estamos debatiendo esta noche, y siempre hubo una arraigada costumbre nacional en el sentido de que la elaboración de estas leyes se hace con un amplio debate, recurriéndose no sólo a los

profesores universitarios sino a la universidad misma y a la opinión pública para que se vaya formando legislación. Después, para aplicarlas, se demora un tiempo prudencial a fin de que sean conocidas por todo el país. Vale decir que este proyecto de reformas no pudo haber sido tratado de la manera en que lo ha propuesto el Poder Ejecutivo nacional.

Estimo que el señor diputado Porto se ha querido referir a uno de los puntos más vulnerables del proyecto, cuando en el mensaje se manifiesta que se toma esta actitud para que no pueda proceder la excarcelación. Es decir que estamos legislando sobre una ley substantiva, sobre una norma fundamental del ordenamiento de represión, que quedaría supeditada a una ley adjetiva, que si la puede dictar el Congreso de la Nación lo es exclusivamente para la Capital Federal y los territorios nacionales, ya que corresponde a las provincias sancionar sus propias leyes de excarcelación. De modo que aquí se supedita lo secundario a lo principal, lo que es una falacia de la que, naturalmente, ya se hizo mención en el Senado y que yo reitero en este recinto.

Estoy de acuerdo con la brillante exposición del señor senador de la Rúa, quien se refirió a las penas establecidas en el proyecto. Pero resulta que el señor diputado Porto, curándose un poco en salud, porque uno de los vicios fundamentales que tiene esta ley son precisamente las penas sumamente draconianas, demasiado severas y crueles, ha leído toda clase de doctrinas, de autores y de jurisprudencia sobre esta materia. Le voy a contestar no con mis palabras sino con las de un recordado profesor de derecho penal que fue aludido esta noche en reiteradas oportunidades cuando se hizo referencia a si se debían aumentar las penas de la forma que lo ha hecho el Poder Ejecutivo o si, por el contrario, se debía ser más cauteloso.

En el proyecto de reforma del año 1967, la comisión encargada de ese cometido expresó lo siguiente: «También han sido objeto de cuidadoso examen las escalas penales de los diversos delitos, punto en el cual la ley vigente suele ser blanco de las más frecuentes censuras. No son éstas siempre fundadas. Con respecto a tal problema, la comisión introduce la reforma que considera fundamental, consistente en acordar a la reincidencia el carácter expreso y taxativo de agravante de las escalas penales comunes, sea cual sea el delito cometido. Esta modificación, cuyos caracteres se explican más abajo, por sí sola importa una corrección substancial en el funcionamiento efectivo de la ley, que de este modo se torna severa cuando debe serlo y se mantiene adecuada no sólo en los casos graves sino también en los casos leves, que reclaman igual justicia. Acaso en este punto arraigue una real deficiencia de la que por excelencia debió hacerse cargo la ley penal, pues en los críticas que a ésta se dirigen por su be-

nignidad generalmente se incurre en superficiales conclusiones entre lo que es propio de la ley penal y lo que corresponde a la actividad investigadora para descubrir a los autores de un hecho, a la organización de la administración de justicia, al procedimiento judicial de instrucción, al sistema para decidir una causa o a otros aspectos vinculados con la actividad represiva del Estado.

«Se supone, con demasiada ligereza, que la ocurrencia de un delito es por sí misma la prueba de una deficiencia de la ley penal, consistente en la levedad de la pena conminada. Desde luego, el mal de ese reproche de la ley penal, más que su error, consiste en la engañosa facilidad del remedio que sugiere: el de aumentar la pena correspondiente que se había mostrado inidónea para suprimir el delito, como si ésa fuera la función de la pena y no la más modesta o menos ambiciosa de tutelar los derechos, reprimiendo las transgresiones cuya existencia incalculable es una condición de toda sociedad humana.

«Aquella engañosa facilidad es mala, porque nada cuesta en efecto poner la frase "diez años" donde decía "cinco años" y descansar así en la ilusión de que se ha hecho lo que era necesario para corregir un mal. Algunas veces, no muchas, la corrección es oportuna, pues la ley, en efecto, contiene algunos errores en la valoración de la relativa gravedad de los hechos. Es necesario cuidarse, sin embargo, aun en esos casos, de creer que con ello sólo la estadística criminal experimentará una disminución. Es muy sabido que la certeza y prontitud de la pena son factores preventivos de mucho mayor poder que la magnitud de ella, y que es equivocada la idea de "compensar la escasa probabilidad de condena" mediante aumentos de la magnitud penal.»

A esta altura de mi exposición, quiero dar una contestación a ciertas afirmaciones formuladas por el señor miembro informante de la mayoría. El diputado Porto ha expresado que, en el Senado, el radicalismo se ha ocupado de condenar la violencia, pero no de castigarla. Eso es una falacia; que quede bien aclarado. La Unión Cívica Radical siempre ha repudiado la violencia. Esta actitud no es de ahora, no es de última instancia, sino que en todos los tiempos mi partido estuvo en contra de la violencia como método político. El presidente del comité nacional, ese gran republicano que es el doctor Ricardo Balbín, y su partido, todos estamos poniendo el hombro a un plan de reconstrucción y liberación nacional.

Me voy a permitir leer algunas declaraciones políticas del comité nacional, y la que tengo más a mano —porque nosotros, los radicales, también tenemos víctimas en el proceso de estos tiempos en nuestro país— se refiere al atentado cometido contra el senador nacional e integrante del comité nacional de nuestro partido, doctor Solari Yrigoyen. La Unión Cívica Radical decla-

ró: «1º) que —como desde siempre lo ha puntualizado ante las expresiones de la violencia organizada— luchará por la erradicación de estas manifestaciones de la intolerancia, que en definitiva abren el camino hacia la inestabilidad que desean los enemigos del proceso institucional y de la liberación nacional; 2º) que nos preocupa y angustia la continuidad de una violencia organizada, que fundamentalmente busca neutralizar y quebrar los más elevados propósitos de unión de los argentinos, tal como lo proclamó esta convención nacional; 3º) que esta nueva expresión de la intolerancia, que observa las características habituales de la carencia de virilidad de sus ejecutores ocultos en la penumbra cobarde del anonimato y de ciertos niveles de impunidad, se ha incorporado al espectro político nacional como una realidad casi cotidiana, lo que vuelve imperativo que se realicen serios y profundos esfuerzos para detectar y exhibir a sus autores materiales y a sus mentalizadores, pues así se ayudará a la República a no cruzar los límites de seguridad que impone el desarrollo de una democracia social fundada en el respeto al derecho de cada uno. Se puede convivir en la discrepancia razonada, pero la subsistencia del crimen sistematizado anulará esa posibilidad histórica para el país. Advertimos, además, que toda demora es peligrosa».

En oportunidad de la muerte del señor secretario general de la CGT ha sido recordado en todos los ambientes el discurso condenatorio que pronunciara el señor presidente de este bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, doctor Antonio Tróccoli. Y la mesa directiva del comité nacional de la Unión Cívica Radical expresó «con categórica claridad y sin ambigüedades su posición contraria a toda violencia organizada. Lo ha hecho desde que ésta principiara su acción, porque cree que sobre la base del crimen jamás se construirá la República». La declaración agregaba: «Ante el atentado que ha costado la vida del secretario general de la C.G.T. expresa su condena, y señala que el hecho es aún más inexplicable después que el pueblo se ha pronunciado en las urnas».

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Lavalle. — Podría seguir mencionando infinidad de documentos de análoga tesitura. Así, por ejemplo, el comité nacional repudió enérgicamente «el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile presidido por el doctor Salvador Allende, hecho que constituye un grave retroceso para la liberación de América Latina».

Podría seguir leyendo durante toda la noche condenaciones de la violencia de hace ya tiempo, cuando algunos hombres perdieron la vida por el solo hecho de disentir políticamente; pero no desco extender más mi exposición, ya que debe

hacer uso de la palabra el señor diputado Day. Sólo me resta reiterar el anuncio de que la Unión Cívica Radical habrá de votar por la negativa el proyecto de reformas al Código Penal propuesto por el Poder Ejecutivo. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Day.

Sr. Day. — Señor presidente: aun cuando no era intención de la bancada radical incurrir en réplicas, me veo en la necesidad de alterar el contenido inicial de mi exposición, ya que se ha tocado un aspecto sumamente especial y delicado que no podemos dejar pasar por alto.

El señor miembro informante de la mayoría ha referido que durante el gobierno de Illia se establecieron leyes represivas, entendido este último término como alusión a sanciones penales por delitos políticos, y concretamente ha mencionado el artículo 213 bis, incorporado al Código Penal. Esa disposición se introdujo en reemplazo y contemporáneamente con la supresión por el Congreso de la Nación de las leyes represivas, cuando volvió a dar al Partido Justicialista derechos que antes tenía humanamente pero que eran negados por la legislación.

Esto me parece una ingratitud. Es importante destacar que en esa oportunidad —tal como se consigna en la lista incorporada en el Diario de Sesiones— se derogó una extensa nómina de leyes que habían estado escarneciendo y persiguiendo en sus ideas tanto al justicialismo como al comunismo. Es importante decir que esto se hace casi un año después de haber asumido el poder el doctor Illia, como también seguir el hilo de lo que estoy manifestando. Desde el 12 de octubre de 1963, en la práctica, no existió persecución ideológica en la Argentina. Nuestro gobierno envió las normas para que este Honorable Congreso, detallada y medítadamente, las estudiara.

¿Y qué ocurre cuando así procede? No terminó allí la discusión. Se abrió un amplio debate, y fueron consultados juristas y organismos especializados, así como los más importantes profesores del tema en la República. Esta Honorable Cámara editó mil ejemplares del proyecto para hacerlos llegar a los centros más importantes del país y del extranjero, recabando su opinión.

Por encima del desborde de los apresurados que empujaban a algo que estaba en el sentimiento desde luego de los legisladores para que eso fuera inmediato, el gobierno de entonces trató este tema con la serenidad, con la meditación y con el tiempo necesarios. Indudablemente, todo este proceso fue a pura pérdida material para nosotros, porque esa ley se votó en septiembre de 1964; o sea que en plena marcha del proceso electoral estos radicales —sin cálculos pequeños— abrían la puerta grande para que el justicialismo los derrotase en los comicios de 1965. Por lo tanto, no creo que en la regla de juego

del reconocimiento de la verdad haya sido muy feliz la cita que ha dado el doctor Porto.

Refiriéndome al artículo 213 bis, creo que hay que conocerlo en toda su extensión, y manifiesto que es uno de los motivos de mayor orgullo radical que tengo en mi vida, al ostentar el galardón cívico de que gente de mi partido se haya decidido a dar una ley de esos quilates y esas características. Vamos a decir por qué se dio esa ley, señor presidente.

Quiero aclarar también que el trámite de toda esta actividad fue dirigido por los radicales, y sepan a su vez los señores diputados que no han tenido oportunidad de leer el Diario de Sesiones, o de confrontarlo, que el presidente de la Comisión de Legislación Penal, entonces diputado nacional y hoy senador nacional justicialista, era el doctor Caro. Agregó, además, que no es cierto que existiera, por parte de nadie, el repudio a esta disposición. En este recinto estaban Caro y también Pedrini, y constan las opiniones que ellos, como justicialistas, dieron al respecto. Entonces, creo que las cosas hay que colocarlas en el justo término.

Refiriéndonos a los antecedentes de por qué va esta disposición a la legislación positiva argentina, tengo que decir que el artículo 213 bis, que ya leeremos, fundamentalmente tiende a tratar de evitar la impunidad de esos grupos que hacen un culto de la disgregación, que creen en el racismo y que mantienen una línea apartada del concepto humano de respeto mutuo que debe primar en el mundo. Esa norma, señor presidente, llega y la recepta la Argentina, basándose en una declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial e ideológica, en la que se aconsejaba que estos aspectos fueran cristalizados en la legislación positiva de todos los países. Me interesa indicar que esa resolución de las Naciones Unidas es votada por unanimidad, es decir que las expresiones de Oriente y de Occidente, de países alineados o no alineados, de naciones desarrolladas, en desarrollo o subdesarrolladas, coincidieron en que era necesario que existieran normas tales como las que se han engarzado, para prestigiar a la legislación argentina, por el artículo 213 bis.

Me voy a permitir leer, con la venia de la Presidencia, algunos de los artículos de dicha declaración de las Naciones Unidas, dictada el 20 de noviembre de 1963. La Argentina debe de haber sido uno de los primeros países que la acogió. Dice en su artículo 99: «Toda clase de propaganda y organización basada en teorías o en ideas de superioridad de una raza o grupo de personas de determinado color u origen étnico, que tenga por objeto la discriminación racial en cualquier forma serán severamente condenadas. Toda incitación a la violencia o actos de violencias cometidos por individuos u organizaciones contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u

origen étnico deben ser considerados como una ofensa contra la sociedad y punibles con arreglo a la ley».

Dice el artículo 39: «Con el fin de realizar los propósitos y principios de la presente declaración, todos los Estados deben tomar medidas inmediatas y positivas, incluidas las legislativas y otras, para enjuiciar y, llegado el caso para declarar ilegales a las organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella, que inciten al uso de la violencia o que usen la violencia con propósitos de discriminación basada en raza, color u origen étnico».

Queda aclarado, señor representante de la mayoría, por qué se dictó el artículo 213 bis, que no hemos abandonado todavía, ya que él tiene que ver con la legislación que ahora, por la reforma, se deroga parcialmente.

En primer término observamos la prudencia del gobierno radical y señalamos la ponderación de todos los legisladores de entonces que consultan sobre este artículo, que meditan sobre el tema. Se escucha la palabra de maestros tales como Soler, Jiménez de Asúa y Núñez, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba y autor del anteproyecto.

Soler piensa que no es necesaria ni urgente la sanción del dispositivo, pero en ningún momento considera que sea persecutorio de las ideas. En el trámite, al aconsejar Jiménez de Asúa que pudieran ser reprimidas las luchas de clases, entre todos, y en conjunto, se suprime del texto del proyecto para que no pudiera ser interpretado, y así pulido se incorpora a la legislación positiva del país el artículo 213 bis. Es bueno comenzar a tener en cuenta este aspecto.

El artículo 213, en su inciso 1º, que esta mayoría ha acogido totalmente para la reforma y al que ya se ha hecho referencia, dice así: «Serán reprimidos los que participaren en acuerdos permanentes o eventuales que sin estar comprendidos en el artículo 210 —se refiere a las sociedades ilícitas— tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la agrupación».

Este inciso —que se acaba de calificar como represivo— se acoge ahora, pero de un modo distinto, porque el artículo del gobierno del doctor Illia, del que es responsable el Congreso de ese tiempo, le daba a éste la jerarquía de un delito correccional, con una pena de un mes a tres años. Está en el riesgo profesional de los que piensan y actúan de un modo violento la posibilidad de caer bajo la sanción de esta norma, que fue dictada para aquellos grupos que no llegaban totalmente a convertirse en asociación ilícita porque no tenían la función de cometer delitos, pero que estaban en la violencia. Esos grupos eran dos: uno, político, el Tacuara, y el otro, estos muchachones patoteros que estamos viendo todos los días. Así lo dijo claramente el entonces miembro informante, mi

compañero de bancada, diputado Bravo, en esa oportunidad, y así lo destacaron los distintos legisladores, porque era el modo de frenar a estas patotas —que ahora han recrudecido—, a esta gente que no está, como en el caso de la asociación ilícita, con la idea de cometer delitos, pero a la que es necesario de algún modo mostrar las uñas de la sociedad, en defensa propia, y a su vez mostrárselas a sus padres, para que no sean desaprensivos. Ese es el sentido de dicho artículo, y así se lo consideró. De esto es testigo el señor diputado Busacca, que en ese entonces ocupaba estas bancas.

Esa situación ha recrudecido ahora, pero no podemos llevar las penas a la exageración, porque tampoco podemos perseguir a uno de esos muchachones aplicándole, la primera vez que actúa en estas organizaciones intolerantes pero no delictivas, una pena de hasta ocho años de cárcel. Nosotros en estos casos hemos procedido con prudencia; sin embargo, ahora se les aplica —cambiando el espíritu— una pena muchísimo mayor.

Los otros incisos del artículo 213 bis son sacados de esta reforma, pero al proceder así la mayoría, sin darse cuenta, se está colocando en falla y apartándose de un pronunciamiento que tiene un gran apoyo moral y ético dado por las Naciones Unidas, al que de algún modo nosotros nos tenemos que sentir obligados, porque es el pensamiento unánime del mundo.

Me voy a permitir leer los incisos que se suprimen. Dice uno de ellos: «Los que participaren en organizaciones, o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa o racial en cualquier forma». La supresión de este inciso es muy peligrosa.

Otro inciso que se suprime es el siguiente: «Los que incitaren a la violencia por la sola incitación —es decir, que esto no le puede molestar al violento que se encuentre motivado, pues pena la sola incitación; es lo que en el homicidio, en un delito mucho más jerarquizado, es conocido en el artículo 80 por el solo impulso de perversidad brutal— o realizaren actos de violencia, sea individualmente o integrando organizaciones contra cualquier raza o grupos de personas de otra religión, origen étnico o color».

Se suprime también otro inciso que dice: «Los que públicamente instigaren a los militares y a los componentes de la fuerza de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar, de manera tal que los hechos u omisiones de los instigadores sean idóneos para comprometer el orden público».

Esto no lo pueden votar, señores diputados elegidos por el pueblo. Es la garantía que ustedes tienen de, por lo menos, manchar con una sanción penal al irreverente que se levante con-

tra la voluntad soberana del pueblo, contra una mayoría que ustedes y nosotros en ese momento respaldamos y apuntalamos. (Aplausos.) Y esto hoy se está borrando de la legislación argentina.

Comprendo por qué el miembro informante ha leído por primera vez en esta Cámara un discurso en su totalidad. Esto no significa que el que lea sea menos capaz que el que no lo hace, porque muchas veces quien expone sin leer en lugar de ser elocuente es un lenguaraz. Pero tengo el derecho, por haber sido alumno del señor diputado Porto, de pensar que ha leído por estar defendiendo una causa que no es acorde con las convicciones que ha defendido durante toda su vida. Estoy seguro de que lo hace porque piensa que existe un principio superior que es su movimiento, y que ese movimiento está al servicio del país.

También deseo manifestar que traemos nuestra queja por el trámite que ha seguido este proyecto. Proviene del Poder Ejecutivo; llega al Senado, donde es aprobado sin ninguna modificación. Mantiene un destino virgen a toda tentación de reforma, pero a veces la virginidad es estéril, y aquí se da el caso.

Nosotros hubiéramos querido colaborar mejorando estas normas sobre la base de precedentes que a su vez se nutren de los precedentes de todo el Parlamento argentino. Hubiéramos deseado un amplio debate para sentir las opiniones del conjunto y para que no se dicten estas normas en el apresuramiento que un microclima determinado por un hecho violento puede significar para un país que quiere soluciones y que está conforme con que lo gobiernen los representantes del pueblo.

No estamos de acuerdo con que se trate de este modo a nuestro Código Penal, que tiene su origen en la mejor opinión occidental y europea: lo recepta el código italiano de 1890 y forma su crisol en los antecedentes de la escuela napolitana y toscana. Es el mejor código de Sudamérica.

Sr. Falabella. — Muchas gracias, señor diputado, por Rodolfo Moreno.

Sr. Day. — Respondo a la acotación del señor diputado para demostrar la forma en que actuamos los radicales, que recibimos lo bueno de donde venga, diciendo que este código se sancionó en época de gobiernos radicales.

Este código es mejor que el de España y en muchas cosas supera a los de Alemania e Italia. Estas no son palabras mías. Lo dice Soler, autor del proyecto que tiene la posibilidad algún día de recibir la herencia de la legislación positiva argentina en materia penal.

En consecuencia, tratar de este modo al Código Penal constituye una falta de respeto hacia lo que debe considerarse una ley —no es una ley cualquiera— destinada a juzgar conductas. Las conductas se orientan a través de la libertad y del albedrío que, en definitiva, es el alma. Por lo tanto, un código de tanta trascendencia no

puede quedar así mutilado y modificado en esta tarea rápida de cambiar las cosas. Para actuar de este modo se invoca al maestro Peco, pero me da la impresión, por la forma de enlazar nubes de argumentos o echar polvo en el galope del discurso para tapar la verdad, que al maestro a que ha querido referirse es Pecos Bill. (Risas.)

En cuanto a la afirmación de que la gran solución contra el delito está en la pena, desde ya manifiesto que eso es caer en el pecado de soberbia de la pena, y el pecado de soberbia es el que condenó al hombre. Sobre esto es útil tomar en cuenta algunas opiniones. Jiménez de Asúa y Soler se han referido específicamente a esta cuestión. Con un ejemplo gráfico Soler sostiene que tratar de resolver el problema delictivo social a través de la pena es más o menos como tomar a un rábano por las hojas y darle el golpe para arrancarlo: se queda con las hojas en las manos el que así procede, y abajo, en la tierra, queda acorazado ese fruto de disociación.

Jiménez de Asúa entiende que la pena es como la aspirina: quita el dolor, tal vez, en lo inmediato, pero no va al síntoma importante y profundo que interesa diagnosticar para dar remedio al cuerpo enfermo.

El ejemplo de la acción guerrillera contra un regimiento de Azul no vale para nada, señor presidente. Por el contrario, sirve como tesis en contra. Los subversivos que pusieron el pie en jurisdicción militar se arriesgaron, de acuerdo con los artículos 108 y 109 del Código de Justicia Militar, al poder multiplicador de las penas y procedimientos militares que llegan hasta la pena de muerte. Sin embargo lo hicieron y siguieron adelante.

Más aún cuando la pena es grande y no da oportunidad al regreso el hombre se convierte en un animal acorralado y herido que acorrala y hiere. Entonces, el ejemplo no vale para nada en esta discusión.

Queremos agregar también así, en lo grueso, que el proyecto que envía el Poder Ejecutivo presenta la característica insólita de que en el aspecto técnico no hay un editor responsable. No sabemos si en esto ha actuado un gran maestro o si es la obra de algún «chupatintas» de turno que más o menos armó este adefesio y lo mandó para resolver —para mal resolver— el problema punitivo argentino.

También es importante decir lo siguiente, señor presidente. Es antecedente argentino y de todos los países civilizados que la pena nueva debe tener un tiempo suficiente para ser conocida en forma tal que cumpla una tarea didáctica a fin de que la policía, los jueces, la opinión pública y los propios delinquentes sepan a qué atenerse. Así ocurrió con el código de Rodolfo Moreno y lo mismo sucedió incluso con las reformas al Código Penal efectuadas durante la dictadura militar. Obsérvese que hasta en esa oportunidad se dio plazo para el conocimiento

de las reformas. Sin embargo, ahora no se procede así. Si esta noche se sanciona y promulga esta ley y mañana se la publica regirá el plazo breve establecido como norma por el Código Civil y luego esa legislación exótica será obligatoria para toda la población argentina. Estos ya son, pensamos, argumentos suficientes.

Yo no deseo entrar en el aspecto político, en relación con el cual habría mucho que decir. Incluso no me voy a referir al pasado lejano del partido gobernante porque no me corresponde y, además, porque en el pasado más inmediato ya se fijó una posición mediante las palabras de un importante legislador, ahora presidente del bloque del justicialismo. Para qué vamos a hablar de si hubieron o no errores en el ayer, que por otra parte todo el mundo los tiene, si eso ya ha sido largamente reconocido en un debate sobre derogación de leyes represivas realizado durante el año 1964.

En la página 3303 del Diario de Sesiones correspondiente al 4 de septiembre de 1964, el señor diputado Pedrini, refiriéndose al general Perón, ahora presidente de la República, señala que son «leales a su recuerdo y fieles a la memoria de quien representó con gallardía y altivez la causa popular...». Interrumpe el señor diputado Antón diciendo: «Hasta que escapó». Y continúa manifestando el señor diputado Pedrini: «...el que podía estar equivocado, el que pudo haber cometido errores, como los cometemos todos y más aún los hombres políticos en este quehacer áspero y difícil que es la tarea de gobierno». Y dos páginas más adelante agrega el señor diputado Pedrini con toda hidalguía: «Nuestros errores quedaron en el pasado y los vamos a asimilar para el futuro. Los errores de los demás que también sean asimilados por ellos para el futuro, a fin de que de hoy en más, todos unidos, cada uno manteniendo su manera de ser y de pensar, posibilitemos la reconstrucción nacional y, en definitiva, la grandeza de la República y el bien de la patria...».

Sr. Presidente (Busacca). — Señor diputado Day: ha vencido el término para su exposición.

Sr. Zamanillo. — En razón de lo fundamental del tema en debate, solicito que se amplíe el plazo.

Sr. Presidente (Busacca). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Day.

Sr. Day. — Vuelvo a repetir, señor presidente, que no queríamos incursionar en el terreno político, pero ahora el camino se ha abierto y ya no es responsabilidad nuestra, aunque desde luego el debate se realizará, como esperamos todos, con la debida altura.

Yo no me quiero referir a este aspecto, sino que mi deseo es demostrar de algún modo y

sintéticamente lo mal hecho que está este proyecto, si es que ello resulta posible.

La primera reforma se refiere a la incorporación como inciso 4º del artículo 80 del Código Penal —es decir, con prisión o reclusión perpetua—, al que matare a otro con el concurso premeditado de dos o más personas. Es la primera vez que se consigna en nuestro Código Penal el término «premeditado», aunque dicho vocablo es normal y usualmente utilizado.

Me preocupó averiguar el origen de esta innovación, y así tuve conocimiento de que se había tomado como fuente el proyecto de reformas del doctor Sebastián Soler, de 1960. Efectivamente, ello surge del artículo 111 de dicho proyecto, pero allí su utilización responde a un criterio mucho más serio, ya que esa disposición contempla la posibilidad de la reclusión o prisión perpetua cuando en el homicidio intervienen dos o más personas que deben estar presentes en la ejecución del hecho.

Por el contrario, en el despacho en consideración ese término se presta a diversas circunstancias injustas para el agravante, porque lo que interesa es que con gran ventaja y sin dar chance los complotados caigan sobre la víctima y produzcan su muerte. En la forma en que está redactado se aparta del modelo con un criterio que no es el más conveniente ni el más justo.

Luego me referiré en particular con detenimiento, si el tiempo lo permite, a estos y otros aspectos de la reforma, pues no deseo cansar ni abusar de la atención que me dispensa esta Cámara, pero no puedo dejar de señalar en este momento parte de mis observaciones para hacer reflexionar a los señores diputados antes de procederse a la votación.

Se reincorpora a la legislación positiva el delito de amenazas. Este delito se encontraba tipificado en el proyecto Soler y en la reforma introducida por la dictadura militar a la legislación penal y que derogamos en este Parlamento después del 25 de mayo. Sucede que en estos antecedentes, el delito era de instancia privada, es decir, que el propio interesado motorizaba la acción si así lo creía conveniente. Pero la palabra «amenazas» abarca un amplio margen, desde la reprimenda casi amistosa hasta extremos antisociales, y no podemos convertir a los tribunales en un hacinamiento de casos de conventillo. Los que actuamos ante tribunales provinciales en lo penal donde el proceso es oral, observamos que con frecuencia se lleva a la instancia judicial la disputa entre dos vecinos en la que uno de ellos le hacía al otro una amenaza que no era eficaz ni idónea, pero debía substanciarse el procesamiento. En esos casos, los jueces tenían que apelar a interpretaciones retorcidas de la ley para no inculpar y convertir en delincuentes a los que incurrían en hechos de esa naturaleza, muchas veces producto de su escasa educación.

Pero ahora se va más allá todavía, porque se reprime con prisión de seis meses a dos años al

que hace uso de amenazas para alarmar o amedrentar, con lo que muchas expresiones caerían en zona punible.

Observe usted, señor presidente, el contrasentido: si un sujeto amenaza a otro con agredirlo, este delito, el de la amenaza, tiene una sanción de seis meses a dos años, pero si lo agrede entonces tiene como máximo una pena de seis meses. Si lo amenaza con darle un golpe o que va a hablar de él en la injuria, tiene una pena que llega al año para el delito efectivizado, mientras que la etapa inicial lejana, en el *iter criminis* —el camino que desemboca en el delito—, es mucho más grave y punible. Esto, no más, está mostrando que en esta reforma han estado actuando «chapuceros».

Esta reforma tuvo la oportunidad de corregir o precisar lo que se entiende por armas, ya que en muchísimas oportunidades se hace aparecer esta palabra. La definición precisa de arma de fuego ya la daba, en el delito de abuso de armas, el artículo 104 del Código Penal vigente. Sin embargo, ahora aparecen agravantes a cada momento y en cada circunstancia. Por ejemplo, es agravante del robo el efectivizarlo con armas. Pero, ¿qué es arma? ¿Cuál es el alcance de este término? ¿Cuándo el delincuente se ha colocado en verdadera desproporción ventajosa a la víctima para que la conducta antisocial, por peligrosa, se vuelva más punible? Soler opina que agravar excesivamente el robo porque se haya efectivizado con armas rompe las escalas penales de nuestro sistema, pues el robo significa la sustracción, produciendo daño en las cosas o violencia en las personas. El arma tiene que estar presente casi como necesaria. Ya está superada la idea de que cuando se muestra un arma para conseguir dinero, a la víctima intimidada, pueda haber una extorsión. ¡Es siempre un robo! Se está hablando muy a la ligera sobre el problema en esta maratónica reforma.

Después, se trata de incorporar un artículo 189 bis al Código Penal, que diría: «El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daño en las máquinas o elaboración de productos, fabricare, suministrarle, adquiriere, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas...», etcétera, será reprimido con cinco a quince años de cárcel.

Es importante hacer aquí una diferencia. Se ha tomado esta disposición del proyecto de Soler, pero éste piensa que como se trata de un acto simplemente preparatorio —el acopio de armas—, conviene darle la oportunidad al hombre que así actúa de ver que no está todo jugado, que la sanción por su conducta no es tanta y que no le conviene ir adelante en la ejecución total de los delitos a que se pueda presumir llegar; por eso su proyecto establece sólo de dos a seis años de prisión. Y, cosa no-

table, para quien acopia estas armas que probablemente servirán para una causa más grave, que es la de la rebelión, es decir, alzarse en armas contra las autoridades constituidas, el delito tiene una pena de menor entidad: de tres a quince años de prisión. Esto lo deberá de haber advertido la reforma porque, tímidamente, el número de la sanción por rebelión, cuyo máximo permanece en diez años, se eleva de dos a tres años.

Los explosivos pueden ser utilizados para muchísimos otros estragos; inclusive para incendios; y sin embargo, delitos tan graves son menos punibles. Por ejemplo, quien destruya un dique tiene casi la mitad de la pena que corresponde a quien haya acopiado los elementos para concretar el siniestro.

Veamos otro artículo que se reforma en el Código Penal: el 292, que trata de la falsificación de documentos. Cuando se trata de la falsificación de documentos o instrumentos públicos, la pena es de uno a seis años de cárcel. Ahora, cuando esa adulteración se refiere a documentos de identidad de las personas o de la titularidad del dominio de un automóvil, se eleva de tres a ocho años. Es decir que la escala de valores con que este agregado al artículo pretende proteger a la sociedad es retrógrada y reaccionaria, porque quien falsifica, por ejemplo, un testamento —en el que pueden entrar muchos otros bienes e inclusive automóviles—, al desvirtuar el acervo y dejar de lado la voluntad supuesta del causante, tiene menos pena; pero cuando lo que se falsifica es la cédula de identidad o el registro del automotor, la pena se eleva a un mínimo de tres y a un máximo de ocho años. Si se falsifica una hipoteca, dejando en la calle a toda una familia, la pena es de uno a seis años. ¿Por qué quien roba un automotor va a tener distinto tratamiento o jerarquía? ¿Por qué va a ser más penado el que falsifica el documento de un automotor que quien elude a la sociedad y a la familia adulterando o substituyendo una partida de casamiento? Esto es injusto e irregular, señor presidente.

Vale la pena tener en cuenta el artículo 142 bis, que impone prisión o reclusión de cinco a quince años «al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad»; y para el hecho agravante la pena se eleva de diez a veinticinco años de prisión o reclusión; ello sucede cuando a la persona se la retiene sin vejlarla, ofenderla o lesionarla: basta simplemente con que la persona retenida sea mujer o menor de dieciocho años de edad. Penalmente resulta más barato al coaccionador matar a la mujer o al menor, ya que por el sistema del Código el homicidio simple está penado con prisión o reclusión de ocho a veinticinco años, mientras que

corresponde una pena de diez a veinticinco años en el caso de la simple retención con miras a obtener una ventaja.

Sr. Romero (C. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Day. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia solicita al señor diputado que no acepte interrupciones, porque ya le ha concedido una extensión del tiempo de su exposición, contrariando disposiciones reglamentarias. Por este motivo, le ruega que no haga, mediante la concesión de interrupciones, que continúe en la posición en que ya la ha colocado el señor diputado.

Sr. Romero (C. A.). — Se trata solamente de dos palabras para reafirmar lo que el señor diputado está señalando tan brillantemente.

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Romero está anotado para hacer uso de la palabra, por lo que la Presidencia le pide que permita concluir su exposición al señor diputado Day.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Day.

Sr. Day. — Otro delito que debemos considerar es el que atañe a la figura penal de la instigación al delito, a cuyo respecto se sigue la misma escuela del actual código. Comete instigación al delito el que oriente o preconice a determinada persona que delinca, sin llegar a ser cómplice.

En el código vigente la pena es mínima, ya que llega apenas a un año, aun cuando el sistema no es científico ni técnico, por cuyo motivo ha sido muy criticado. Por la reforma la instigación está penada con dos a seis años de cárcel. Así, por ejemplo, aquellos que instiguen al desacato a un diputado sufrirán una pena de dos a seis años, en tanto que aquel que pone la cara cometiendo por sí el desacato tiene una pena de un mes a un año. Como se ve, esto no tiene sentido ni coherencia.

Si hubiese habido alguien que conociese los principios elementales del derecho penal, al abordar la reforma habría advertido la conveniencia de seguir el criterio que sobre el particular tiene Soler, cuyo proyecto establece en el artículo 268 que el instigador tendrá la pena de la mitad que corresponda al delito que instigare, y que no puede pasar de cuatro años.

Señor presidente: podría aportar muchos más detalles, pero considero que he abusado del tiempo de que disponía. Entiendo que son otras las formas para enfrentar a la delincuencia y a la violencia, que son estériles para conmover a un sistema de gobierno con apoyo popular. Lo decía y lo inspiraba el Mahatma Gandhi, pero me voy a remitir a lo expresado por Carlos Marx. Este manifestó que la violencia tiene sentido única y exclusivamente cuando en la última etapa, para que nazca la sociedad nueva, ella tiene que actuar como partera; pero en el

momento de ser concebida corresponde el amor, y durante el embarazo, la espera; tiene que haber otros factores, otras circunstancias, para que la violencia asuma el poder.

Nada hay que temer teniendo en cuenta el apoyo y el respaldo que tiene la democracia argentina, e incluso —lo tengo que decir— ese gigante carismático que es el presidente de la República. Eso sí, quiero agregar con todo respeto que hay una diferencia entre el dirigente y el conductor, entre el simple gobernante y el estadista que trasciende definitivamente; es la serenidad con que controla sus sentimientos en los momentos difíciles y de crisis. Para conducir una Argentina potencia hay que tratar de asimilar esa condición que hace al complejo humano superior deseado.

Nosotros no concebimos que en la crisis de los misiles en Cuba la falta de serenidad de Nikita Khrushchev o de John Fitzgerald Kennedy hubiera hecho estallar el mundo.

Por ello es indispensable que se comprenda que otras son las medidas que hay que tomar contra la violencia. Lo digo luego de haber seguido en la noticia periodística la triste actuación de las patotas que asaltan a los trenes. ¿Y cómo no ha de ser así si en todo el país hay apenas 1.500 guardias ferroviarios, y sólo 300 en el Gran Buenos Aires? ¿Cómo no habría de ser así si, incluso en proporción, hay muchos menos policías que en 1923, y es necesario además capacitarlos profesionalmente y darles elementos a quienes tienen que estar en la tarea preventiva? ¿Qué conseguimos con aumentar las penas si no encontramos a los delincuentes? Estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta.

Frente a la acción guerrillera contra el regimiento de Azul, señor presidente, yo no sé si ésa será la oportunidad para llamar a la reflexión, y que apareciera el propio presidente de la República, o gente con inquietud, para que al igual que San Martín en su tiempo y Ricchieri en el suyo, cumplan una tarea filosófica renovadora en las fuerzas armadas, a fin de capacitar mejor al soldado, porque los jefes, oficiales y suboficiales ya lo están, y eso se palpa, dado que motivados por el proceso que vivimos van hacia adelante y mueren por la patria.

Que exista desde la etapa del recluta un verdadero adoctrinamiento democrático, nacional y argentino, para que sepan esos muchachos por qué —para qué deben defender con amor a estas instituciones y a la patria. No en vano les damos a las fuerzas armadas nuestros hijos durante un año. Ya quisiera cualquier organización extremista tener a la flor de nuestra juventud ese lapso para moldear sus mentes y templar sus espíritus.

Cuando todas estas cosas se hayan dado, cuando el pueblo esté, como en Suiza, armado pero convencido de que está defendiendo la causa de todos, no habrá temor y se podrá sonreír confiado al futuro. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Señor presidente: es indudable que este debate ha adquirido, por las circunstancias por todos conocidas, mucho más trascendencia que la que hubiera tenido meses atrás.

Es que la opinión pública, la prensa en general, oral y escrita, ha ido destacando las diferentes posiciones que a este respecto se han dado e, inclusive, ha ido señalando los diferentes criterios que sobre este particular tenía el partido mayoritario.

De esta manera nosotros entendemos que, independientemente del enfoque jurídico penal, que por mi parte haré brevemente, esto está entroncado con una conciencia política e ideológica y nos obliga a desarrollarlo en lo posible con la mayor profundidad, porque todos creemos que en esta época de la vida del país es necesario decir las cosas sin ningún tipo de reparos, sin espíritu de agresión, que no existe, pero sabiendo que el derecho de crítica que ejercemos en la Cámara y en la calle forma parte del *substratum* de la democracia y que los legisladores no nos sentimos intimidados por ningún tipo de amenazas, vengan de la izquierda o de la derecha, ya que si algún día en esta Cámara dejáramos de decir lo que pensamos por algún temor que llegue a nuestro espíritu, nuestro deber es renunciar a las bancas y retirarnos del Parlamento.

Por eso, le doy a todo esto una gran trascendencia y pienso que tenemos que decir las cosas con exactitud. No es culpa nuestra que este asunto haya adquirido trascendencia nacional e internacional. Nosotros venimos a este recinto a expresar nuestro pensamiento, que es el mismo que hubiéramos expuesto antes, un poco acongojados por las circunstancias por todos conocidas. Es que deseamos fervientemente —ya lo dijimos en este recinto— que la Argentina se encauce definitivamente por el camino de la paz. Mucho nos preocupa que sectores extremistas, llámense como se llamen, sigan aún en este gobierno de jure pretendiendo imponerse por la fuerza frente al veredicto de las urnas. Pero esto no es tan sencillo.

Nosotros, cuando se hizo el análisis de la ley de amnistía, expresamos nuestro pensamiento, que yo quiero repetir aquí. Dijimos que la Argentina y América se veían permanentemente sobrecogidas por gobiernos de hecho y por gobiernos de jure, por gobiernos militares y por gobiernos civiles, en una sucesión interminable que haría parecer que el destino de esta parte del mundo es no poder tener gobiernos estables, gobiernos sólidos. Pero dijimos también que estos hechos no se producían por casualidad. No era porque los latinoamericanos fuéramos de espíritu inestable y perverso, sino porque América vivía y vive sometida a un sistema social y económico injusto, y frente a ese sistema

el sagrado derecho de la revolución y de la rebelión —que yo reivindico en este momento— es la única arma que les queda a los pueblos sometidos para expresarse.

Manifestamos, en consecuencia, que no nos sorprendían estos periódicos acontecimientos. Pero dijimos más. Dijimos ese día 26 de mayo que estas actitudes de fuerza frente al gobierno de facto no iban a cesar en el gobierno de jure. Y dimos ejemplos. Expresamos que otros países de América que cumplían con las formalidades democráticas, que llamaban a elecciones y que elegían su gobernantes, se encontraban, exactamente igual que los gobiernos de facto de Onganía, de Levingston o de Lanusse, enfrentados a esta misma problemática. Pretender que aquello sucedía porque se trataba de un gobierno militar y que dejaría de ocurrir en un gobierno civil, era un error de apreciación.

Es por eso que rectifico en parte la opinión expresada por el señor diputado Porto. La interpretación de esta bancada el día 26 de mayo no fue que se derogaba la legislación represiva por una exquisitez jurídica, dado que se trataba de decretos leyes, invocando los antecedentes constitucionales y los fallos de la Corte para decir que no tenían vigencia jurídica cuando se iniciaba el gobierno constitucional. Nosotros —entendiendo que también la Cámara— votamos con alegría, y con la calle rodeando este recinto, la terminación de una legislación represiva que permitía la persecución de ciudadanos honestos. Entendimos que se iniciaba así una nueva etapa en la vida del país, y nos paramos todos en este recinto, aplaudiendo y mirándonos a los ojos, viviendo el oficialismo y la oposición la misma emoción argentina.

Esa es nuestra interpretación del día 26 de mayo. Este es el sentimiento de esta bancada. Por eso yo, que soy abogado, dejo de lado el análisis jurídico, que puedo compartirlo con el señor diputado Porto, y digo que ese sentimiento fundamental que nos alentó entonces, entendiendo interpretar a la inmensa mayoría del pueblo argentino, es el mismo que nos alienta para oponernos a esta reforma del Código Penal. Dijimos que son causas mucho más profundas las que en este momento producen estos hechos de violencia. Tenemos que analizar estas causas, no podemos pasarlas por alto.

Deseo manifestar con claridad que este bloque no aprueba la violencia cuando se ha instalado un gobierno constitucional. A pesar de nuestras discrepancias con la mayoría, no estaremos nunca al servicio de la violencia y no avalaremos golpes de Estado de ninguna naturaleza. Cualquiera sean los errores cometidos por la mayoría a nuestro criterio, no vamos a ir a golpear la puerta de los cuarteles ni a hacernos solidarios con el crimen, que nos repugna por nuestra naturaleza y formación. Esto tiene que quedar bien aclarado para que no exista ninguna duda sobre el particular.

También sabemos que la historia de América y del mundo demuestra que el sistema imperialista y las grandes oligarquías no ceden en sus intereses sino cuando una inmensa mayoría del pueblo lo impone, caso que puede ser el de la Argentina a través del veredicto popular de las últimas elecciones, pero el camino es muy difícil.

Nosotros no estamos con el infantilismo de algunas izquierdas que, con el pretendido interés de combatir al gran capital adoptan la vía de la extrema violencia indiscriminada. Nosotros sabemos bien, por experiencia y por madurez política, que esas actitudes extremas llevan, en definitiva, a posibilitar en la Argentina y en América la instalación de los gobiernos de derecha. No debemos olvidar que los extremos se juntan y la ultraizquierda y la ultraderecha, aunque no lo crean así y aunque no se den cuenta algunos jóvenes inexpertos, están trabajando unidas esperando la posibilidad del golpe; pero la derecha será la que tomará el gobierno. Esto es lo que indica una larga experiencia histórica y los intereses que representa esa tendencia.

Diré algo más. Cualquiera hubiera sido el presidente de la República electo, cualquiera hubiera sido el resultado de las urnas, esto estaría sucediendo en la Argentina. No es culpa de nadie en particular, sino consecuencia de toda una situación que viene de antes, provocada en gran parte, sobre todo en gente muy joven, por el autoconvencimiento intelectual de que están cerradas todas las vías para la revolución. Entonces, en su inexperiencia y en su fanatismo, deciden jugarse su vida y asaltan, atacan, roban o matan.

Esos son los mismos que, junto con la derecha, enfrentaron al gobierno popular y revolucionario del doctor Allende en Chile y le crearon condiciones imposibles para gobernar. Son los responsables, les guste o no, del actual gobierno del general Pinochet.

Que quede en claro, entonces, que nosotros, que pretendemos tener una posición revolucionaria y de cambio, como está contenida en nuestro programa de la Alianza, no caeremos en ese error ni nos sentiremos tentados por ese mal.

Quiero también decir aquí, con respecto al concepto de la violencia, que tenemos una discrepancia muy importante con la interpretación del Poder Ejecutivo y la que pareciera ser de la mayoría. El actual presidente de la República manifestó desde Madrid, frente a los hechos de violencia que asolaban al gobierno de facto, que la violencia de arriba justifica la violencia de abajo. Nosotros compartimos ese criterio, señor presidente. Pero es que de acuerdo con la lectura del pensamiento expuesto por el señor presidente estos últimos días, parecería que la interpretación de la violencia de arriba se reduce a las actitudes dictatoriales del gobierno de facto, de su policía, con las torturas y las persecuciones.

Nosotros entendemos que la violencia de arriba no se reduce a las actitudes de un gobierno de facto, sino a las de toda la élite dirigente en todos los ámbitos de la vida del país que se niega a abrir el paso a las grandes corrientes populares. Y si se me dice que los últimos hechos ocurridos son violencia —lo son y los repudio—, no puedo dejar de expresar que también es violencia en el país la mala distribución de la riqueza, al igual que la intermediación parasitaria que se queda con la ganancia de la Argentina, o que los grandes latifundistas incapaces de comprender un proceso revolucionario.

También es violencia en el país la actitud de los vaciadores de empresas, que viven impunes en París, habiendo dejado al país una deuda e impaga a los obreros la indemnización que les corresponde. Incurren en violencia, así mismo, los negociadores de la soberanía nacional y los funcionarios venales capaces de tomar actitudes contrarias al interés nacional.

También es violencia la de los torturadores que pueden quedar sin castigo y que rebelan el espíritu de la juventud. Otra forma de violencia está dada por la literatura impuesta por los imperialismos. También es violencia la pobreza de las provincias del interior frente al área metropolitana de Buenos Aires, o la muerte de un niño a causa del hambre.

En definitiva, señor presidente, es violencia la que se nos enseña en el cine, en las revistas y en la literatura, porque conforman una mentalidad que lleva a los jóvenes, que creen hacer una revolución con cierta dosis de lirismo, a la vía de las armas. La violencia se da tanto en el hombre que tiene que robar para dar de comer a sus hijos, rompiendo una norma jurídica, como en aquel otro que toma las armas para atacar al gran capital.

Aparte de esto, tenemos que entender que los nuevos medios de comunicación posibilitan que el hombre argentino y americano esté ahora informado sobre los últimos adelantos del mundo y sus propias posibilidades. Ya no es el hombre ignorante metido en la selva, que inclusive, por no haber podido ni leer, no conocía y entendía la literatura que le enseñaba la revolución. Ahora es un hombre que conoce, que como ser humano tiene el legítimo derecho de vivir como los demás. Y este fenómeno es mundial, señor presidente. Violencia en los hombres y a veces violencia en los pueblos.

Pero toda esta lucha es por el mejoramiento del ser humano y significa el despertar de la conciencia de los hombres. Por eso nosotros no nos vamos a limitar a la condenación de la violencia que produce un hecho de fuerza en un cuartel o en la desgraciada muerte de un ciudadano. Queremos profundizar en todo lo que ha creado un clima de violencia y decir que hasta que se extirpen todas esas causas profundas, tenemos que pensar en acostumbrarnos a tratar con serenidad estos problemas.

El gobierno ha enviado este proyecto que ha sido sancionado por el Senado. Pero ocurre un hecho curioso: sectores del capital tradicionalmente antiperonistas, que no solamente estuvieron a favor del derrocamiento del actual presidente sino que inclusive durante su ausencia en Madrid hasta desearon su muerte, hoy resulta que se acercan al gobierno también para pedirle que no cese en su intención y para decirle que le parece bien que la legislación represiva avance porque no se puede permitir este tipo de subversión. No es porque el gobierno lo quiera, según yo entiendo, pero algunos aliados deben hacer pensar.

La gran prensa, los grandes intereses internacionales y la oligarquía nacional, que en un momento desearon la muerte del actual presidente, hoy rezan por su vida, y voy a decir por qué: pretenden poner al presidente de la República al servicio del statu quo, porque en definitiva le temen mucho al proceso revolucionario que evidentemente significan las grandes masas argentinas y las masas peronistas. No vaya a ser que este asunto siga adelante y que se llegue a un proceso profundo de reforma económica; no vaya a ser que se llegue a un socialismo nacional, porque entonces estos mismos sectores que le reclaman al presidente medidas duras van a esgrimir estos argumentos para decir que el gobierno se transformó en una dictadura. Y esos mismos sectores que pueden ser aliados de hoy, van a golpear las puertas de los cuarteles, como lo han hecho tradicionalmente, para decir que el gobierno se ha desquiciado y que no hay garantías para la libertad. Son los demócratas, entre comillas, de siempre; los que creen en la democracia de la minoría, los ostentadores de la riqueza y el dinero que vienen desde el fondo de nuestra historia. Esos sectores empujan para que el gobierno avance y se equivoque y tome medidas de este tipo, porque de esa manera sin la menor duda van a encontrar después los argumentos para acusar al mismo gobierno que dicen defender.

Se ha dicho y lo ha analizado exhaustivamente el diputado Porto, por quien tengo una gran estima y consideración, que el aumento de las penas —por lo menos, así creo haberlo entendido— sirve como medida de intimidación para evitar la comisión del delito. Sostengo que toda la moderna tesis jurídica penal ha evolucionado en el sentido de que a mayor pena no hay menor delito o disminución de la actividad delictiva. En los últimos congresos internacionales, así como en los ordenamientos jurídicos más avanzados, sean de uno u otro lugar del mundo, se ha llegado a la conclusión de que la pena excesiva no es suficiente, ya que la sanción es una parte componente de un complejo jurídico en el que la actividad o actitud preventiva del delito es el hecho fundamental del derecho penal.

Pero si queremos analizar el concepto de prevención de la actividad delictiva, no podemos pasar por alto el contexto social y económico que rodea al individuo. Así, cuando un hombre común roba para comer, el juez pondera el estado de necesidad de esa persona para saber cuál fue el móvil que lo impulsó a cometer tal delito. De la misma manera, para alcanzar una mayor profundidad en el análisis de una reforma penal y estar seguros de que al establecer una pena ella está en relación con el bien protegido, tenemos que conocer el contexto social en el cual esa persona delinque, valorar las posibilidades de readaptarla a una vida normal y conocer las motivaciones ideológicas que llevan a un hombre —a veces culto y joven— a dejarse matar. Y esto no es tan fácil, señor presidente.

Estas consideraciones exigen que reflexionemos cuidadosamente acerca de una reforma que ha de posibilitar que el análisis de que hablaba esté a cargo de un comisario de la policía o un subalterno —y lo digo sin ninguna intención de agraviar—, sin la cultura jurídica y humanista suficiente, quien determinará cuándo un ciudadano ha incurrido en amenazas que deban ser sancionadas por el Código Penal, a los efectos de proceder consecuentemente a su detención. Si bien contamos con la buena voluntad expresada por el presidente de la República, sabemos que no ha de ser él quien aplique estas sanciones sino toda la gama de subalternos, la mayoría de los cuales fueron también funcionarios de la dictadura militar. Si posibilitamos que sean éstos quienes determinen cuándo y cómo se ha incurrido en estas amplias figuras delictivas, yo auguro, señor presidente, que se han de cometer enormes excesos jurídicos y humanos que lamentablemente van a desprestigiar a esta democracia por la cual todos estamos luchando.

Por otra parte, el señor diputado Porto se ha referido a este aspecto. El artículo 59 de la ley 20.509 constituyó una comisión reformadora del Código Penal y recuerdo precisamente que en el análisis hecho en comisión con motivo de numerosos proyectos presentados por señores diputados tendientes a la reforma de dicho código, el pensamiento de la mayoría de la comisión fue aconsejar a los legisladores efectuar el menor número de reformas, ya que el nuevo Código Penal que habrá de sancionarse deberá tener las características de profundidad y serenidad jurídica que hacen que un cuerpo legal sea permanente y estable.

En el mensaje del Poder Ejecutivo se expresa que se deben aumentar las penas para impedir la excarcelación. Y yo recuerdo que hace poco tiempo dictamos en esta Cámara una ley de reforma al Código de Procedimientos que era más benigna en esta materia. Entonces, tenemos derecho a preguntarnos cuál es el criterio con el que, en definitiva, se manejará el Poder Ejecutivo: si con aquel criterio de benignidad

o con éste de severidad. Pienso que en todo esto hay mucho de improvisación, y a eso me voy a referir.

Tuve sumo interés en leer las palabras del señor presidente de la República en ocasión de recibir a un grupo de legisladores nacionales, para conocer su pensamiento como autor del proyecto. Creo, con todo respeto, que es muy posible que el presidente de la República no esté totalmente bien informado del contexto jurídico que estamos tratando. Hay una frase que me lo revela, que voy a leerla, cuando contestando a un diputado dice: «Entonces, las consideraciones son sobre la configuración del delito (refiriéndose a las preguntas que se le hicieron). Esta es una tarea del juez. El que hace la configuración del delito o de la asociación ilícita es el juez. Nosotros no podemos pensar en que ya la ley va a ir configurando los delitos de asociación ilícita. Eso es una enormidad. Esa es una tarea para el juez. Lo que no está claro en la ley será el juez el que lo interprete. Yo no lo considero una dificultad, porque eso ya se ha discutido entre nosotros, en el Poder Ejecutivo. En cualquiera de esas circunstancias, el delito lo configura el juez, no nosotros. La ley no configura un delito; la ley enuncia un delito y sanciona ese delito. Quien debe configurar el delito e imponer la sanción correspondiente es el juez».

Entiendo —y no hace falta ser abogado para comprenderlo— que al establecer la norma jurídica en su latitud y en su redacción, le estamos dando al juez la disposición exacta para que él se pueda manejar entre su máximo y su mínimo. El juez es esclavo de la ley que se dicta. No hace lo que le parece. Si se posibilita que el juez pueda interpretar cuándo existe una amenaza, aunque no sea con armas, en caso de que tenga una mentalidad reaccionaria, va a decidir que un insulto es una amenaza. Eso no puede delegarse en el juez; tiene que especificarlo la ley. Por eso estimo que esta expresión del Poder Ejecutivo se debe posiblemente a una mala información que se le ha brindado.

Pero digo más. El señor presidente de la República ha manifestado que si no sancionamos esta ley el gobierno se encontrará indefenso frente a la subversión y el terrorismo. Y expresó: «Atarnos las manos frente a esa fuerza; ...especialmente atarse las manos suprimiendo la ley que los puede sancionar... porque nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana...». Es decir que el señor presidente entiende que el actual Código Penal no le ofrece la posibilidad de reprimir esta actividad. Nosotros sostenemos que no es así. Afirmamos esto porque en el Código Penal está legislado el homicidio, con sus agravantes; la privación de la libertad con agravación en el 142, el robo agravado en

el 166, la extorsión en el 168, el chantaje en el 169, el secuestro extorsivo en el 170, la intimidación pública en el 209, la asociación ilícita en el 210, la intimidación pública en el 211, la rebelión en el 226, la falsificación de documentos en el 292. Si lo que se quiere decir es que en algunos de estos delitos, por no haberse aumentado el mínimo, podría entonces disponerse de los beneficios de la condena condicional, eso es otra cosa. Pero el problema acá está en la posibilidad de detener a estos ciudadanos y no en la falta de la norma jurídica.

Pero hay algo que me preocupó más, señor presidente. Si el titular del Poder Ejecutivo afirma que en caso de que no fuera necesario usar la vía de la ley, en una semana este problema se terminaba, esto me hace pensar que el presidente de la República está en conocimiento de quiénes son, cuántos son y dónde están, pues si pensara lo contrario tendría que creer que la expresión del presidente significa la persecución de quienes por su ideología se supone que pueden estar en este tipo de emboscadas o de crímenes. Y yo afirmo que si el señor presidente tiene los medios sin la ley para terminar con esto en una semana, tal como está redactado el Código Penal también puede solucionar el problema, pues en definitiva podrá hacer las detenciones en menos de una semana y realizar los procesos. De allí nuestra oposición.

No habré de referirme a los delitos que acabo de mencionar, en los que se aumentan las penas y sobre los que versó con mucha exactitud crítica el señor diputado Day. He de hacerlo con respecto a los nuevos delitos, a los que puede referirse el señor presidente de la República al decir: «Dénme la ley, que la necesito».

Nos encontramos, entonces, en primer lugar con el artículo 142 bis, por el que se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años a quien sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Sr. Presidente (Busacca).— Señor diputado Musacchio: al hacer uso de la palabra, ¿qué representación inviste?

Sr. Musacchio.— La del bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, que integran los partidos Intransigente y Comunista; además, como miembro de la comisión y firmante del despacho en disidencia total.

Sr. Portero.— Si me permite, señor presidente, sugiero que utilicemos, en caso de excederse el término de que dispone el señor diputado Musacchio, el mismo procedimiento que adoptó el bloque de la mayoría en esta sesión.

Sr. Musacchio.— Ya concluyo, señor presidente.

De acuerdo con la redacción del artículo 142 bis incluido en el despacho mayoritario, la sustracción, retención u ocultación de una persona es pasible de una pena de cinco a quince años

de prisión o reclusión. Yo me pregunto qué sucederá frente al caso común y concreto de que un grupo de asalariados retenga en la empresa a su patrón en razón de no haber percibido los salarios que les corresponden.

Yo me pregunto, ante este caso concreto de orden social, frente al ejercicio del derecho de estos ciudadanos y en una actitud de retención, tal cual está redactada la disposición, si ello puede implicar para la parte patronal el derecho a que los denuncie, pudiendo ser condenado hasta a quince años de prisión o reclusión este sector trabajador por la adopción de esa actitud. Dirijo esta inquietud al señor miembro informante de la mayoría porque sé que, tal como él acostumbra hacerlo, expondrá al final su punto de vista y seguramente responderá a esta pregunta, lo cual es muy importante para la interpretación de la ley.

Aparte de esta situación, el artículo 142 bis establece los agravantes, para los que se dispone pena de prisión o reclusión de diez a veinticinco años. Un agravante se configura cuando la víctima sea mujer o menor de dieciocho años, y otro en los casos previstos en el artículo 142; incisos 2º y 3º de este código. El artículo 142, inciso 3º, posibilita el agravante cuando esa retención cause grave daño al negocio del ofendido, situación que puede ser esgrimida concretamente en el caso que he planteado, por lo que puede llegarse a imponer en definitiva hasta veinticinco años de prisión a esos trabajadores.

Otra de las figuras que mucho nos preocupan es la del artículo 149 bis, que establece: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas», creándose una distinción para los casos en que hubiese empleo de armas o amenazas anónimas, así como otros agravantes.

Si bien el señor diputado Porto expuso con erudición los antecedentes y citó códigos, debe quedar en claro que, tal como está redactado el artículo, la simple amenaza sin ningún tipo de consecuencias y de acuerdo con la interpretación del juez, merece un máximo de prisión de dos años.

El artículo 149 ter agrega que en el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será de cinco a diez años de prisión o reclusión «si las amenazas tuvieron como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos» (inciso 2, apartado a). Vale decir que de acuerdo con la interpretación estricta de esta disposición, si los empleados públicos, por ejemplo, pretenden una reivindicación o un reclamo y se interpreta que su planteo, por los términos y la vehemencia utilizados, significa una intimidación para el funcionario a que va dirigido, son pasibles de una pena de hasta diez años de prisión. Es importante que este aspecto sea aclarado por el señor miembro informante,

puesto que la redacción es concreta y aparentemente clara. Repito: «Si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.»

Por estas razones, cuando decimos que esta ley es represiva no es porque queramos agraviar a la mayoría, sino porque ésta es la ley que le damos al juez, y sabemos que la interpretación del juez en función de estas normas puede ser cualquier interpretación según su leal saber y entender. Es de buena técnica jurídica —y esto también lo aprendí del señor diputado Porto, porque soy otro de sus ex alumnos— que la norma legal debe ser precisa, clara y justa para que el juez pueda en definitiva hacer una interpretación correcta de ella.

El artículo 212 expresa que «será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación». ¿Qué es la incitación, señor presidente? Si alguien dice —como estamos acostumbrados a decir nosotros— que la revolución debe hacerse por las urnas o por las armas —nos referimos a la transformación social, a la revolución social—, un juez podrá interpretar, con todo derecho, que en definitiva estamos incitando a la violencia. Ni aun los mejores abogados, entonces, podrán sacarnos de la cárcel, señor presidente. Por lo tanto, no hay que darle a los jueces esta norma jurídica.

Tampoco hay que darle la del artículo 213 bis, que amplía la asociación ilícita, cuando dice que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación». Quiere decir, señor presidente, que en la verdadera revolución social que haremos los argentinos para terminar con el latifundio y con el gran capital estaremos atemorizados de que alguien nos denuncie. Con esta norma, por lo tanto, se engendran los mayores excesos.

En el análisis de estos pocos artículos que he citado, al igual que en los otros, a los cuales nos referiremos en el momento de la discusión en particular, se encuentra el acto de mayor colaboración que estamos haciendo con el Poder Ejecutivo. Hubiéramos deseado discutir este problema mano a mano con los señores ministros, conocer a fondo las motivaciones que ellos sustentan, y hacer que esta oposición, que ha sido reconocida por la mayoría como una oposición distinta a todas las que hubo en el país, que sabe callar discrepancias en aras de la unidad nacional, que necesita decirle cosas de una manera que no ofenda ni agravie, tenga un rol concreto de colaboración con el gobierno. Nos-

otros no queremos limitarnos a exponer de noche nuestros pensamientos para algún curioso que lea el Diario de Sesiones, sino para que el Poder Ejecutivo conozca nuestra opinión.

Si la frase de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino es una realidad, yo expreso que soy tan argentino como un hombre del peronismo, que estoy por la legalidad y por el cambio, al igual que los hombres del peronismo, que me alientan ansias de revolución, que rompo los rótulos de los partidos que no me importan en aras de la bandera nacional y que soy capaz de cualquier sacrificio, porque este país no puede esperar ni un minuto más. Pero para ello necesitamos ser escuchados; no ahora ni en el recinto, en donde privará una decisión que está tomada de antemano. Necesitamos ser escuchados en la elaboración de las ideas para poder decirle al señor presidente que si hacen daño las ultraizquierdas, que atacan, y matan, también hacen daño las ultraderechas, con mentalidad reaccionaria y totalitaria, a pesar de que ambas saben gritar: viva Perón. Por supuesto, ninguno de estos dos polos está consubstanciado con el pensamiento democrático del pueblo argentino.

Si pudiéramos decir estas cosas y discutir las en igualdad de condiciones, y ser escuchados como los diputados de la mayoría, hermanados en esta causa nacional, en este pequeño lugar de América, estoy seguro de que la síntesis que resultaría de este proceso sería feliz, porque de los enfrentamientos pacíficos de las ideas lograríamos realizar la Nación como tal, que no es solamente el peronismo, aunque éste sea una inmensa mayoría. A todos nos alienta la misma pasión, el mismo afán de reconstrucción nacional. A todos nos alienta la idea de luchar contra el golpe de Estado y la violencia. Todos corremos los mismos riesgos, porque los que no hemos sido amenazados por la ultraizquierda, hemos sido amenazados por la ultraderecha. Todos tenemos familias y nos hemos jugado a fondo en esta causa.

Reclamo entonces que en el futuro, al lado del presidente de la República, podamos discutir y elaborar estas grandes ideas, porque ésa es la misión de una oposición que, como nunca, supo ponerse a la altura de las circunstancias y decir las cosas de tal manera y callarlas de tal forma que ello constituye el mejor homenaje que se pueda rendir a la patria. Espero que las generaciones venideras sepan reconocerlo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Señores diputados: en razón de que hay 17 señores diputados anotados en la lista de oradores y teniendo en cuenta que la Comisión de Labor Parlamentaria ha resuelto aplicar el reglamento en cuanto al término de exposición, la Presidencia solicita a quien va a hacer uso de la palabra manifieste

en qué carácter lo hace a fin de poder establecer el tiempo correspondiente.

Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.

Sr. Cárdenas. — Señor presidente: hablo en nombre del bloque de Vanguardia Federal y como firmante del despacho en disidencia.

Nuestra posición ya ha sido claramente fijada en ese despacho; y aunque ese disconformismo nuestro pudiera fácilmente transformarse en un mero y simple ataque político al gobierno, al estilo del viejo parlamentarismo liberal, voy a desecharlo tan deleznable camino, y voy a intentar dar a mi breve exposición un tono más bien reflexivo, fruto de la honda preocupación que siento por la crisis de fe que advierto en ciertas actitudes del gobierno popular.

Desde luego, no voy a hacer un inventario de contradicciones entre lo que se dijo esta noche para fundamentar la legislación que se va a votar y lo que se dijo en mayo para derogarla, ni me voy a ocupar de las deficiencias técnicas del proyecto, porque ya lo han hecho con brillantez los señores diputados Musacchio y Day, ni me voy a referir al divorcio total de esta ley con las más avanzadas teorías de defensa del Estado en materia penal.

Quiero simplemente decir que el delito político se transforma fácilmente en delito común, según sea el prisma con que se lo juzgue, pero para que ello suceda es necesario contar con una pauta legal como la que estamos considerando, que sea lo suficientemente ambigua y elástica como para inclinar el criterio del juzgador en uno u otro sentido.

Esta es casi una constante en los gobiernos de fuerza, y nuestra historia reciente tiene sobrados ejemplos de ello. Pero sucede que no estamos viviendo bajo un régimen de fuerza y que por primera vez, quizás, el oficialismo y la oposición conforman un frente común que, sin pactos espurios, sin acuerdos de trastienda, sin contraprestaciones, está dirigiendo sus esfuerzos, prestigiados por las naturales discrepancias de los hombres libres, hacia lo que todos hemos dado en llamar la reconstrucción nacional, que no es otra cosa que la justicia social elaborada en el juego limpio de las instituciones democráticas.

Este emprendimiento histórico se defiende solo, porque tiene la apoyatura esperanzada de una inmensa mayoría popular. Y el presidente de la Nación hace pocas horas, en la audiencia concedida a los representantes juveniles de su partido, ha dicho: «Tenemos la seguridad de que la mayoría absoluta del pueblo nos acompaña, y cuando un movimiento está apoyado por el pueblo no hay fuerza que se le pueda oponer. De eso estoy totalmente convencido». Todos estamos convencidos de lo mismo. Por eso quienes no lo entienden así, aun en esta concreta emergencia, están traicionando esa esperanza, aunque una aflicción momentánea los esté haciendo actuar en un sentido distinto al que el pueblo

quiere. Los que hacen armas contra un gobierno del pueblo son delincuentes comunes. Los que las acopian, también; y los que quieren imponer sus ideas por la fuerza, también.

A la misma hora en que los criminales invadían el regimiento de Azul entraba en prensa el diario «La Opinión», en el que se transcribe lo que el presidente de la República le dice a un periodista extranjero refiriéndose a la violencia: «Tendríamos dos actitudes que tomar: organizar una fuerza represiva y darles; tendríamos que matar una cantidad de gente. Yo no soy partidario de eso. Yo los dejo a todos que se cocinen en su propia salsa. Ellos mueren solos porque no tienen una causa real». Y más adelante expresa: «Nosotros no somos gente de represión. Por eso yo prefiero que sigan haciendo esos bochinchos. Los únicos que se perjudican son ellos».

Esta es, a mi juicio, la filosofía política aplicable al caso de la violencia, porque la violencia no es solamente un problema nuestro. Es el fruto universal de una sociedad conflictiva y en crisis. No pretendamos que nuestro país sea una ínsula paradisíaca ajena a estas tensiones, que pueden tener causas profundas y complejas, pero tampoco nos vayamos al extremo de ponerle alambrada a las ideas, a las disensiones o a las protestas porque estaríamos otorgándonos un certificado de incapacidad total para llevar adelante la alta misión que el pueblo nos confirió: hacer la justicia social, único remedio conocido contra la violencia.

Durante mucho tiempo la frase «la violencia de arriba engendra la violencia de abajo» sirvió a modo de explicación, de programa y de justificación de un fenómeno sociopolítico que por sus proporciones, por su importancia y por su persistencia resultaba inédito en la vida nacional. El país, salido de su asombro inicial, fue asimilando, con el correr de los meses y los años, la nota roja de la metralleta, el atentado, el secuestro y la muerte como parte de su vida cotidiana. Pero flotaba siempre, sin embargo, sobre esa angustia permanente y colectiva, la esperanza redentora de un acto comicial que, superando las proscripciones, permitiera al pueblo llegar al pleno ejercicio del poder. La Hora del Pueblo vino a ser así un acuerdo inicial que abría el camino para la solución institucional, y en marzo y septiembre de 1973 millones de argentinos, peronistas y no peronistas, apostaron, y ganaron, al reencuentro y a la reconstrucción en paz. Este es el camino que debemos seguir; éste es el triunfo que debemos preservar; éste es el mandato que debemos cumplir.

¿Pero qué Argentina potencia podemos hacer nosotros si somos capaces de caer con tanta facilidad en estos histerismos legales; si unas cuantas ratas, como alguna vez las calificó el señor diputado Stecco en este recinto, nos hacen trepar asustados a las sillas; si vamos ingenuamente al juego a que nos lleva la violencia de

abajo para provocar precisamente estos engendros legales que institucionalizan de nuevo la violencia de arriba y hacen entrar al país en la ronda del caos, en la que ganan siempre los enemigos del pueblo?

El Estado siempre ha tenido enemigos, pacientes y solapados los unos, violentos los otros, de ultraderecha o de ultraizquierda, y una de las tendencias operativas de los violentos es, precisamente, lograr mediante la provocación la sanción de normas represivas duras, y si son ambiguas mejor, porque entonces se ensancha el área teórica de los perseguidos y éstos van a sumarse a sus filas por un elemental sentido de autodefensa.

Ese es el juego en el que nos están haciendo entrar. Una ley penal de esta naturaleza es más peligrosa para el gobierno popular que la metrallata más sofisticada o la bomba más poderosa, porque el mal disimulado matiz ideológico que voluntaria o involuntariamente contiene, tendrá la desgraciada virtud de convertir la disensión en delito, el disconformismo en alzamiento, la protesta en atentado, y poco a poco la provocación organizada logrará el objetivo de dividir el formidable frente de pueblo y gobierno y la reconstrucción anhelada será apenas una ilusión deshecha en las manos de ministros medrosos y de un Parlamento que, lamentablemente, no supo estar a la altura de la fe que el pueblo puso en él.

El enemigo de este gobierno popular no es el obrero, al que no le conforma el Pacto Social, ni el estudiante, que tiene sus propias ideas sobre la ley universitaria, ni el político, que lucha lealmente por una concepción distinta del manejo de la cosa pública, ni el docente que protesta, ni el jubilado que sufre, ni el vecino, que en la rueda del café habla mal de Gelbard o de López Rega, ni el profesional frustrado, ni el villero que se las aguanta, ni el cura que lo conforta.

Todos ellos, y la inmensa mayoría silenciosa que representan, no le han pedido ni le pedirán jamás a este gobierno un milagro que revierta en meses un proceso que los afecta desde hace muchos años.

Sufren, pero confían; se alteran, pero confían; protestan, pero confían; disienten, pero confían. Son el pueblo, lo mejor que tenemos, y lo menos que podemos hacer por ellos es darles la contraprestación de nuestra confianza, y no echar la sombra ominosa de esta ley sobre sus rebeldías o sus protestas, porque estaríamos negando nuestro origen, haciéndole el juego al enemigo y traicionando nuestra propia conciencia.

Los enemigos de este gobierno están en otra parte. Son los que construyen torres energéticas que se caen; son los que hacen peligrar El Chocón por defectos materiales y de tecnología; son los que defraudan al Estado con los contratos telefónicos; son los que acaparan alimentos y

materiales esenciales, como lo probó el señor diputado Cominguez, y los contrabandistas; son los que construyeron Atucha, la construyeron mal y la entregaron cuando se les vino en gana; son los que traban la investigación del vaciamiento de los ingenios tucumanos; son los que quieren ponerle corse a la cultura popular, quemar cines, secuestran libros y ofician de nuevos Torquemadas, formando piras con diarios desafectos, como si los argentinos constituyéramos un selecto grupo de minorados mentales incapaces de discernir entre el bien o el mal.

Enemigos de este gobierno son los que se llenan la boca con la defensa de «nuestro estilo de vida occidental y cristiano» y le roban al prójimo en los comercios, en los sanatorios y en los lugares de veraneo, aunque luego vayan al templo a golpear el pecho; fariseos de nuevo cuño que están pidiendo a gritos el látigo purificador. Son los monopolios y sus estrididos abogaditos nativos y alguno que otro funcionario tentado por los *rendez vous* publicitados del Sheraton, lujoso engendro fruto del latrocinio a las arcas nacionales.

Esos son los enemigos verdaderos: no usan metrallatas ni bombas, pero pueden aniquilar la fe de un pueblo. Cuando los señores diputados de la mayoría dispongan una estructura penal para sancionarlos la votaremos por unanimidad y junto a nosotros la estará votando todo el pueblo de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Valenzuela.

Sr. Valenzuela. — Señor presidente: intervengo en este debate en mi carácter de miembro de la Comisión de Legislación Penal firmante de un dictamen en disidencia total. Lo hago también en nombre del bloque del Partido Bloquista.

Entro a este debate, si se quiere, algo apenado. Creo que el tratamiento del proyecto de ley es inoportuno. Lo es porque todavía están golpeando en nuestros espíritus los sucesos de Azul. A pocas horas de producido ese luctuoso atentado, que todos hemos repudiado, venimos a este recinto para tratar la reforma del Código Penal y la instauración de una legislación que nosotros llamamos represiva. Esos desgraciados acontecimientos influyen en el ánimo y en el espíritu de todos los argentinos, y nosotros, como representantes del pueblo, nos sentimos fuertemente conmovidos.

No es fácil, entonces, mantener la indispensable presencia de espíritu y objetividad que se requieren para el análisis de este tema. El tratamiento del proyecto es también inoportuno porque, como lo expresaron los señores diputados Day y Musacchio, es indispensable un estudio exhaustivo y a conciencia de todo el Código Penal. Estamos de acuerdo en reformar el Código Penal, pero debemos hacerlo en una forma coherente. Desgraciadamente, ésta no es la circunstancia propicia.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Luis Antonio García.

Sr. Valenzuela. — El proyecto de ley que consideramos cuenta ya con la sanción del Honorable Senado. En verdad, es un engendro de chapuceros del derecho. Se modifica una veintena de artículos de nuestro Código Penal con un espíritu draconiano.

Los códigos vigentes en nuestro país han sido conformados en función de una filosofía coherente. Nuestro Código Penal se funda en la filosofía liberal. Si quieren introducir modificaciones, ellas deberían conformarse a esa filosofía, pero indudablemente eso no ha ocurrido en este caso. El proyecto que consideramos, repito, es un engendro draconiano. Por eso hemos suscrito un dictamen en disidencia total.

El problema que pretende solucionarse con la reforma del Código Penal es un problema de fondo, de larga data en el país y de una entidad suficiente que justifica que todos los argentinos y que todas las instituciones especializadas se ocupen de este problema, no sólo el Parlamento. Este es un problema de fondo que no se soluciona modificando las escalas penales. Hay un problema carcelario de por medio. Se debe tender imperiosamente a la resocialización del delincuente; es necesario que inclusive cuando se intente la reforma de nuestros códigos, especialmente el Código Penal, se proceda a la revisión en su integridad y en forma orgánica y coherente, tanto en la parte general como en la especial.

Eliminar la delincuencia o atenuar sus efectos constituye un problema más sociológico que jurídico y se necesita tiempo para ello; no se puede erradicar de un plumazo esta escalada de violencia que viene soportando el país, no de ahora sino de varios años atrás. Siete u ocho meses de gobierno, que es el lapso de vida del gobierno popular, es un plazo muy exiguo y nosotros no podemos pretender que en él se erradique la violencia y la delincuencia que existe en el país, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo gobierno ha señalado que recibió un país desquiciado material e inclusive moralmente.

Por otra parte, el Código Penal actual tiene todos los elementos mínimos indispensables de represión que necesita el Estado para su defensa. Observemos así, un poco al pasar, su artículo 79 cuando señala que se aplicará prisión o reclusión de ocho a veinticinco años al que matare a otro, homicidio simple; para el homicidio calificado está el artículo 80; el artículo 90, en relación con las lesiones; el artículo 91, que contempla los agravantes; el artículo 141, que será reprimido con prisión de un mes a un año al que ilegalmente privare a otro de su libertad sin mediar, por supuesto, agravantes; el artículo 186, referente a incendios y otros es-

tragos; también se hallan contempladas la rebelión y la sedición. Vale decir que, tal como lo dijo el señor diputado Porto, todos los delitos cuya modificación se pretende por este proyecto ya están incluidos en el Código Penal. Por lo tanto, el Estado cuenta con elementos jurídicos suficientes para su defensa.

Yo no quiero esta noche centrar toda la atención en hacer una crítica a este proyecto desde el punto de vista jurídico, porque con mucha certeza, agudeza y profundidad ya lo hicieron los diputados Day y Musacchio; pero sí quiero hacer mención a las motivaciones que han traído este proyecto a la Cámara.

Todo código penal y toda legislación represiva tienen por objeto la defensa de la sociedad y del Estado en definitiva, frente a grupos aislados o individualidades de la delincuencia. Pero el presidente de la República ha dicho, no recuerdo si ayer o anteayer, en uno de sus discursos, que el Estado argentino se halla en situación de indefensión prácticamente frente a los grupos armados que están haciendo esta escalada de violencia. Sostengo que este argumento no es exacto toda vez que nuestro Estado cuenta para su defensa con una estructura jurídica, política y social idónea.

Así, cuenta con una institución prestigiosa como son las fuerzas armadas en sus tres ramas —Ejército, Marina y Aeronáutica—, que tienen bajo bandera aproximadamente unos doscientos mil hombres, con un cuadro de oficiales y suboficiales altamente capacitados, no ya exclusivamente para la defensa de la soberanía por la eventualidad de un ataque exterior, sino también para contrarrestar ataques internos, entre los que se encuentra precisamente la subversión.

Cuenta también el Estado con otra institución, la Gendarmería Nacional, con un eficiente conjunto de oficiales y suboficiales que, al igual que en el caso de las fuerzas armadas, están capacitados para defender nuestra soberanía frente a ataques externos o internos. No podemos olvidar que en los últimos diez años han venido muchos instructores yanquis a nuestro país.

También se encuentra dentro de las instituciones del Estado la Policía Federal, con un cuadro de tropa, oficiales y suboficiales altamente capacitados no sólo para la prevención y detección de delitos comunes sino también de los políticos, pues han sido instruidos para ello.

Todas las instituciones citadas cuentan con los elementos técnicos adecuados y ultramodernos que les posibilitan, o debieran posibilitar, no ya la represión sino la prevención de los delitos. Además, las fuerzas armadas cuentan con servicios de informaciones del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, interconectados entre sí y dependientes del Servicio de Informaciones del Estado, los que se encuentran entre los más eficientes del mundo.

Además de esas instituciones que coadyuvan a la defensa del Estado argentino, se cuenta con un elemento mucho más eficiente para la defensa de sus propias instituciones: su pueblo, del cual siete millones y medio votaron por el actual presidente de la República, y en su casi totalidad lo hicieron en las últimas elecciones por la democracia, por el sistema representativo, republicano y federal, por su mantenimiento, sostenimiento y fortalecimiento, que es precisamente lo que estamos tratando de defender en este momento.

Traigo a colación ese elemento pueblo porque ninguna legislación represiva puede tener aplicación práctica en el mundo si no cuenta con el aval de la inmensa mayoría de sus propios protegidos.

Pero además de todo ello, el Estado argentino cuenta en su haber —es justo e hidalgo reconocerlo— con un presidente de la República que tiene una tremenda autoridad moral ante el pueblo; tanto es así que le ha impuesto un pacto social que no conforma a los obreros, y sin embargo lo aceptan, caso único en la historia del país. En conclusión: ¿cómo se puede decir que el Estado argentino está indefenso? Sostengo que en este aspecto que estamos tratando el Estado argentino es uno de los mejor defendidos del mundo, en la misma jerarquía que las primeras potencias mundiales, porque hay algunas que se encuentran divididas en su sociedad, por problemas raciales o religiosos, y nosotros no los tenemos. Nuestro pueblo, en su casi totalidad, está unido detrás de las banderas de la liberación nacional. Tenemos un pueblo unido, en su casi totalidad, detrás de esas hermosas palabras que son: república, federalismo, democracia.

Ese mismo pueblo, al respetar al gobierno, al apoyarlo masivamente, al tratar de disimular los muchos errores que comete, es el mejor ejemplo que se puede dar al mundo de que éste es un Estado fuerte, que no está indefenso. No necesitamos leyes represivas ni elevar la escala penal para aislar a los delincuentes. A los delincuentes los aísla el propio pueblo. Esto no es un invento mío, sino que lo dijo el propio Perón.

Decía que no deseaba entrar en el análisis de algunos aspectos de la ley, sino centrar mi exposición en un problema político o, si se quiere, filosófico. Pero es necesario, sin duda, que se toquen, aunque sea un poco a la ligera, determinadas cosas que trae esta iniciativa, hecha por aprendices. El caso más concreto y peligroso es el que se incluye como artículo 189 bis del Código Penal, donde se habla de la tenencia de armas, aparatos, etcétera.

Poco tiempo ha tuve una charla con un coronel, porque no es posible que caigamos nuevamente en la misma tesitura que se ha tenido años atrás, de dejar librado a decretos del Poder Ejecutivo este aspecto, pues en definitiva no hacen otra cosa que reflejar las opiniones interesadas de pseudoorganismos técnicos. En esa

charla que tuve con un coronel entendido en la materia le pregunté que significaba para las fuerzas armadas un arma de guerra. Me respondió enumerando los calibres. Al preguntarle si era un arma de guerra un calibre 22, me manifestó que no. Le dije que un calibre 22 era tanto o más peligroso que una pistola 45. Desafío —le expresé, y lo repito esta noche— al mejor tirador que pueda traerse a que venga con una pistola calibre 45, y yo, con un modesto calibre 22, y veremos, a cincuenta metros, cuál mete más tiros en el blanco.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Valenzuela. — Si, señores diputados: es como yo lo afirmo. Pongo este ejemplo para demostrarles que en estos momentos no existe aquí un criterio uniforme con respecto a las armas de guerra, y no podemos dejar librado esto a los decretos del Poder Ejecutivo, que en definitiva habrían de reflejar opiniones de diversos organismos técnicos para la determinación de armas de guerra.

El propio criterio de armas de guerra ha variado según las circunstancias; y si esta escalada terrorista y de violencia continúa en el país, las hondas o las gomeras, como las llaman aquí en Buenos Aires y que usan los changos de mi pueblo, van a llegar a ser también armas de guerra, porque son armas peligrosas de acuerdo con este artículo que tiene tanta amplitud e incongruencia, por lo que resulta inadmisibles.

Hay otro artículo que definitivamente es superfluo. Me refiero a la substitución del artículo 213 bis del Código Penal, que en la redacción del despacho de la mayoría reprime con reclusión o prisión de tres a ocho años a quien organizar o tomarse parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Si tenemos el artículo 210, que trata de manera harto genérica y amplia acerca de la asociación ilícita —tan amplia que se necesitan tres o más personas para configurar el delito—; ¿qué necesidad tenemos de incorporar este nuevo artículo, que tiene tan clara connotación política?

Con respecto a las huelgas, yo me pregunto si son amenazas, porque entonces entrarían en la nueva redacción del artículo 149 ter, y en tal supuesto en este país ya no habrían más huelgas.

La tendencia moderna en materia penal es la de la atenuación de las penas. Es más; en algunos países socialistas, no recuerdo si en Checoslovaquia o Yugoslavia, el sistema carcelario se ha innovado totalmente, especialmente en la atenuación de la pena. Tanto es así que el nuestro resulta ser uno de los más severos del mundo; ya la pena máxima temporal de privación de libertad está en el promedio de los quince años. Elevar ahora la escala penal en la forma en que

lo ha planteado el Poder Ejecutivo no habrá de traer en absoluto —lo sostuvimos en la comisión, lo expresamos en el dictamen y ahora lo ratificamos— una disminución de los delitos, si esta agravación de las penas no se acompaña de otras circunstancias y de otros elementos que indudablemente no están en nuestro poder ni los conocemos.

Nosotros entendemos, y así lo recogen la doctrina y las estadísticas mundiales, que no existe una relación directa entre la agravación de la pena y la actividad delictiva. La prueba la hemos tenido cuando la dictadura militar sancionó la pena de muerte. Se cometieron, luego de su sanción, como antes, tantos o más hechos graves y gravísimos que tipificaron el delito.

Cuando recién hablaba de la fortaleza del Estado argentino para enfrentar el problema de la escalada delictiva, tanto política como común en que se encuentra sumergido en estos momentos el país, yo filosofaba un poco, pero es real. Es necesario que comprendamos que toda legislación para ser tal, esto es, para que tenga una vigencia efectiva y real, aparte de la sanción pertinente por el que legisla, necesita indudablemente el consenso unánime de la población, porque de lo contrario entraríamos en lo que se llama la desuetudo. En la legislación penal ocurre exactamente lo mismo. Nosotros podremos sancionar cualquier tipo de ley penal; pero si a niveles populares, a niveles de la inmensa mayoría del pueblo, la legislación por nosotros sancionada no tiene el consenso indispensable, indudablemente tal legislación no entrará en lo que se llama la inveterada consuetudo.

¿Por qué decía yo que el Estado argentino es en estos momentos un Estado inmensamente poderoso para enfrentar a la subversión y la escalada terrorista? Porque indudablemente 24 millones de habitantes detrás de un programa significan mucho; 24 millones de habitantes significan muchísimo para parar escaladas delictivas, haya o no haya legislación penal específica. Como dijera Mao, el delincuente político se mueve como pez en el agua cuando las condiciones son propicias; él es el pez, pero el agua es el pueblo, cuando las condiciones son propicias. Pero si en estos momentos, e interpretando los razonamientos de la bancada y el partido mayoritarios, las condiciones no son propicias porque existe un gobierno popular y la representatividad de ese gobierno, evidentemente el delincuente político no habrá de moverse como pez en el agua. ¿Y qué significa esto, señores diputados? Significa que ese delincuente político, si bien no desaparece de la noche a la mañana, porque ello es imposible, tal como le dijera con mucha autoridad el señor diputado Musacchio, en un tiempo prudencial lentamente irá siendo erradicado de la sociedad, que se siente fuerte y representada.

Es indudable que hay muchas connotaciones de índole política en este problema; es indudable que hay mucho para cortar aquí. Podríamos hablar de las injusticias sociales, del imperialismo

o de los monopolios; pero, para terminar esta exposición, voy a limitarme a recordar una frase de un eminente hombre, de un ciudadano del mundo, Juan XXIII: «Si buscas la paz, persigue la justicia». (¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.

Sr. Monsalve. — Señor presidente: voy a hablar como representante del bloque Demócrata Progresista y de la Alianza Popular Federalista, integrantes del Acuerdo de Acción Parlamentaria, circunstancia que informo a la Presidencia a los fines solicitados hace algunos minutos por el doctor Busacca.

Hace pocos meses la opinión pública fijó su atención en esta misma Cámara. Había una expectativa marcada y ella se justificaba por varias causas; entre otras, era la primera vez que el Parlamento argentino daría su palabra después de haber estado silenciado forzosamente por la dictadura durante un período de muchos años. Se esperaba la anunciada ley de amnistía, con la que se pretendía lograr el paso inicial para conseguir una pacificación que el país reclamaba y sin la cual la República no podría, de ninguna manera, emprender su camino de progreso.

Hoy, la expectativa pública vuelve a fijarse en la decisión que va a producir esta Honorable Cámara. En aquel momento, a la ley de amnistía que se esperaba ansiosamente se sumaba otro factor, el de la prometida derogación de la legislación represiva. En esta oportunidad la tensión se centra en la Honorable Cámara, porque se piensa que de aquí puede salir la reimplantación del aparato represivo y de las leyes que entonces se derogaron.

Esta reimplantación de la legislación y del aparato represivo se torna una realidad, si se tiene en cuenta que el texto de la modificación del Código Penal, que está en el proyecto en estudio, viene combinado con otro proyecto de ley que establece un cambio en la jurisdicción y competencia establecidas por la ley 48. Entre ambos proyectos de ley se establece pues la nueva legislación represiva, aquella que se derogó hace unos meses, y el instrumento necesario para aplicarla.

En aquel momento tuvimos el honor de derogar la disposición que creaba un tribunal especial; en esta ocasión, cuando se trate la modificación a la ley 48, estaremos sancionando un aparato represivo especial que sacará a los ciudadanos de sus jueces naturales y que los colocará bajo la jurisdicción de jueces que, por su carácter de federales, estarán más íntimamente ligados al pensamiento del Poder Ejecutivo nacional que lo que pueden estar los jueces de provincia.

Por lo tanto, quiero decir que son las dos cosas combinadas las que van a dar como resultado la reinstalación de un sistema que creíamos haber derogado para siempre en el país.

Esta Cámara, en aquella oportunidad, aprobó la derogación de las leyes represivas presionada por manifestaciones callejeras alentadas por quienes habían triunfado en las elecciones de marzo y de abril del año pasado; manifestaciones que integraban seguramente buena parte de las fuerzas que hoy están colocadas en la subversión; manifestaciones callejeras que se hubieran repetido hoy con un sentido contrario, de no haber sido prohibidas expresamente por el Poder Ejecutivo nacional.

Pero eso no le quita a la Cámara en este momento la condición de presionada. Está presionada, pero es una presión distinta, de otro tipo; es una presión que surge del Poder Ejecutivo, que esta vez no se ha limitado a sugerir o a pedir privadamente, recatadamente, a los señores legisladores que forman el bloque de la mayoría, que dieran un sentido determinado a su voto al tratarse este proyecto. El Poder Ejecutivo no se ha limitado a esa acción privada y recatada, sino que ha puesto en las pantallas de todos los televisores del país, y con ello tal vez haya podido ponerla en las pantallas de todos los televisores del mundo, algo que constituye una verdadera afrenta, una verdadera *capitis deminutio* para el Parlamento argentino...

Sr. Rojas. — La afrenta la está cometiendo usted.

Sr. Monsalve. — Un grupo de integrantes de este Parlamento que fueron, no sé si para bien o para mal, porque no estoy en el pensamiento ni en la mentalidad de cada uno de ellos, a una entrevista solicitada al presidente de la República, fueron tratados como subordinados del presidente de la Nación, y no como legisladores elegidos por el pueblo. Ese grupo entrevistó al presidente de la República y éste, en forma que ha quedado totalmente documentada, les dijo en síntesis: o votan así o se mandan a mudar del bloque. Este es un tipo de presión que antes no conocíamos y que se ha dado en esta oportunidad.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Monsalve. — Solicito a la Presidencia me haga respetar en el uso de la palabra.

Sr. Rojas. — Respete a los demás.

Sr. Monsalve. — Estoy respetando y hablo en lenguaje parlamentario.

Sr. Arrúe. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Monsalve. — No, señor diputado. Yo también solicité hoy una interrupción al señor diputado Porto y me fue negada. No puedo de ninguna manera admitir interrupciones, y solicito a la Presidencia me haga respetar en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (García). — El señor diputado que está en el uso de la palabra no desea ser interrumpido. Por lo tanto, la Presidencia solicita a los señores diputados no interrumpan al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monsalve.

Sra. Fadul de Sobrino. — Es todavía peor lo que está diciendo el señor diputado...

Sr. Monsalve. — La señora diputada podrá contestar oportunamente.

Esta ha sido, entonces, señor presidente, una coincidencia entre las dos circunstancias que ha tenido que afrontar esta Cámara desde su constitución hasta este momento. Pero hay una coincidencia más. Diríamos que es una coincidencia de persona, porque el mismo vocero del bloque mayoritario, que ha sido por supuesto el miembro informante de la comisión correspondiente, ha sido el informante en esta oportunidad también, y yo diría que con el mismo catálogo de citas, con los mismos latinazgos que en aquella oportunidad propició y propugnó la derogación de las leyes represivas, en esta ocasión propugna su reimplantación.

El mismo diputado que en esta sesión ha hablado de que era imprescindible la modificación urgente del Código Penal y de que no había por qué esperar al término de la labor de una comisión especial ya designada, en la reunión a la que antes me referí decía: «A primera vista se ve que la dictadura no ha tenido el mínimo de prudencia legislativa deseada por el país y reclamada por la jurisprudencia actual de su más alto tribunal. Se ha cambiado en gran parte la legislación de la República, e incluso su Código Penal, que debiera haber sido respetado en su totalidad o en su casi totalidad en resguardo y garantía de las libertades públicas, de la seguridad jurídica, de la voluntad de los ciudadanos y de la defensa social y no de las conveniencias de los detentadores del gobierno. Y lo que es peor es que esa legislación ha hecho mucho daño a la República, que se encuentra hoy al borde del caos, con sus principales riquezas entregadas al imperialismo, con hambre y desocupación en el pueblo, con una inflación monetaria que nos hace encabezar las estadísticas mundiales, con una pavorosa deuda externa, con gente injustamente perseguida o presa por sus ideas. Habrá que revisar muy bien todos esos decretos leyes, pensándose apriorísticamente que en su mayoría no han hecho bien al país ni responden a sus intereses ni a sus necesidades». Es, evidentemente, un cambio frontal de posición el que ha tenido dicho señor diputado, si la comparamos con la de hoy. Es un caso curioso de reacomodamiento sietemesino.

Uno de los argumentos invocados en mayo de 1973 para justificar la derogación de la legislación represiva era el de que a la violencia de arriba respondía la violencia de abajo, o sea que la que creaba realmente el conflicto era la violencia de arriba, que tenía como respuesta la violencia de abajo.

Cabe preguntarse por qué hoy, después de casi un año de gobierno popular, subsiste, aun agravada, la violencia, que todos repudiamos.

Porque hay que entender que nosotros tenemos la misma preocupación que tiene toda la Cámara y también todo el país. Nosotros tenemos una profunda preocupación, que llega incluso a desesperarnos, cuando vemos que nuestro país se ha transformado en una nación en la que los hombres no pueden tener, cuando salen de su casa para ir a trabajar y ganarse la vida, la seguridad de que volverán a ella enteros, para reunirse con sus familias. No sabemos en qué momento cualquiera de los hombres que han conseguido con su trabajo, y su esfuerzo labrarse una posición económica, si es que no ha explotado inicua y cruelmente a nadie, puede estar seguro de que volverá a su casa sin la novedad de alguna desgracia o de alguna de esas situaciones que no pueden repararse de ninguna manera una vez que se han producido.

Somos los primeros en repudiar ese clima de violencia. Creemos que la violencia no puede construir jamás. No hace otra cosa que destruir. Entendemos, pues, que quienes la practican están en un tremendo error, en el tremendo error de creer que por esa vía lograrán la concreción de algunos de los ideales que pueden tener, así sean éstos los más loables que se puedan concebir.

Repito, entonces: ¿por qué después de casi un año de gobierno popular continúa esto? Y tomando el argumento que se hacía allá en mayo del año pasado, me pregunto si no será que sigue existiendo violencia ejercida desde arriba. Porque la violencia no es solamente persecución, presión o crimen, tal como lo dijo, casi con las mismas palabras, el señor diputado Musacchio.

También es violencia haber agitado algunas banderas desde el llano y no sostenerlas con vigor desde el gobierno. Es violencia hablar de liquidar la dependencia, de eliminar las empresas multinacionales que nos esquilman y comprobar que el señor presidente de la República recibe y acepta la colaboración de empresas como las que voy a mencionar: Borgward Argentina, Bardhal, Bunge y Born, John Deere, Duperial, Pérez Companc y otras más, que prometen al gobierno argentino su colaboración y firman con él un contrato por tres años. Pareciera que estas empresas ya no son multinacionales. Pareciera que Bunge y Born ha pasado por las aguas del Jordán, se ha lavado y hoy es un inocente comerciante argentino.

Esas empresas han firmado contratos y en ellos se deja establecido que por el término de tres años los empresarios colaborarán nada menos que en la conducción de las empresas del Estado. Como retribución reciben un honorario simbólico de un peso ley por año.

También es violencia la sanción de una ley de asociaciones profesionales que sólo conforma a la cúpula de la CGT y al Poder Ejecutivo, ya que las bases la rechazan.

Sr. Porto. — Solicito, señor presidente, que el señor diputado se concrete al tema en debate.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (García). — La Presidencia solicita a los señores diputados se sirvan no interrumpir al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monsalve.

Sr. Monsalve. — También es violencia, señor presidente, la sanción forzada de una ley de prescindibilidad que, como lo previmos en su oportunidad, ya comenzó a dar sus frutos amargos. Cito como ejemplo a los 55 cambistas de Ferrocarriles Argentinos que han quedado en la calle porque participaron en un movimiento huelguístico.

Sr. Márquez. — Está mal informado el señor diputado.

Sr. Monsalve. — No estoy mal informado si la prensa no está mal informada. En ninguna parte he visto la rectificación de las publicaciones que se han hecho en todos los diarios del país. Si no se ha producido la rectificación debo creer que lo que digo es así.

Sr. Porto. — El señor diputado está fuera del tema en debate, señor presidente. Voy a hacer una moción...

Sr. Presidente (García). — Señor diputado Monsalve: el señor diputado Porto sostiene que está fuera de la cuestión.

La Presidencia respetuosamente le solicita que se cña al tema en discusión.

Sr. Monsalve. — Señor presidente: con argumentos, que lógicamente no agradan a la mayoría, estoy diciendo por qué pienso que todavía puede continuar la violencia desde abajo. Si esto no es cierto, en buena hora.

También es violencia —y esto viene al caso ahora— la actitud intransigente de la mayoría que, cuando cualquier sector minoritario pretende con la mejor buena voluntad emitir sus ideas para mejorar los proyectos en examen, no tiene otro recurso que el latiguillo de decir: no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos. Eso también crea un clima que no es el de la cordialidad que corresponde.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Monsalve. — Entiendo que hay que terminar con esto y con todo tipo de violencia desde arriba. Entiéndase bien, y vuelvo a repetirlo. De ninguna manera consideramos que cualquiera de los actos o de los hechos mencionados por mí sean de entidad necesaria o suficiente como para que reciban la violencia a manera de respuesta.

Nosotros condenamos la violencia. De ninguna manera podemos justificar los actos de violencia. No los hemos justificado nunca, ni antes del 25 de mayo ni con posterioridad. Entendemos

que el dolor de la madre, del padre, del hijo o de la esposa es exactamente el mismo. No puede demarcarse con una fecha, ni tampoco depende del gobierno que en un momento determinado está rigiendo los destinos del país.

El magnífico análisis que hicieron los señores diputados Day y —especialmente en este tema— Musacchio me releva del propósito de demostrar que no es cierto que falte una ley que permita al gobierno refrenar los excesos, los crímenes y secuestros. El Código Penal, tal como está concebido, es un instrumento decididamente idóneo.

En apoyo de esta afirmación, voy a recordar un episodio que es oportuno mencionarlo hoy, en que la bancada mayoritaria se negó a solicitar la presencia en el recinto de los señores ministros que firmaron el proyecto de ley. En una oportunidad, el señor ministro del Interior se hizo presente en la Cámara para conversar con los presidentes de bloque y algunos diputados, entre los cuales me conté. Se evitó así el pedido de una interpelación y se consideró que por esa vía podían recabarse informes sin dar pábulo a la opinión de mucha gente que podía pensar que habría un comienzo de escándalo parlamentario.

El señor ministro del Interior concurrió acompañado con un comandante que desempeñaba entonces —no sé si en la actualidad seguirá haciéndolo— las funciones de coordinación de las fuerzas de seguridad. El grupo de diputados que estaba presente en ese momento expresó al señor ministro su preocupación por la cantidad de secuestros, asaltos y crímenes que estaban produciéndose y que tenían al pueblo argentino sobre ascuas. El señor ministro del Interior manifestó que comprendía muy bien nuestro estado de ánimo y que lo compartía.

Cuando le preguntamos si de alguna manera podía evitarse que esa situación continuara, nos respondió: «La situación está bajo control. Nosotros tenemos todos los hilos perfectamente tendidos y solamente necesitamos la colaboración del pueblo». Le preguntamos: «¿Pero y los secuestros, señor ministro?». Y entonces nos dijo estas palabras: «Desde el 19 de junio al 30 de agosto (del año pasado) se han producido trece secuestros; de los trece, once han sido debidamente aclarados y nos quedan dos que estamos en vías de aclarar». Le respondimos: «Pero señor ministro, si los diarios dan un promedio de uno o dos secuestros diarios, ¿cómo es posible que desde el 19 de junio al 30 de agosto hayan sido solamente trece?». Y nos dijo el señor ministro: «Es que nosotros nos referimos solamente a los secuestros que son denunciados, porque hay mucha gente que no denuncia los secuestros. Y entonces claro está, si no los denuncian nos impiden a nosotros actuar, y es por eso que no los podemos computar».

No se si se seguirá en la misma tesitura en este país y la gente continuará sin denunciar los infortunios que tiene, pero lo que sí sé es

que hay una cantidad de gente que fue secuestrada y que solamente volvió a estar en circulación cuando juntó los muchos millones de pesos y los pagó. Entonces no fueron las fuerzas de seguridad las que hicieron el milagro, sino que la solución llegó por el simple hecho de haberse arribado a un acuerdo entre los secuestradores y los secuestrados o quienes velaban por ellos.

Esa manifestación de un ministro de la Nación que nos dice que tenemos todo lo necesario y que estamos absolutamente en condiciones de controlar la subversión se compadece muy poco con estas manifestaciones de ahora, en el sentido de que el Estado parecería estar inerte para defenderse de las agresiones de la subversión. Nosotros ponemos esto de resalto porque queremos contribuir a que esto termine de una buena vez sin necesidad de dar un instrumento legal que indudablemente puede ser pernicioso.

Por otro lado, lo que el señor diputado Musacchio afirmó como por deducción, en el sentido de que el señor presidente de la República ya conocía a los integrantes o a algunos de los que forman parte de los sectores que llevan a cabo los actos de violencia, es real y concreto y no es necesario deducirlo, porque lo afirmó el propio presidente de la República con todas las letras hace dos o tres días y todavía no ha sido desmentido: «Está totalmente equivocado (le contesta a un señor diputado); yo a eso lo he conocido "naranja" cuando se gestó ese movimiento que no es argentino. Ese movimiento se dirige desde Francia, precisamente desde París, y la persona que lo gobierna se llama Posadas de seudónimo, el nombre verdadero es italiano. Lo he conocido "naranja", como dice el cuento del cura. Sé qué persiguen y qué buscan, de manera que en ese sentido a mí no me van a engañar porque, como les digo, los conozco profundamente; he hablado con muchísimos de ellos en la época en que nosotros también estábamos en la delincuencia, diremos así. Pero jamás he pensado que esa gente podría estar aliada con nosotros por los fines que persiguen».

Lo esencial es que el señor presidente de la República, y yo no puedo dudar de lo que él dice, manifestó que él ha conversado con ellos y que conocía a una cantidad de los integrantes de estos grupos subversivos que nos están creando también problemas en nuestro país. Si los conoce y si hay un Código Penal, como se ha dicho aquí repetidamente, que tiene sanción para cada uno de los delitos que se están cometiendo, yo no veo por qué se puede afirmar que el Estado está inerte y que está absolutamente falto de medios para poder controlar esta violencia que no queremos nosotros, que no quieren ustedes y que no quiere nadie en el país.

No es función de la pena —que no es sino una amenaza de la sociedad contra el presunto delincuente— evitar el delito. Ya se sabe que la pena

de muerte lo único que evita es la reincidencia del reo que la sufre.

Pero sería ingenuo pensar que en esa forma se va a disuadir de continuar en ella a quien está en la subversión. También lo dijo el señor presidente, aunque sin proponérselo, cuando afirmó que nuestra guerrilla es la misma que padecen muchos países, entre los que mencionó a España. Muchos señores diputados habrán leído hace aproximadamente una semana una noticia fechada en España por la que se da cuenta que un ciudadano español fue condenado a muerte doble. Si con esa legislación en España no consiguen controlar la guerrilla —que según opinión del señor presidente es la misma que padecemos nosotros—, no veo de qué manera con esta reforma se va a conseguir el fin buscado.

Entiendo que lo que aquí sucede tiene connotaciones que lo vinculan con la fábula del aprendiz de brujo. Alguien contribuyó a crear este fantasma argentino de hoy, considerando que podría hacer con él lo que fuera necesario. Pero al igual que en la fábula, se le escapó de las manos, y hoy se están pagando las consecuencias de alentar y crear ese fantasma. Mientras no se lo elimine por alguna de las vías que entendemos son las oportunas, consideramos que no habrá legislación capaz de erradicar ese mal.

Por lo expuesto, resulta obvio el sentido de nuestro voto, pero quiero terminar haciendo un llamado a los señores diputados de la mayoría. No soy tan ingenuo como para creer que pueda tener un resultado positivo, pero de todas maneras estimo necesario hacerlo, con la mejor buena fe y el mayor respeto.

Adviertan los señores diputados que existe la posibilidad de que la sanción de estas reformas produzca efectos contrarios a los que seguramente persiguen quienes la apoyan. No deben descartar la posibilidad de que así suceda, pues quienes están en la subversión pueden reaccionar produciendo nuevas escaladas terroristas porque ya están jugados. Esa es una posibilidad, pero admitamos que no se dé.

También puede darse otra posibilidad. Sancionado este instrumento legal y colocado en las manos de aquellos en quienes ustedes confían con un fervor envidiable, a lo mejor podrían manejarlo para satisfacción del pueblo argentino. Pero en otras manos, o en las mismas si se desviaran de esos fines, podría darse el caso de que esta ley significara haber sancionado la persecución política e ideológica, y la repetición de todos los males que hemos padecido durante tantos años bajo la dictadura militar. Ello podría ocurrir, pues, si este gobierno llegara a cárce de verdadera sensibilidad popular.

Ruégoles tener la deferencia de atender este reclamo de alguien que está en la misma situación que los señores diputados de la mayoría, con las mismas garantías o con la misma falta de garantías que puede llegar a existir en un

momento determinado, y pensar en las posibilidades que he mencionado.

Así, en todo caso, cuando asuman la responsabilidad del voto, sabrán positivamente que lo han hecho sin descartar ninguna de las perspectivas contrarias a su voluntad que pudieran darse. (Aplausos.)

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: cumplimiento la fórmula requerida, señalando que intervengo en este debate en representación del Partido Conservador de Buenos Aires, el mismo partido político que rindió caro tributo al país y le brindó la personalidad señera de Rodolfo Moreno, autor del Código Penal de 1921. Más que por disciplina, por legítimo orgullo, invoco el nombre de este jurista de equilibrio, madurez y armonía espiritual, que tuvo autoridad científica y moral para proponer normas regulatorias de la conducta de sus conciudadanos.

Analizaré, de este problema, solamente el aspecto político, quedando confiada a mi colega doctor Carlos Acevedo la faz técnica de la cuestión.

Digo que no ha sido fácil para mi partido decidir respecto de este asunto cuya resonancia pública deviene de su singular significación. El pueblo argentino tiene alta sensibilidad y ha advertido la importancia que asume en estos momentos la proyectada reforma al Código Penal, por lo que espera expectante este debate.

El Partido Conservador siempre fue enemigo de la violencia, por una razón esencial: porque el conservadorismo es una jerarquía que pretende la privanza de los valores espirituales y se resiente cuando la torpeza o los instintos pretenden escalar gregariamente los niveles de la consagración individual.

¿Qué es la violencia? ¿Quiénes la utilizan? ¿Por qué llegan a ella? De la caverna a aquí, es un recurso socialmente desplazado para imponerse, superar a los demás o hacer prevalecer la voluntad del agente. ¿No está diciendo del fracaso o frustración moral, de la claudicación en la conducta, de inclinaciones bárbaras, de la brutalidad del instinto en un trasfondo de resentimiento torpe y cruel?

Los conservadores, que son todo lo contrario, que repudian la violencia como expresión de conducta y como medio apto para cualquier objetivo superior, hubieran deseado sumarse con su opinión y poder decisivo a este proyecto de reforma que pretende agravar la represión, de haberlo considerado idóneo para obtener siquiera soluciones parciales. Pero estamos convencidos de que la amenaza de una pena mayor no habrá de amedrentar ni detener a los exaltados, en tanto una consecuencia no querida de la futura ley podría pasar a constituirse en un riesgo cierto para las garantías ofrecidas a la libertad del pueblo todo.

La norma penal es una promesa o una amenaza de pena. Les dice a todos los ciudadanos por igual: si usted adopta este tipo de conducta, contraviene este principio que preservo, tendrá la siguiente sanción o condena a nombre del Estado.

Pero es innegable que si bien la norma es genérica y potencialmente amenazante para todos, no pasa a funcionar o a efectivizarse sino en los casos de excepción que en la sociedad constituye la producción delictiva.

Por la mayoría de los artículos del Código Penal que se pretenden modificar —el 80, del homicidio; el 141 y 142, de la privación ilegítima de la libertad; el 168 y 169, de la extorsión y extorsión calificada; el 170, del secuestro extorsivo; el 209, de la instigación; el 210, de la asociación ilícita; el 211, de la intimidación pública; el 226, de la rebelión, y las nuevas figuras que se crean con el 142, de la interferencia a la libertad individual; el 149 bis, de las amenazas y amenazas calificadas; el 189 bis, del terrorismo; el 212, de la incitación a la violencia; el 213 bis, de la asociación para la violencia política; el 292, de la falsificación de documentos especiales, y el 293, de la falsificación de documentos calificada— se enfoca en sus distintos aspectos el problema de la violencia.

Por más que el problema es real y agresivo, amenazando incrementarse, no vemos que pueda ser conjurado en inmediación temporal con el recurso de mayores sanciones o aviso de mayores sanciones, cuando, como lo destacara con acierto el señor diputado Day, ni siquiera se va a dar el tiempo suficiente para una debida información y se pretende que la nueva ley agravada comience a regir de inmediato.

Se quiere limitar la violencia, esta violencia que el señor diputado Monsalve sigue caracterizando como una contestación necesaria en el campo social y que el señor diputado Musacchio analizó como un fenómeno normal en ámbitos donde se produce la desigualdad y la injusticia, y se entiende que la mejor fórmula es dejar avisado a los posibles agentes de la mayor cuantía de la pena a aplicar. Y se nos ocurre que circunstancias especiales han provocado la reacción y señalado el camino por donde la reacción aparece a guisa de fenómeno emocional.

Nosotros habíamos analizado este proyecto antes de los últimos acontecimientos y antes del hecho de Azul, aun cuando ni unos ni otros habrían provocado un cambio de posición.

La ley, toda ley, tiene dimensión y proyección tales que no pueden ser alcanzadas, influidas ni perturbadas por hechos singulares. El ánimo humano puede conmoverse, pero el legislador no puede ni debe hacerlo. Si es posible, el legislador debe reprimir sus emociones, clarificar su mente y expedirse con la serenidad del que no es protagonista de los hechos o no puede llegar a ser abordado por ellos.

Una reacción a modo de respuesta para perseguir la violencia en estas situaciones especiales llevaría al Estado a un tipo de claudicación moral. Alguna vez dije, y lo traigo ahora a cuento, que cuando un deportista, luego de recibir un golpe, alcanza a frenar sus impulsos y anula por inhibición mental la contestación del enojo, está exhibiendo la herencia de miles de años de civilización, la herencia de miles de años de cultura. Un proceso de formación moral, que se le fue entrañando en el tiempo y que lo lleva a elevarse superando el instinto de riña. Y el ejemplo viene a cuento porque aconseja detener el impulso, eludir el apasionamiento, para que la ley que consideramos no venga a ser, en modo alguno, una reacción histérica, el resultado de una excitación, nacida de una circunstancia emergencial que por más que pudiera repetirse no alcanzaría a asumir la generalización indispensable para que la ley la aprehenda.

De manera que encontramos desubicado el mensaje del Poder Ejecutivo, cuyo proyecto ya tiene sanción senatorial, en cuanto a que se propone con carácter de urgente y en razón de lo últimamente sucedido en el país. Se soslaya el carácter genérico y permanente de la ley que, por lo demás, debe ser facturada con serenidad y extraña a los *raptus* emocionales.

Pero a la analizada ineficacia del remedio debemos sumar otro análisis del que habrá de destacarse la ineficacia de la ley. Nosotros entendemos que por este proyecto que pretende amedrentar a la delincuencia mediante la agravación de las penas a aplicar, en tanto no se logrará una disminución de la actividad criminal, se pasarán a amenazar derechos que estamos en el deber de resguardar.

La decisión debe nacer tras el análisis de dos valores en conflicto. El uno, la seguridad, la paz social, la preservación del orden y las garantías para la vida humana, que como hemos dicho, no resultaría respaldado por la reforma; y el otro, las garantías dadas a la libertad por nuestro ordenamiento jurídico democrático.

Llamo seriamente a la reflexión sobre este punto, que evaluado debidamente produjo la decisión de mi partido que ahora expreso. Todos estamos de acuerdo con la máxima severidad de las penas, pero para los culpables, lo que obliga a hallarlos, a aprehenderlos y a evitar todo error en dichos trámites. Pero lo grave del problema es el trasfondo amenazante de esta nueva legislación para todos los que siendo inocentes puedan ser sospechados o para aquellos frente a los cuales el juez pueda apelar al injusto arbitrio de una intencionada imputación para mantenerlos en cárcel.

Aquí se pretende dar una excepcional latitud de poder al órgano jurisdiccional, con normas penales ambiguas y fácilmente utilizables, por lo que me quejo. En el artículo 170 del Código Penal, con la reforma propiciada, se podrá im-

poner reclusión o prisión de cinco a quince años al que «sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate». Valga el ejemplo, por el que la palabra «retuviere» viene a crear-nos razonable alarma. La misma equivocidad terminológica se da en las expresiones «uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas» o «uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad».

Y todo queda agravado cuando verificamos que por efecto del aumento de la pena, estas leyes pasan automáticamente a negar el derecho de excarcelación. Bastará que una persona sea sospechada o imputada en grado liminar del proceso, bastará que un hombre sea visto en actitud posiblemente adecuada a la conducta señalada en la ley, para que ingrese a la cárcel sin la posibilidad de ser excarcelado hasta la finalización del proceso. Bastará, en el peor de los casos, la intención aviesa o mala fe en una imputación, para desencadenar tales riesgos.

De manera tal que si aceptamos que de resultas de los procesos incoados se condena aproximadamente a un 25 por ciento, llevaríamos a presidio a un 75 por ciento de inocentes, a los cuales se les habría dado el gravamen moral, el maltrato de la privación de su libertad hasta el día de la sentencia, como un tremendo precio para que el Estado cobre sus cuentas con los verdaderos responsables del delito. Y lo que es peor, se dejaría en la ley, por su redacción y por su alcance, un arma de tremendo poder destructivo de la libertad política, al alcance de un magistrado que resolviera hacerla servir a propósitos no contemplados a la hora de su sanción.

Nosotros sabemos que hay que resguardar la paz y la seguridad, pero no estamos ciertos de que con una mayor amenaza lograremos tal objetivo. Pero si estamos ciertos del mayor riesgo que esta ley nos haría correr, en manos de un juez malintencionado, obsecuente o espectacular, para demostrar su sentido de la lealtad al poder político.

Si son principios consagrados que no puede haber delito sin ley previa que lo sancione y que ésta debe ser siempre analizada con criterio restrictivo, es porque se acepta e impone el mayor aporte debido a la garantía de la libertad individual.

¿Acaso una ley como ésta no podría convertirse en el más alto instrumento de persecución? ¿No podría, por determinados efectos, enmudecer a todo el pueblo? Lejos de estar coaccionados los seres de instinto criminal, ¿no pasarían a temerle los periodistas, los estudiantes, los que andan por la calle y quieren hablar con libertad, los políticos, los que quieren pensar? ¿No podría llegar a ser, sin querer o queriéndolo, un techo opresivo para 24 millones de argentinos a quienes en definitiva estábamos en el deber de defender y preservar?

Si la eficacia de la futura ley no está asegurada, por las razonables dudas que se han planteado, se pasará en cambio a ensombrecer la libertad pública con la latencia de un peligro que no es fruto de imaginación.

Si se ha dicho que todo inocente bajo proceso tendrá cárcel segura hasta la hora de la sentencia y si además se dice que se dan posibilidades de hacer servir la equivocidad de la ley a fines que no son los específicos de la represión, el panorama queda claro. Nosotros no queremos ni pensar en la posibilidad de que un ciudadano tenga o pueda tener cárcel por haberse atrevido a exponer sus ideas diferentes a la de los que detentan el poder. Y no va esto solamente para la Argentina. No queremos que en ningún país del mundo se pueda dar apertura al autoritarismo ciego o frenético, capacitado nada menos que por vía de la ley.

Este es el enfoque en el que nos detenemos para señalar el reverso de la ley proyectada, exhumando el peligro que entraña. De ahí que nuestro partido, no obstante estar preocupado como el que más por la anarquía existente en el país, se negará a dar su voto de apoyo a una ley de contradictorios efectos.

En cambio, ¿qué estamos tratando? Una sociedad pacífica, organizada en república, con señalada vocación cristiana que le viene desde sus raíces y que quiere vivir en paz, analiza su situación frente a un grupo minúsculo que disiente con la armonía y que no quiere integrarse a las comunes vocaciones pacifistas y progresistas. Nos estamos conturbando por 500 inadaptados, que no significan ni pueden significar nada en la Argentina, Argentina de hogares bien plantados, buenos con bondad de Dios, y queremos asumir frente a ellos una fiereza que no nos queda bien y a nada habrá de conducirnos.

En verdad, tenemos un problema, pero debemos acertar con las medidas correctoras en lugar de incurrir en el error de llegar tarde y solamente poder levantar a los muertos, secar la sangre derramada y dar con el látigo en el lomo de los culpables. La tarea del Estado debe ser otra: que no se vuelva a alzar la mano de Cain, que ninguno, asociado a nuestra organización, pueda impedir la vida de uno de sus semejantes.

El Estado tiene que llegar antes y por otras vías, y como la cultura no tiene fácil accesión, o por lo menos no la tendrá inmediata, nosotros dimos en el mes de julio de 1973 la solución, dimos el remedio apropiado en un proyecto de ley que firmé y adquirió estado parlamentario. En alguna medida lo acepta, pero lo mira de reojo esta proyectada reforma, y como todo lo que mira de reojo mira mal, no lo alcanza en sus amplias posibilidades. Propusimos en el mes de julio que se suprimieran todas las armas en el territorio de la República, porque advertíamos la necesidad de despoten-

ciar a la agresión, como medida preventiva e idónea para procurar lo que ahora por mal método queremos.

¿Por qué estamos permitiendo que tengan fácil acceso a las armas nuestros jóvenes y nuestros niños? ¿Qué intereses oscuros e impíos están gravitando en la Argentina como para impedir el curso de un proyecto tendiente a suprimir totalmente las armas de fuego? ¿Por qué el señor presidente de la República, en su más reciente discurso, ha pretendido proteger a los tenedores de armas? ¿Quiénes son los tenedores de armas? ¿Para qué quiere un arma toda persona que vive en nuestro país, protegido por una legislación liberal, insertado en una sociedad de vocación cristiana y pacífica? Enseñemos eso al pueblo, tiremos abajo las vidrieras de las armerías, cerremos las fábricas y los comercios de armas, entendiendo que todos los intereses económicos que les rondan no alcanzan a tener el valor de una sola vida humana.

Nosotros afirmábamos y afirmamos que con un operativo policial sostenido podríamos ir secuestrando las armas existentes, que iríamos fundiendo para hacer herramientas de trabajo de un pueblo laborioso.

De esta manera llegaríamos a tiempo. Antes de la tragedia, de la penosa secuela que dejan las acciones violentas, antes de la muerte del dolor y del luto.

Por ello decimos al gobierno y a los representantes del partido mayoritario, a quienes vemos con levantada inspiración pero sin acertar en la medida conducente: dejemos de buscar histéricamente una mayor represión cuando quienes transitar la violencia están poderosamente armados y resultan de difícil aprehensión. ¿De qué valdrá gravar las penas si no se logra detener a los responsables? Cambiemos estas leyes represivas por aquella preventiva y correctora, hacia el objetivo de que no quede una sola arma en manos de civiles. Que solamente las tengan en su poder las fuerzas armadas y de seguridad y que su función principal sea velarlas por si un día nos pisan nuestras fronteras. Desterremos las armas de fuego y que el más severo castigo sea para quien la tenga en su poder, o facilite su obtención, posesión, portación o tenencia.

El conservadorismo, una vez más, los invita a acertar. Sancionemos la ley que prohíba fabricar, transportar, importar, vender, exhibir, reproducir, tener, portar o usar un arma de fuego de cualquier tipo y ordenemos a nuestra sociedad hacia otro clima de convivencia laboriosa y en paz.

Queda hecho el desafío. (Aplausos.)

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Moyano.

Sr. Moyano. — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra en este debate en representación de mi bloque. Por el convenio concretado en el Acuerdo de Acción Parlamentaria conformado por los bloques de partidos provinciales,

otros dos oradores expondrán, analizando en profundidad, los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto que estamos comentando.

En homenaje al tiempo de los señores diputados, haré una breve exposición para dejar en claro las motivaciones que llevan a nuestro bloque a emitir su voto en contra de este proyecto de ley.

Entramos a este debate bajo el influjo de grandes emociones, como las que ha vivido el país entero, conmocionado luego de conocer los lamentables y luctuosos hechos ocurridos el domingo pasado en Azul. Estos hechos evidencian que la normalidad constitucional, que la institucionalización, que la vida democrática en el país y que el ejercicio de la República para nada cuentan en esos grupos que actúan clandestinamente al margen de la ley y que todos en forma unánime condenamos.

Esos grupos vienen produciendo depredaciones y procuran el caos en el país desde hace ya bastante tiempo. Tal vez las mismas manos asesinas que segaron vidas inocentes en Azul, son también las que han matado a otros hombres argentinos desde el asesinato del general Aramburu hasta la actualidad; hombres y mujeres argentinos que quieren el bienestar de la patria aunque difieran en los procedimientos para lograrlo.

Suman centenares las víctimas argentinas que por el solo hecho de vestir un uniforme que simboliza la seguridad jurídica del Estado cayeron en manos de estos atroces criminales. Suman centenares los casos de inseguridad personal en nuestro país, y la civilidad toda ya no sabe qué va a hacer con su vida. Los secuestrados están a la orden del día. Los políticos actuamos bajo la presión de amenazas y vuelven a reaparecer los custodios personales, porque la vida de las personas está desamparada.

Bajo el influjo de ese clima consideramos este proyecto de ley, que si tuviera la fuerza de convicción que es razón suficiente para conjurar estos males, tenga la seguridad la Honorable Cámara de que, al igual que en otras ocasiones y como lo haremos en el futuro, votaríamos favorablemente esta iniciativa.

Lo que ocurre, y reclamo que se crea legítima nuestra posición, es que creemos que este proyecto de ley no es conducente a esos fines, porque estamos convencidos de que esta Honorable Cámara hizo bien cuando el 26 de mayo deroga la llamada legislación represiva del país, porque volvimos a dar un acto de fe en las libertades públicas y porque creíamos en el hombre y en la mujer argentinos.

No creo que el Estado argentino esté actualmente desarmado frente a la guerrilla y a los agentes del caos. No lo está por todo lo que se ha dicho aquí con respecto a la legislación vigente. Fundamentalmente, no está desarmado porque, según nos lo ha dicho el propio presidente de la Nación, desde algunos gobiernos

provinciales se ha facilitado la acción de estos agentes del caos o se los ha tolerado con complicidad. Tenemos así el caso triste de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador ha elevado su renuncia a consideración de la Asamble Legislativa.

Creo que esto nos está diciendo cuál es la otra cara de la moneda. No se han tomado las medidas acordes para esclarecer los hechos delictuosos, los casos de «policía», como los señaló alguna vez el presidente de la República. Es indispensable que creamos que en otros niveles del Estado, que no es la esfera del Poder Ejecutivo nacional, no se presta colaboración y que si se la hubiese prestado y se hubiese cumplido con la ley no habríamos llegado a los episodios lamentables de Azul, porque no creo que se haya buscado al señor gobernador de Buenos Aires como al fusible que se quema o se cambia en una crisis política.

Creo positivamente que es mucho lo que hay que hacer en lo que respecta a la persecución de los delincuentes. Esto es algo que preocupa a los argentinos. Nos importan mucho y nos duelen los centenares de muertos y los miles de víctimas del terrorismo. Y nos duele más aún la impunidad de que gozan estos agentes del terror. Decenas de hombres invaden un regimiento y, de acuerdo con las informaciones periodísticas que tenemos, casi todos ellos escapan y se llevan un rehén, que es un teniente coronel de la Nación.

Nuestro pueblo necesita dotarse de fuerzas policiales eficientes e idóneas para encontrar los responsables y colocarlos en manos de la justicia, a fin de que se les aplique la legislación vigente.

Nuestra colaboración como legisladores consiste en dar apoyo a las medidas conducentes al remedio de estos males. Es indispensable la dotación suficiente del personal policial que necesita el país, tanto en la policía federal como en las policías provinciales. A ese personal policial hay que institucionalizarlo, para que no solamente tenga vocación de servicio para ganar un sueldo sino que, como dijo muy bien el señor diputado Day, tenga la convicción de estar cumpliendo un servicio con la patria. Además de darle un sueldo digno debemos proporcionarle el instrumental y material moderno y adecuado para el esclarecimiento del delito en esta tarea tan riesgosa y peligrosa que realizan. Y sin duda, estas medidas por vía presupuestaria o por la vía de la legislación especial, las tendrá el Poder Ejecutivo si las reclama, y sobre todo si explica acabadamente a este Congreso cuáles son los fundamentos y las necesidades que deben satisfacerse.

Nosotros no creemos de ninguna manera, como se ha dicho aquí y lo repito, en la intimidación que pueda provocar el aumento de las penas con que se sancionan algunos delitos. No quiero insistir en estas argumentaciones, pero evidentemente aquéllos a quienes va dirigido el

aumento de las sanciones no se intimidan con el código vigente ni se van a intimidar con las reformas porque —evidentemente— actúan con un desprecio por su propia vida que es sorprendente, y en esto está la gran causa de su criminalidad. Mal vamos a lograr entonces el objetivo de terminar con el terrorismo mediante esta legislación.

Esta ley deberán aplicarla los jueces y nosotros creemos que quien debe actuar es la policía como institución sobre la cual pesa la responsabilidad de resguardar la seguridad pública; y me refiero a la policía en su función de policía judicial. Es ahí donde debemos pegar fuerte; es allí donde debemos tener confianza; es allí donde el hombre que viste el uniforme o que actúa de civil en función policial debe sentir el respaldo de la ciudadanía, debe saberse también respaldado por nosotros, los legisladores, que representamos al pueblo, y debe saberse respaldado sobre todo por la autoridad administrativa de quien depende, que es en última instancia el presidente de la República y el ministro del Interior, en el caso de la Policía Federal, y los señores gobernadores y ministros de gobierno en el caso de las policías provinciales.

Los que hemos vivido de cerca la institución policial sabemos que ésta es la única manera de actuar en defensa del Estado y la seguridad en general, valores éstos que tal vez los argentinos no hayamos aprendido a temer por su ausencia, pero que ahora los sentimos como una necesidad imperiosa. El pueblo está temiendo nada menos que por su propia vida, su seguridad física. Resguardar este bien jurídico es un deber primordial que tiene el Estado, y yo creo que, además del Código Penal, en la propia Constitución Nacional está la esencia de esta función primaria del Estado, que consiste en consolidar la paz interior y en asegurar para todos los habitantes su derecho a la tranquilidad.

Por último, señor presidente, aun hubiéramos admitido que esta ola de terrorismo, que no para sino que va en aumento, hubiese inspirado al Poder Ejecutivo para proponer a este Congreso incluso la ley máxima de suspensión de las garantías constitucionales; hubiéramos admitido conversar sobre esta posibilidad, desde luego con la debida información por parte de los señores ministros del Poder Ejecutivo en comisión y en el recinto como corresponde a un régimen republicano de gobierno. Esa medida existe desde 1853.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Raúl Alberto Lastiri.

Sr. Moyano. — Me parece mucho más grave y peligroso el proyecto que está en consideración, porque no sabemos en definitiva quién puede llegar a aplicar estas instituciones el día de mañana.

Declaro que tengo confianza en las actuales autoridades por la forma como se están manifestando hacia el país y se están brindando a la democracia. Pero esto debe servir de reflexión. ¿No podrán ser usadas estas instituciones el día de mañana, en manos de otros hombres, para instrumentar la persecución contra quienes nos sentimos en las bancas de legisladores en esta época de democracia, aun bajo gobiernos de jure que sobrevengan?

Estos interrogantes que dejo planteados son parte de las argumentaciones que en forma más extensa deseaba realizar con motivo de la consideración de este proyecto de ley. Pero la larga lista de oradores me impone el deber de respetar el tiempo de esta Honorable Cámara. No obstante, desearé terminar mi exposición reclamando una vez más, para nosotros, para todos los partidos políticos argentinos, la paz que anhela nuestra patria. Nunca hemos respaldado ni respaldaremos la violencia en ninguna de sus formas, aunque no entraré ahora a filosofar sobre ese tema. Solamente quiero circunscribir este concepto al sentimiento argentino: queremos la paz. Sólo con ella se podrá concebir el trabajo fecundo e intenso con el que habremos de sacar este país de la postración y demostrar al mundo que con nuestro esfuerzo supimos desterrar tanto al terrorismo como a la miseria y al subdesarrollo, que constituyen un grave flagelo del cual no debemos ser esclavos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Señor presidente: es evidente que el tratamiento de estas reformas al Código Penal ha comenzado a preocupar al país con el transcurso de los días. Si realmente hubiese un margen de posibilidad para que en esta Cámara de Diputados se vertebrara una mayoría más allá de los partidos, como es lógico en las democracias, a pesar de su brevedad sería éste uno de los debates más relevantes que se han dado en este recinto.

Los discursos pronunciados por los representantes de las distintas bancadas han ido brindando argumentos difíciles de demoler o de criticar. Todos reconocemos la versación jurídica del señor miembro informante de este despacho; sin embargo, las realidades que han puntualizado los otros oradores —quizás con menos citas pero con más observaciones concretas— demuestran que estas reformas al Código Penal han ubicado a esta Honorable Cámara en lo que denominaría zona de peligro en la toma de decisiones.

Si fuera la primera vez que llega a este recinto un tema de esta naturaleza, podríamos opinar, por supuesto no con ligereza, pero sí con mayor liberalidad, y tal vez hasta con derecho a equivocarnos. Pero apenas se pueden contar las horas, porque son horas en la vida de un país los días transcurridos desde el 26 de mayo, cuando, como recordaba el señor diputado Musacchio, de pie y con una real alegría no sólo

poníamos en libertad a tantos argentinos que nunca debieron ser detenidos, sino que además de eso derogábamos una legislación represiva que era humillante para la República por sus orígenes pero mucho más lo era por sus resultados.

Yo también soy abogado y desde luego me causan náuseas las leyes dictadas por órganos espurios, pero confieso que más náuseas me causan los torturados, los asesinados impunemente, los detenidos sin causa y privados de libertad.

Pero no agotamos ahí la instancia. Si los señores diputados recuerdan, día más día menos, en esa misma fecha se designó una comisión de legisladores para visitar las cárceles, porque había un grave problema con los presos comunes. Entonces, azorados, descubrimos que apenas un ínfimo porcentaje de los miles de personas detenidas, que estaban virtualmente en un estado de insubordinación e insurrección por su maltrato, eran condenadas en Sierra Chica; las restantes estaban detenidas preventivamente. Larga prevención, señor presidente: las había con doce años de prevención, con quince años, y la gran mayoría entre los tres y cuatro años.

Esas fueron las causas de la ley de excarcelación que nosotros, en sentido particular cuestionamos desde esta bancada juntamente con otras, por considerarla insuficiente, pero que sin embargo fue un gran respiro para la situación de ese momento. La excarcelación no es la excepción. Si la *nullum poena*, etcétera, etcétera, vale, lo es porque la Constitución dice que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario, y en principio los hombres deben estar libres mientras se los procesa. Pero acá, en el país, lenta y paulatinamente se habían invertido las cosas. ¿Cómo no se van a invertir a nivel de excarcelación si durante un buen período tuvimos una ley, entre comillas, que autorizaba a allanar los domicilios sin orden judicial y a detener a las personas por diez días sin dar cuenta a los jueces! Entonces, casi diría yo que era una ley beneplácita y graciosa la que existía en ese momento, cuando dictamos la ley de excarcelación.

Por las mismas razones se designó la comisión de reforma del Código Penal, razones vivas, no especulativas, no de Carrara, Werzel, Fierbach. Acá podemos hacer una lista de diez mil, como la de la guía. Pero no eran esas las causas. Lo digo con mucha claridad y firmeza: eran las razones vivas de una situación histórico-política concreta, las mismas que estaban engarzadas en el proceso político que había llevado al país a una larga lucha concebida de las más diversas maneras, con paros, marchas, querellas, tiros, todo lo que hemos conocido.

En definitiva, un poder instaurado por la fuerza tuvo que aflojar la mano ante la presencia del pueblo, convocando a elecciones para que éste ejerciera el principal y primero de sus dere-

chos que era el de gobernarse a sí mismo eligiendo sus propios gobernantes. Todo ese cuadro dio como resultado la ley de amnistía, la derogación de las leyes represivas, que eran un número sin límite, en sus normas y en su articulado, la ley de excarcelación, la creación de una comisión para reformar el Código Penal.

Pero la misma alegría que tuvimos todos el 11 de marzo del 73 y que se reflejó aquí el 25 de mayo en estas mismas bancas, es como si se fuera paulatinamente disipando. No es que nosotros estemos simplemente preocupados; lo está el país todo, en su conjunto. Sólo que tenemos que estar advertidos. Ya lo sabíamos anticipadamente, que un proceso de liberación interna y externa comienza con una toma del poder político, pero no se agota allí; si no sería una cuestión de cooperadoras escolares, una fiesta de fin de curso. Para conseguir las elecciones no bastó que se dictara un estatuto de los partidos políticos; hubo que derramar mucha sangre, y eso fue un simple jalón; y lo demás es un poder real y concreto que se manifiesta en todo el contorno de la sociedad argentina. ¿O es que hemos batido ya a los monopolios? ¿O es que verdaderamente hay aceite en todo el país? ¿Y hay cigarrillos? ¿O no hay dificultades? Claro que las hay. Y hay un poder real interno en el país que no afloja tan fácilmente la situación y agazapadamente está esperando cualquier instante para, con su lógica inexorable, retomar el poder —y esto no lo podemos olvidar— sin dejar de lado que también por fuera existe la misma presión.

Por eso muchas veces, al tratar las reformas económicas y las impositivas, al considerar la ley de alquileres, sistemáticamente he reiterado que los cambios no eran suficientes y que estábamos repitiendo en forma demasiado parecida el pasado, aunque se hicieran modificaciones. Yo comprendo que todo no es tan fácil y rápido; pero lo he dicho con la convicción de que muchas veces se podía haber hecho algo más.

Y ahora sobre estas bancas tenemos un proyecto de ley de aparentes reformas al Código Penal que es, concretamente, la reinstalación de las normas que nosotros hemos derogado. Yo quiero un solo argumento del señor miembro informante de la mayoría que me indique qué elemento de juicio concreto y real —no de los autores italianos y alemanes— se ha modificado aquí para que efectivamente tengamos que imponer estas normas penales. No el hecho de Azul, que es un hecho gravísimo, repudiado por todos. Aunque lo sea, no participamos de ese criterio político.

Pero, ¿saben lo que no ha cambiado aquí? La policía y los jueces; y el aparato represivo tampoco ha cambiado. ¿O se habrán quemado ya las fichas de discriminación ideológica que esta Cámara ordenara quemar? No. ¿No están aún los mismos que han torturado? ¿Quién va a ser el jefe de policía sino, quizá, el mismo que asaltara el

cuartel de policía de Córdoba? ¿O tal vez lo será alguno de los que han estado ayer presentes, emboscados con un trapo en la cara, en la editora de una revista de esta ciudad, que aclaro no es precisamente de mi ideología? Ayer mismo hemos tenido el caso del psicólogo Risot, que debía llevar un mensaje para una conferencia de prensa y que debió mendigar al comisario que lo estaba deteniendo por averiguación de antecedentes. Y todo esto sucede aun sin estas leyes. Porque ahora hay excarcelación.

Lo dijo bien el señor diputado Falabella: con estas normas no va a haber excarcelación. Tomen conciencia de esto los señores diputados.

He escuchado decir que así no se puede combatir al delito. Si cada vez que se detiene a una persona aparece un abogado e inicia una defensa presentando un recurso de hábeas corpus, ¿cómo se va a perseguir el delito? Lo único que falta es que me digan que sin esta batería, ¿quién va a confesar? Eso es lo que me dijeron. Entonces, aquí se juega una cosa muy importante. ¿Cuál es el elemento concreto y real? Yo también tengo la convicción de lo que dijo el señor diputado Musacchio. He leído el discurso del presidente de la Nación, pronunciado con motivo de su entrevista con los parlamentarios. No le puedo pedir yo finezas jurídicas a quien no es abogado, aunque se advierte su fina inteligencia para percibir algunas cosas.

Pero, ¿quién es el factor equis que está pidiendo la reimplantación de estas leyes? ¿Quiénes son los que se encuentran con las manos atadas en verdad para reprimir el delito? ¿O es que han traído aquí a los que mataron al secretario general de la CGT, José Rucci, diciendo: aquí están los asesinos, pero lamentablemente no se pena el homicidio en el Código Penal? ¿Cómo no han traído aquí a un grupo acusado de asociación ilícita, diciendo: qué lástima que no podemos aplicar más que seis años, pero aquí están los integrantes de ese grupo? Están todas las sanciones en el Código Penal.

¿Qué es lo que modifica este proyecto de ley? Tengo aquí una lista, y por ella se advierte que no solamente se han reimplantado las normas de las leyes que hemos derogado; he hecho en esta lista una marca para ver qué penas se han aumentado, y advierto que en realidad todas han aumentado, por lo que estamos por mejorar visiblemente el criterio represivo de la dictadura. Curiosamente, ¿por qué todas las penas que en la ley de la dictadura tenían un mínimo de dos años, ahora en el proyecto tienen tres años? Por la excarcelación; porque hay que tener al procesado haciendo orines; porque hay que tenerlo en la antecala durante dos o tres años, para que se amanse, confiese los delitos, reconozca que sus parientes o amigos están efectivamente en la delincuencia, para que traicione y venalice. Esto es lo que se quiere mediante esta ley, y no hay vuelta de hoja porque es la realidad. Vamos a

votarla —¡cómo no!—, unos a favor y otros en contra; pero sepamos bien qué estamos votando.

Me extrañó que el señor miembro informante, que yo siempre creí que se llamaba Jesús Porto Carrara, haya citado hoy una sola vez a Carrara. Voy a decir por qué. Le escuché citar tantas veces a ese autor que ya me puse nervioso y fui a leer a Carrara. Voy a leer lo que dice textualmente este distinguido criminalista: «... el principio de la tutela jurídica no debe entenderse a la letra y materialmente, como si la misión del derecho penal fuera la de obtener de un modo efectivo que el derecho nunca sea violado sobre la Tierra; estos son sueños del vulgo, que buscan en el juez al hombre destinado, según él, a asegurarle perpetuamente su persona y sus bienes, a la manera que la mujer sencilla busca en el médico al hombre destinado, según ella, a librarla en un instante de todos los males del cuerpo. Sueños son éstos que producen en la vida práctica desengaños y dolores, y en la ciencia aberraciones funestas. La estrafalaria idea —dice Carrara— de que la medicina debe extirpar todas las enfermedades conduciría a la ciencia de la salud al empirismo, así como conduce al pueblo a tener fe en los curanderos. Y la insensata idea de que el derecho punitivo debe extirpar de la Tierra todos los delitos lleva a la ciencia penal a la idolatría del terror y al pueblo a la fe en el verdugo, que es el verdadero curandero del derecho penal». Esto es lo que dice Carrara.

Cualquier alumno que vaya a rendir la materia y diga lo que aquí dijo el señor miembro informante, de que el derecho penal es preventivo, resulta aplazado. Desde el *Programa de derecho criminal*, de Carrara, en adelante, se sabe que las acciones delictivas deben ser penadas, pero como decía Moyano, nadie confía que esto será una prevención para el delincuente. No podemos caer en la ingenuidad de creer que el día D menos uno, cuando el grupo guerrillero ha planificado toda la acción, antes de salir abrirá el Código Penal para ver qué sanciones corresponderán, decidiéndose según la cantidad de años que se establezca.

Quiero hacer aquí el parangón con lo que dijera el señor presidente, en el sentido de que llevan armas los delincuentes porque los hombres decentes no las pueden llevar, y haciendo el parangón digo que estas leyes penales no son para esos delincuentes; son para los inocentes de que hablaba el señor diputado Falabella, y ojalá que no haya más que el setenta y cinco por ciento apuntado. Detrás de esto hay planteos de orden social, que no se encarna en nosotros, en el señor presidente o en los señores gobernadores, únicos elementos nuevos del aparato estatal argentino. Los demás tienen viejas mañas; ellos creen saber: tecnócratas en economía, policías en el orden represivo y del SIDE y sus investigadores, que huelen espías por todas partes. Ellos son otra realidad; ellos quieren hacer las grandes re-

dadas para imponer un cierto orden que sirva —esto no es el cuento de Caperucita Roja— a un sistema económico y social del cual el pueblo argentino se quiere liberar, lo que no le resulta fácil.

En este recinto el diputado Musacchio habló de la extensión de la violencia. Claro que sí; el hombre que quiere vivir y no encuentra su vivienda siente toda la violencia de la vida sobre sí; el que quiere trabajar y debe dejar los bofes para comprar un pedazo de terreno para cultivarlo, siente toda la violencia de la vida sobre sí, la violencia sorda, cáustica, de todos los días, que agrava el corazón y torna ácido el pensamiento. ¿Esta es la violencia de la cual se quiere deshacer el pueblo argentino? Con este instrumento, no, señor presidente. Con este instrumento no se podrá deshacer de esa violencia.

Lo que va a ocurrir es que a los hombres embarcados en la lucha delictiva, política o no política, no les hará mella esta ley, que tiene su contrapartida política; les hará mella a los hombres decentes. Quizá el dirigente venial, el aprendiz de político o dirigente estudiantil, que en la fogosidad necesaria de un pueblo que se moviliza estaba dispuesto a decir en un acto público algunas cosas, debido a la oratoria que le exige la captación de correligionarios —cosas que en el fondo no cree, y quienes lo escuchan tampoco, tales como: si se sanciona esta ley tomaremos el Parlamento—, ante la amenaza de la ley, y sin la necesidad de jueces infamantes, eso no lo va a decir. Entonces, no nos equivocamos al expresar que el país paulatinamente se va a enmudecer.

A su vez, con esta legislación, se van a producir grandes redadas de detenidos y, correlativamente, se va a aumentar la presión política del país.

Advierto, señor presidente, dejando de lado todas las planillas que tengo sobre mi banca, con las que se demuestra objetivamente la verdad de mis afirmaciones, que no puedo dejar de puntualizar algunas cosas. Hay una disimetría en el Código Penal. Algunos señores diputados lo señalaron, y al respecto expresaron que si nosotros sancionamos esta modificación, que no está implícita por el orden político que todos nosotros hemos creado, vamos a encontrarnos con los casos paradójicos, expresados por el señor diputado Day, de que resulta más elevada la pena que se le aplica a quien retiene a una menor que al que la mata, y como decía quien habla en un periódico, de que quien causa una lesión gravísima tendrá la misma sanción que quien invalida genitalmente a una persona. Evidentemente, estaremos ante una desproporción que está en contra de aquella sabia expresión que en derecho, y en especial en el Código Penal, dice que ley pareja es ley justa. Por primera vez, a través del efecto de la muerte impensada, vamos a la condena perpetua,

cuando hasta ahora en el Código Penal, por resultas de sanciones por muerte no se superaban los 25 años. Estamos ante un evidente desequilibrio que el Código Penal no puede contener. Por lo tanto pido la inserción de las planillas que tengo sobre mi banca para que quede registrada esa evidente desarmonía.

Señor presidente: la falta de excarcelación me causa una honda preocupación; pero no quiero que se interpreten mis palabras como las de un diputado de la oposición, como el señor presidente del bloque de la mayoría, diputado Pedrini, expresaba hoy a la tarde, sino como las de un diputado, miembro del Parlamento, hondamente preocupado por una cuestión de hecho fundamental.

Lo más importante que tiene el país para realzar cualquier gesta histórica, sea para la liberación o la transformación —lo ha dicho el líder del movimiento peronista, o sea el actual presidente de la Nación—, es su pueblo; pero no el pueblo contado como cabezas de ganado, sino el pueblo vertebrado detrás de una profunda fe en sí mismo. Los pueblos que tienen fe en sí mismos son capaces de mover las montañas, de romper sus propias cadenas. Pobre de los pueblos que por cualquier coyuntura histórica llegan por hache o por be a perder la propia fe en sí mismos. Son pueblos en diáspora espiritual, no cuentan, no sirven.

Por eso lo más importante de la misión que puedan tener los líderes políticos es, si el pueblo no la tiene, crear la fe. Quizás la raíz del nacionalismo africano radica en una estrategia: crear la fe en el pueblo. Pero aquellos otros que tienen la dicha de que la fe del pueblo esté immaculada, firme y reverdecida, como fue la fe de nuestro pueblo el 11 de marzo, tienen la responsabilidad de cuidar esa fe. La fe es la principal criatura de un pueblo que organiza su propio gobierno. El pueblo, peronista o no peronista, está muy contento de que el general Perón sea el presidente de la República. Están contentos los viejos, los medianos, los grandes, los chicos, y hasta la Unión Industrial, como dice el diputado Musacchio. Todos están contentos. Nadie puede negar que hay un optimismo reconocidamente inventariado por muchas personas en el país.

Por eso, como la principal criatura, en función de un proceso de liberación, es un gobierno popular, también una quiebra del gobierno popular es la principal mecha explosiva que puede destruir la fe. No quiero hacer el inventario de ningún gobierno del país. Pero si en algún pedazo de su historia se encuentra un pueblo con fe y un acto del gobierno que defrauda esa fe, se advertirá cuánto le va a costar eso al país. No me interesa el gobierno en sí sino que me interesa como hecho del

pueblo, que no se pierda la fe, puesto que si ésta se mantiene se pueden lograr muchas cosas.

Además, todos los días estamos señalando los intereses creados que quieren bombardear al gobierno popular. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de protegerlo. No hablo como diputado de la oposición, sino como un diputado angustiado, porque estoy seguro de que en este recinto no hay ningún diputado —y si hay alguno que me desmienta— que haya pensado en este proyecto. Se han presentado muchos proyectos; algunos parecen geniales, otros disparatados o simples. A ninguno se le ocurrió un proyecto de este tipo, ni creo que se le haya ocurrido ni remotamente al presidente de la República. Aquí hay gente que si tiene interés en esto podrá hacer lo que quiera, porque sabemos la ruta que debemos seguir y sabemos por dónde nos podemos encauzar.

Yo voy a ser más cáustico. Sería muy triste que para mayo o junio tuviéramos que inventariar mil o dos mil presos por delitos comunes. En nuestro fuero íntimo todos sabemos que ello será el resultado de este instrumento que hemos puesto en manos, no de los jueces, sino de la policía, y entonces aunque los jueces quisieran libertarlos o decir quiénes deben ser encarcelados, no lo podrían hacer.

Doy por terminada mi disertación con lo que he manifestado, porque los argumentos técnicos han sido sobradamente expuestos.

Simplemente, quería dar testimonio de mi preocupación por este problema y puntualizar que la reflexión, que es propia de cada diputado, les haga pensar hondamente el importante paso que vamos a dar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: las consideraciones que he de formular respecto del proyecto del Poder Ejecutivo sobre reformas al Código Penal, que cuenta con sanción del Senado, no han de extenderse y procurarán ser lo más elocuentes posibles. No han de ser extensas, por cuanto los oradores que me precedieron, en especial aquellos que integran el Acuerdo de Acción Parlamentaria de los Partidos Provinciales, han puntualizado con precisión y agudeza cuáles son los puntos de vista que nos asisten para pronunciarnos en torno de este proyecto. Y procurarán ser elocuentes, a fuer de sintéticas, para que se advierta con claridad qué índole de cuestiones distintas se conjugan en torno de este problema y cómo de su preciso deslinde puede resultar alguna mayor claridad.

El marco general de la situación política institucional del país tal vez artificialmente generado o exagerado, nos ha colocado a los miembros de este honorable cuerpo en tren de pronunciarnos respecto de una situación de facto y de otra proyectada de derecho.

La situación de facto, que viene culminando una serie de procederres condenables, ya ha merecido el repudio de esta Cámara a través de la acertada exposición del señor presidente acerca de los luctuosos y repudiabiles acontecimientos ocurridos en Azul hace pocos días.

Estos acontecimientos de Azul se encuadran en el marco más genérico de la violencia que nosotros hemos venido repudiando desde que se iniciara el funcionamiento de esta Cámara. Obsérvese, señor presidente y señores diputados que cuando se trató la ley de amnistia nosotros, junto con un grupo de representantes de partidos del interior, sostuvimos el mismo criterio que tuviéramos el honor de mantener en representación académica internacional de la Argentina en la International Law Association que, luego de numerosas conferencias internacionales en las que se encontraban representados países de todas las órbitas políticas del orbe —capitalistas, comunistas y del tercer mundo— coincidió en sostener que la denominada categoría de crímenes contra la humanidad o delitos atroces no son delitos políticos ni merecen el beneficio de la amnistia ni, por supuesto, el del asilo político o territorial.

Esto está dicho también, señor presidente, en nuestro proyecto que figura en el Diario de Sesiones de esta Cámara del 26 y 27 de mayo del año pasado, página 239, y que en su artículo 2º preceptúa que «se excluyen de la categoría de los delitos enunciados en el artículo anterior —es decir, los delitos políticos— aquellos hechos que importan crímenes contra la humanidad o delitos atroces cometidos de manera inhumana o carentes de relación atendible con el móvil político alegado».

Se trate de una autoridad que ejerza el gobierno de facto o se trate del legítimo poder de jure instalado en el gobierno, cuando la perversidad de los medios empleados, cuando la atrocidad de los crímenes cometidos, cuando el evidente desprecio de la naturaleza humana tornan de tal modo extraño de todo índice de humanidad y razonabilidad el crimen cometido, no estamos en presencia de un delito político, ni de un delito conexo, sino en presencia de un delito común y para el juzgamiento de ese delito común están las sanciones comunes del Código Penal y están los tribunales que la Constitución señala, ya sea en el orden federal, nacional o provincial.

Siempre hemos condenado la violencia y aunque votamos en general la ley de amnistia, ya en esa oportunidad señalamos que aquellas personas a quienes se comprobara la ejecución de determinadas atrocidades o crímenes no podrían estar amparadas por dicha norma legal.

Hoy estamos en presencia, además, de otro problema. Una coincidencia cronológica hace que debamos tratar este proyecto del Poder Ejecutivo luego de ocurridos los hechos que son de dominio público. Esta iniciativa fue considerada por el Honorable Senado de la Nación en el cli-

ma y en el marco de acontecimientos muy distintos de los actuales. Nosotros debatimos este proyecto cuando todavía están muy próximos los sucesos ocurridos en Azul, pero ya señalé al principio de mi exposición que era necesario deslindar perfectamente bien los aspectos de este problema para lograr una mayor claridad en su análisis.

Entiendo que se trata de dos sucesos de naturaleza totalmente distinta, porque si la respuesta a la barbarie, a la criminalidad humana, a la perversión despiadada fueran éstas u otras sanciones aún más graves que nos llevarán al convencimiento de que de esta manera aplicaríamos el condigno castigo a los delincuentes y lograríamos prevenir nuevos hechos de esta naturaleza, no vacilaríamos en apoyar esta iniciativa.

Aquí se nos ofrece un proyecto que yo divido para su análisis en dos cuestiones a considerar. Una de ellas, meramente numérica, de escala penal: el agravamiento de las penas. Y otra creativa o recreativa de algunas figuras contenidas en legislaciones penales de otros países, proyectadas o ya derogadas, que pretenden de ese modo colocar dentro de la sanción de la ley algunos de los crímenes que se suponen cometidos por elementos terroristas.

En cuanto al agravamiento de las penas, está bien entendido en la doctrina del derecho penal y del derecho penal liberal, que es el que fundamentalmente sustenta y protege la libertad de los individuos y su seguridad, que la mera agravación de las penas no conduce a un grado preventivo mayor. Por el contrario, iguala o acerca el nivel de la sanción a la de otros delitos de mucha mayor entidad o gravedad, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido. En esta forma, el delincuente o el delincuente potencial comete el delito de mayor gravedad, por cuanto la pena, substancialmente, no varía en relación con otros delitos de menor entidad.

Es de destacar que el agravamiento de las penas en el proyecto supera considerablemente los preceptos de los derogados decretos leyes 17.567 y 18.953. Esto es singularmente grave si se tiene en cuenta que este último decreto ley fue el que estableció la pena de muerte. En la iniciativa del Poder Ejecutivo no se llega a establecer esta pena, pero las condenas en lo que hace a las otras figuras delictivas son considerablemente agravadas, especialmente en lo que se refiere a su mínimo.

El otro aspecto que debemos analizar está referido a las nuevas figuras delictivas que se crean. Merecen nuestra crítica el homicidio mediante concurso, la forma de secuestro, las acciones o amenazas, el agravamiento de los delitos de robo y extorsión con secuestros, la innovación en materia de incendios y otros estragos, la tenencia y acopio de armas, la asociación ilícita, la incitación a la violencia y, por último, la falsificación de documentos.

En primer lugar, tales figuras no aparecen consagradas ni por el prestigio de la técnica ni por la autoridad de quienes hayan sido los redactores originarios del proyecto, la profundidad y la seriedad del estudio realizado. Se ha dicho en esta Honorable Cámara que, en definitiva, no sabemos quién era el autor del proyecto, aunque, naturalmente, lleva la firma del señor presidente y de sus ministros.

Una reforma al Código Penal, como a cualquier otro código de la Nación, cuando se tocan materias de fondo, debe merecer una responsabilidad acreditada mayor, un estudio más detenido y una profundización más singular, además del pleno conocimiento del origen de la tramitación y estudio del tema, circunstancias que lamentablemente no se dan en el presente caso.

A esta falta de profundización y de estudio se debe tal vez, por ejemplo, que en el punto 1 del artículo 19 del proyecto, cuando se agrava la pena para el delito de homicidio que se produce con el concurso premeditado de dos o más personas, se equivoque la fórmula. En lugar de decirse «con personas que tomen parte en la ejecución del hecho» —ninguna razón atendible aparece para sancionar el mero concurso premeditado en un homicidio cuando el grado de conexidad puede ser lejano—, no se exige un concurso efectivo en la ejecución del delito, que es lo que califica la pena a sancionarse.

Una referencia semejante podría hacerse a la introducción del artículo 189 bis del Código Penal. A la redacción del artículo que había incorporado el decreto ley 17.567 se le agrega o entremezcla un delito de daño agravado, que es aquel que se perpetra en las máquinas o en la elaboración de productos, materia que debió contemplarse en el artículo 184 del Código Penal y no en el 189 que está comprendido en el capítulo de los delitos contra la seguridad común mientras que el delito de daño debe tener una calificación y tratamiento distintos.

Parecería que por esta vía quisiera sancionarse el presunto sabotaje, lo cual tiene una connotación distinta cuando se trata del delito de sabotaje a técnicas propias de regímenes que por encima de la libertad de los individuos y la seguridad de la sociedad colocan la seguridad del Estado. Cuando esto concluye, como ocurrió en la Alemania de Hitler o en la Italia de Mussolini, en formas totalitarias del derecho penal, se extiende la figura del sabotaje a otros campos, hasta subordinar la voluntad de los individuos al interés del gobierno.

Cuando en el párrafo siguiente se habla del acopio de armas —aun de armas que no sean de guerra— quizás convenga que el miembro informante de la comisión, a su turno, explique claramente el espíritu de la ley en función de los antecedentes de la jurisprudencia y la doctrina, que hagan factible evitar, cuando se trate de la aplicación de esta ley, que, por ejemplo, el hecho de tener algunas armas deportivas se con-

sidere acopio y se establezcan las penas de prisión o reclusión de tres a ocho años que preceptúa el proyecto.

En cuanto al artículo 213 bis, referente a la asociación ilícita, en que se agrava considerablemente lo dispuesto por la ley 16.648, que había recobrado su vigencia tras la legislación del gobierno de facto, se suprime la sanción de los delitos persecutorios con sentido racial, de nacionalidad o de religión. Ello aleja a la Argentina de compromisos internacionales ya suscritos, en los que nos hemos comprometido a castigar todo tipo de persecución racial, inhumana o religiosa. Además de agravarse la pena, extendiéndola a un mínimo y a un máximo mayores, en este caso de tres a ocho años, se inculpa al sujeto por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Podría ocurrir que de no mediar una intención deliberada en la comisión de la asociación ilícita o en integrar tal asociación ilícita, más de una persona honorable puede ser sorprendida en su buena fe por el solo hecho de ser miembro de una asociación que, como en el caso de las asociaciones ilícitas clandestinas, ocultan en numerosas oportunidades a algunos de sus integrantes de buena fe que están en la comisión de determinado tipo de delito.

En síntesis, señor presidente, en el análisis del proyecto se advierte que adolece de fallas técnicas desde el punto de vista del agravamiento de las penas, en cuanto éste no es un factor decisivo real de los delitos que se quieren incriminar.

En segundo lugar, los tipos legales creados, o recreados, a través de este proyecto incurren en defectos derivados de la falta del análisis serio y profundo que debe merecer toda reforma de la legislación de fondo.

Saliendo del marco del proyecto y volviendo al ámbito de la violencia, diría que estas formas de violencia expresadas a través de crímenes inhumanos y atroces seguramente no se van a dejar de perpetrar porque se sancione un proyecto de esta naturaleza. Es preciso que claramente se forme conciencia de que no es válida la táctica o la estrategia política de alentar a los criminales atroces a cometer los más vandálicos crímenes, aunque sea en nombre del sagrado derecho de que el pueblo recupere el gobierno de sus instituciones, porque luego, cuando se pide a estos aliados vandálicos paz y orden, responderán con guerra y anarquía por cuanto su vida es el caos, su finalidad es la anarquía, y sus designios inconfesables, la destrucción de todo vestigio de nacionalidad. Sirva esto de lección para que no se busquen alianzas circunstanciales con quienes sólo se proponen destruir la nacionalidad, aunque el precio apetecible sea la obtención del gobierno.

Aclárese también la visión de los señores diputados en el sentido de que no podrá decirse ya que «estuvimos en un tiempo en la delincuencia» y que ahora dejamos de estarlo para

repudiar a nuestros aliados de ayer, porque éstos seguramente, como ocurre en el lenguaje y en la táctica de los hombres que hacen de la vida en tinieblas y del asalto y la muerte su profesión habitual, han de ser quienes primero nos traigan las cuentas de sus temibles y van-dálicos hechos criminosos.

Tampoco parece justo ni razonable que se diga, y es forzoso aclararlo en nombre de la dignidad del Parlamento, que si el Poder Ejecutivo no pudiera contar con este instrumento legal, de todos modos va a aplastar la violencia fuera de la ley, porque esto sería la pretensión inadmisibles para todos los señores diputados de que el Poder Ejecutivo, por más popular que fuese su extracción y por mayor que sea su respaldo político, podría gobernar fuera de la ley, lo que en nombre de la República no podemos aceptar.

Quede en definitiva claramente dicho que repudiamos y condenamos la violencia en los términos más severos, como lo hemos hecho siempre sin ambages, sin especulaciones ni grados de conveniencia, y que no compartimos la filosofía ni los términos de este proyecto que vamos a votar negativamente, porque no lo consideramos el medio idóneo jurídico ni práctico para poner fin a esta escalada que azota a la República.

En definitiva, señalamos que para gobernar la patria es necesario y fundamental tener autoridad política, pero tanto o más importante es tener autoridad moral, en el sentido de que la conducta pura y limpia de quienes tengan las riendas de la República no sufra retrocesos o desviaciones que la desacrediten ante quienes pudieron haber sido sus aliados de ayer. Así mismo, quienes tengan la grave responsabilidad de conducir los negocios públicos tanto en el orden interno como en el internacional, deben ser merecedores del respeto y la consideración de sus conciudadanos y no de su juicio reprobatorio, porque sus intereses personales puedan estar confundidos con los de la Nación.

Repudio a la violencia, disentiendo con este proyecto por considerarlo inapto, inidóneo e insuficiente, además de técnicamente defectuoso, y un reclamo serio a la autoridad moral del gobierno de la Nación para que dé un ejemplo de conducta en el presente y en el futuro ante la historia de la República, que vive momentos de crisis, son las formulaciones que dejo expresadas en nombre del bloque de diputados del Partido Autonomista Liberal de Corrientes (*Aplausos*).

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Sueldo.

Sr. Sueldo. — Señor presidente: cumplo el deber de fundamentar la posición del bloque revolucionario cristiano contraria a la sanción del despacho en consideración.

Una vez más el tema de la violencia ha sido traído a este recinto. Tantas veces me ha tocado opinar sobre él que ya tengo el escrúpulo de repetirme. Desde luego, pareciera que existe en

este momento una consigna nacional en el sentido de que todos debemos rendir absolución de posiciones, como si estuviéramos convocados para manifestarnos por sí o por no frente a la violencia subversiva, a repudiar determinados actos y a llorar sus consecuencias.

De algún modo ello es razonable. Pero no dejo de recordar que hace aproximadamente unos dos años el gobierno militar citó a todos los partidos políticos a la Casa de Gobierno para requerirles su adhesión a los puntos de vista oficiales con motivo de dos crímenes atroces imputables a organizaciones guerrilleras. Nosotros, los integrantes de este pequeño Partido Revolucionario Cristiano, si mal no recuerdo, fuimos los únicos en no concurrir. Dijimos en esa oportunidad que sentiríamos algo así como si mancháramos nuestra conciencia si concurríamos a ese acto para dar una simple y total adhesión a una posición gubernativa de condenación lisa y llana de actos de violencia política, que sin duda constituyen crímenes, pero cuyas causas profundas parecían no interesar indagarlas y menos aún removerlas.

Al respecto, siempre he hecho salvedades en esta Cámara y me fastidia un poco, hasta por honradez intelectual —digamos así—, tener que reiterarlas. No se espere de nosotros el recurso fácil de repudiar indiscriminadamente la violencia en general y en abstracto porque ella, en esa forma, existe apenas filosóficamente. En la realidad, hay violencias y violencias, y sólo nos podemos pronunciar legítimamente con un cierto criterio casuístico: esta violencia, sí; ésta otra, no.

No se nos escapa que a lo largo de toda la historia de la humanidad han aparecido objetos idólatricos a la manera de talismanes o de prácticas casi de brujería, con que algunos grupos han producido un deslumbramiento de sus respectivas sociedades y han logrado un cierto dominio sobre ellas. Desde los hechiceros del clan primitivo hasta nuestros días, muchos han sido esos recursos.

La violencia cultivada indiscriminadamente viene a ser hoy un cierto objeto idólatrico y su posesión por algunas minorías tiene una explicación bastante lógica. Con los medios modernos no cualquiera puede preparar y manejar los instrumentos y los operativos, como se dice en la actualidad, que se practican. Los estudiantes y profesionales de la química saben mezclar explosivos. ¿Cuántos accidentes han causado víctimas entre aficionados o aprendices de la fabricación de bombas? Ese es un ejemplo que se puede hacer extensivo a las demás actividades de ese tipo. Un nivel intelectual mínimo, que casi siempre parece ser universitario, se da en el reclutamiento de esos núcleos, y la posesión de esa sabiduría aparece, durante algún tiempo, como la de una magia que da prestigio. Es el encantamiento que estimula el cultivo idealístico de la violencia por la violencia misma.

Puestos en ese tren, desde luego no se atiende a que aun ese procedimiento sistemático, en el plano político por supuesto, forma parte de un quehacer político y que, por lo tanto, debe ser racional. Si se quiere usar de la violencia en el plano político, aunque fuese con ideas equivocadas, lo mínimo que se le puede exigir a sus practicantes es que concilien su operar con ciertos dictados de la inteligencia política. Ha de saberse, pues, cuándo el medio empleado y el objetivo inmediato propuesto es racional o cuándo es irracional.

De allí que para nosotros no es ésta una mera cuestión moral de si es lícito hacer tales cosas contra un régimen y no lo es realizarlas contra otro, criterio bastante discutible por otra parte y moralismo propio de la irredimible mentalidad burguesa de quienes lo esgrimen. Hay, sí, exigencias éticas para toda actividad humana, incluso para ésta.

Pero hay además otros recaudos, los de la praxis política. Un realismo elemental exige saber que sin opinión pública adicta, la rebelión de pequeños grupos jamás avanza. Mao Tsé-tung dice: el pueblo es al guerrillero lo que el agua es al pez. Pero él lo dice desde la perspectiva de quien ha organizado no ya una guerrilla sino toda una guerra masiva de liberación nacional, durante una veintena de años y con millones de hombres en armas. Ese juicio está además suponiendo, por la inversa lógica, que se requiere un pueblo que participe del criterio político del que está haciendo la guerrilla, porque si falta el pueblo falta el agua y el pez muere por asfixia. El pueblo; no cualquiera que invoque al pueblo.

Pautas humanas elementales vienen faltando desde hace tiempo en la fundamentación de esto que llaman la subversión guerrillera. Por ejemplo, psicológicamente, la propuesta de la violencia genera expectativas de corto plazo. No hay un ser humano que, con gusto, de antemano acepte engancharse para largos años de lucha. En la guerra de emancipación se entra creyendo y queriendo que sea corta. Después dura quince o veinte años. En la guerrilla, con más razón todavía; para esto vale también su diminutivo.

La suerte de la guerrilla depende de las condiciones de cada país, de su coyuntura política interna y externa, de su estructura económica y social, de su tipología cultural, hasta de su superficie o tamaño. No es lo mismo la guerrilla en Vietnam o en Cuba, que en países de millones de kilómetros cuadrados, como Colombia, Venezuela o Argentina. En éstos, fácilmente tiende a enquistarse hasta sobrevivir como un subproducto del sistema, que incluso se da el lujo a veces de estimularla o de cuidarla para que se mantenga, porque le sirve de pretexto para enviar oficiales a entrenarse en el canal de Panamá, para enviar misiones a comprar armas y para justificar toda una política de represión interna. Cuando se da, pues, el largo plazo no

querido, se opera el cansancio del guerrillero y el del pueblo; sobre todo, el del pueblo. La expectativa del corto plazo ha sido defraudada y así se dan el desaliento, la desertión, la reacción general —en todo el sentido de la palabra reacción— y la cristalización de esa lucha que, por ende, no progresa.

Pese a algunos juicios que aquí se han vertido, en la experiencia argentina no ha sido la guerrilla la que debilitara substancialmente a la última dictadura militar; en algún sentido la fortificó. Han sido las puebladas de Córdoba y de Rosario, de Corrientes y de Tucumán, de Catamarca y Mendoza, de Malargüe y hasta de Río Negro, y tantas otras, las que conmovieron decisivamente al régimen de facto.

La falta de una perspectiva racional y el ideologismo engegucado son factores del mantenimiento de este tipo de operación, que con total desprecio por la política, repito, sus propios autores no advierten que es también una operación política. Son también estas razones y no solamente las éticas, las que nos hacen no compartir en modo alguno la estrategia y las tácticas de esta violencia subversiva.

El análisis jurídico del tema ha sido hecho aquí abundantemente, y aunque parezca perogrullesco, voy a decir que hago mios todos y cada uno de los argumentos que se han dado brillantemente por todos los señores diputados de las diversas bancadas que se oponen a la sanción de esta ley. He de remarcar, sí, que no comparto la expresión optimista del señor miembro informante cuando ha dicho que el proyecto presentaba pequeños defectos técnicos. Los defectos técnicos, como apuntaba recién el señor diputado Balestra, son grandes; pero a nosotros nos preocupan mucho más las mayores implicancias políticas. No es éste un tema puramente jurídico; es un típico asunto de naturaleza política y con ese criterio debemos enfocarlo.

Se ha dicho desde el más alto sitial de la República que no tenemos ley para reprimir las acciones de que se trata. No es cierto, y esto ha sido refutado ya por algunos de mis colegas; pero me interesa señalar que los delitos de que se ocupa el proyecto están casi todos castigados en el código vigente; tanto es así que lo que se propone es aumentar las penas para esos mismos delitos. Luego, no es exacto argumentar imponiendo a la opinión pública con una supuesta indefensión del Estado, que carecería de ley para actuar frente a esos ilícitos. Hago mías aquí especialmente las expresiones del señor diputado Sandler sobre el origen curialesco —mucho peor que curialesco en sus efectos— de ese incremento de penas para impedir la excarcelación, como también hago mía su aguda frase de que los terroristas no leen el Código Penal antes de salir a hacer un operativo. Cien códigos penales no van a frenar esa actividad, y desde tal punto de vista cabe decir que con este tipo de temas y con este esfuerzo estamos perdiendo solemnemente el tiempo.

En cambio, donde falta ley —si es que falta—; donde se propicia, en todo caso, una nueva configuración jurídica a través de la modificación de palabras o de frases, es precisamente donde no se da la típica acción terrorista o guerrillera, y esto es lo más alarmante del caso. No son los miembros de esas organizaciones subversivas los que hacen proselitismo con programas o posiciones políticas, los que plantan tribunas en las calles, los que pueden sacudir a un gremio o a una empresa con una huelga o los que pueden agitar a una universidad; ellos están en la clandestinidad y en otra cosa.

Se pretende, pues, aplicar el tratamiento de la asociación ilícita y de la incitación a la violencia a ciertas actividades que no se delimitan claramente en el proyecto, permitiendo así con esa generalidad que se descargue la sanción sobre actitudes, discursos o declaraciones de tipo político o gremial cuyo acierto, cuya importancia, cuya justificación misma se podrá discutir, pero que de ninguna manera deberían ser asimiladas al delito. Entonces estaremos tipificando, y eso es lo que determina este proyecto, un nexo de delito ideológico o político y no la delincuencia común conexa o no conexa que se desea reprimir.

Todos sabemos a qué se refiere esta peligrosa posibilidad, más peligrosa aún si se tiene en cuenta que mientras los agentes subversivos actúan ocultamente, porque ésa es la modalidad de su oficio, los autores de aquellas otras acciones las producen a la luz del día; vale decir que serán fáciles víctimas de la represión.

¿Y los jueces? A estas horas no nos podemos pagar de inocentadas. No se trata de dudar de la capacidad jurídica o de la limpieza moral de los miembros del Poder Judicial: se trata, señores diputados, de que si la generalidad excesiva de la norma está indicando la voluntad política del legislador de que así sea esa norma, con un sentido lato y no restrictivo, ¿qué salida tiene el juez, sino aplicar la norma con ese criterio amplísimo? ¿Qué actitud va a escapar de esa ambigüedad jurídica?

No debo ahorrarme, señor presidente, el advertir que no ponemos en tela de juicio la honestidad de miras del Poder Ejecutivo de la Nación. No le hacemos aquí una cuestión moral al señor presidente de la República, pero sí tenemos derecho —y lo hemos de decir con todas las letras— a manifestar el decaimiento de nuestra confianza en el plano psicológico. ¿Por qué? Porque esta ley es una actitud de crisis de fe, como alguien dijo en este recinto; porque esta ley empieza a mostrar a un régimen de base popular en una actitud psicológica a la defensiva. Y esta norma no está sola sino que ha venido precedida de otros antecedentes, y cuando las piedras ruedan por la ladera se producen los aluviones y los desastres. Estamos cayendo por la pendiente, y veámoslo en la consideración de casos concretos.

Por un decreto originado, desde luego, en el Ministerio del Interior, se reimplantó una ley

derogada por este Honorable Congreso, que prohíbe publicar noticias o comunicados de los grupos declarados al margen del sistema legal. A su vez, ya se ha votado en este recinto y promulgado otra ley que quita a los tribunales ordinarios de provincias su competencia sobre este mismo tipo de delitos, para atribuirlos a la jurisdicción federal. La cámara del terror empieza a filtrarse por las hendiduras. Se ha establecido sin ley, por decreto o por vías de hecho totalmente sistemáticas, una censura progresiva en las más diversas manifestaciones del pensamiento. Esto preocupa también a los intelectuales y artistas, y no sólo a quienes batallamos en el terreno de las ideas políticas. La censura llega al ámbito aduanero, de tal manera que simples vistas de aduanas u oficiales de policía van a dictaminar en el futuro qué es lo que podemos leer los argentinos.

Este es el andar de un régimen que involucre, replegándose sobre su propia desconfianza en sí mismo y en el país. Y esto es lo que funda mi alarma, señor presidente, amén de los procedimientos de hecho sin ratificación oficial pero también sin reparación alguna, como los padecidos por el diario «El Mundo», con el cual no tengo coincidencia ideológica total, pero que definiendo como vocero de la libre expresión doctrinaria y política. Y esto para no hablar de la prescindibilidad de empleados públicos, del reajuste riguroso de la ley de asociaciones profesionales y de la restricción del derecho de huelga.

Baste un solo ejemplo sobre el primero de los tres últimos casos. En una universidad nacional del interior cuatro antiguos militantes nuestros, con una foja de servicios también antigua y limpia, que va de cinco a quince años, ya han sido advertidos que junto con un militante de la Juventud Peronista están en la lista negra para ser declarados prescindibles; desde luego, por razones ideológicas. No sé adónde vamos a ir a parar. Si la gente que ha gastado —digamos así— lealtad de relación política con este gobierno, porque quiere gastarla sin tasa ni medida con el país, es puesta en la calle por la medrosidad que va ganando cuerpo en la República, yo no sé si no estamos tomando el camino hacia un Estado policiaco claramente autoritario. No imputo intención alguna, señores diputados, y no hace falta llegar al plano subjetivo. Antes he dicho que no ponía en tela de juicio la autoridad moral del presidente de la República, pero de buenas intenciones —dice el proverbio— está empedrado el camino del Infierno. Señalo el hecho concreto de que se va tomando ese camino, de que todos estos hitos están amojonando la cabecera de ese camino.

Preceptos similares e idénticos en ciertos casos a los que hoy se nos proponen, son los que derogamos aquí mismo el 26 de mayo de 1973. Dos fundamentos de aquella derogación ha dado el miembro informante: uno jurídico y otro políti-

co. El primero, la inconstitucionalidad formal por haber emanado de un régimen de facto; el segundo, el haber querido liberar a combatientes contra la dictadura. Señalo que falta una valoración ética que es base de la valoración jurídica y política. ¿Aquellas normas eran buenas o malas en sí mismas? Con dolorosa sorpresa vengo a enterarme de que aparentemente no se sabía ni nunca se juzgó a tales normas por su contenido sino por su origen jurídico-formal y por su efecto político inmediato. Lo que en este recinto dijimos, lo que dijo el señor diputado Porto en aquella oportunidad, fue una clara y terminante condena intrínseca del contenido mismo de aquellos preceptos. Venir ahora a borrar con el codo lo que entonces escribimos con la mano, ¡jamás, señor presidente!

En cuanto a que cualquier violencia es totalmente legítima contra unos destinatarios y no contra otros, es totalmente inaceptable como teoría y de gravísima imprudencia en la práctica. Ese moralismo equívoco nos ubica en la misma tesitura de los grupos que se pretende exterminar al plantear la cuestión sobre un tembladeral ético. Según quien fuere la víctima la matanza será buena o mala. Asesinar soldaditos conscriptos que cumplen su período militar en las fuerzas armadas o en la Policía Federal, así como oficiales o suboficiales, es algo que no empieza en los últimos meses. Se practicó abundantemente bajo la dictadura militar. ¿Y entonces? ¿Entonces era bueno y ahora es malo?

El sentido de la amnistía no puede desfigurarse. El Poder Legislativo no puede aplicar la justicia, función propia del Poder Judicial. El Poder Legislativo sanciona normas generales, y en ese caso fue una norma típicamente política con un fin estrictamente político: brindar a todos los presos, indiscriminadamente, la oportunidad de reincorporarse a la sociedad en paz, en reconstrucción y en liberación, y hacer nosotros una prueba, un experimento, un augurio político que podía resultar o no. Pero no podemos hablar estrictamente de que realizamos la aplicación de la justicia, porque no es función del Congreso.

Queda en pie que antes se aprobaron y se alentaron actividades que ahora se quiere eliminar, olvidando que quien siembra vientos cosecha tempestades. Nosotros no nos encontramos en contradicción, porque aun reconociendo que las normas morales deben adecuarse en tiempo y lugar, hay principios universales y permanentes, verdaderas leyes del corazón y de la mente humana, que son ineludibles, inequívocos, inamovibles. Se nos ha enseñado en cristiano a amar y a respetar la vida, la libertad y la integridad física no sólo del amigo sino también del enemigo.

¿Y quiénes son los enemigos? Aquí está el trasfondo ideológico del problema. Hasta ahora, que se sepa, oficialmente, públicamente, sólo se ha culpado a cierto extremismo marxista. ¿Y los

otros? ¿Quiénes mataron a tantos militantes de izquierda, marxistas o no marxistas, sin actividad subversiva, como Colombo, Delleroni y decenas más, sobre todo decenas de jóvenes, además de los asaltos a sus diarios y revistas y a sus sedes partidarias? Es la crónica cotidiana de los últimos meses. Y sobre esos hechos se tiende un manto de sombra y de olvido, no sólo en cuanto a la investigación sino también, aparentemente, en cuanto a la preocupación.

Este proyecto viene bautizado ideológicamente desde la Casa de Gobierno contra ciertas formas de marxismo. Ya sabemos, entonces, de antemano, contra quiénes se declara la guerra exclusivamente, quiénes van a ser los destinatarios de la aplicación de esta ley.

Por otra parte, se habla de conjura foránea. ¿Conjura de dónde? En el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro había un matrimonio brasileño que, desde luego, hablaba portugués. Se dice que en el frustrado intento de copamiento de la planta General Mosconi el grupo que se retiraba hablaba portugués. Desde luego, habrá también quienes hablen en inglés y tal vez en otros idiomas. Me parece que estamos cargando las tintas unilateralmente a la ideología marxista. Los largos brazos de la CIA alcanzan para rascar a todo el globo terráqueo; de la CIA y de su aliado natural, el fascismo local. Por eso es tan relativo lo del trapo rojo, y esto lo digo con cierta pena. Es relativo y confusionista. En primer lugar, porque según las propias declaraciones reiteradas del señor presidente de la República, el origen de toda esta actividad de violencia política criminal, el foco instigador y director, está en París, y es el mismo que dirigió la asonada estudiantil del 31 de mayo de 1968. Por lo tanto, el trapo no es rojo, sino que es negro.

Negra fue la bandera que ondeó en las barricadas de París, y rojo el trapo que en primer lugar arriaron los anarquistas subversivos. Pero lo que me preocupa es que se insista demasiado en el trapo rojo; yo, en todo caso, aclararía que en mi patria no quiero trapos rojos lisos ni con rayitas y estrellas. Me pregunto por qué no se dice esto. Y encuentro una respuesta fácil y totalmente exacta. No se dice porque el origen de la frase, muy repetida últimamente por sectores peronistas, no se encuentra en este movimiento. Esta frase fue lanzada y acuñada como estribillo propio, como lema de guerra, hace ya cuatro o cinco años, por un grupito que figuraba como el sector juvenil de FAEDA, Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas.

No hace falta dar nombres propios. Todos recordamos a ciertos jóvenes gorilas, de evidente corte fascista, que gozaban de la protección oficial de la dictadura, que les prestaba el salón de no me acuerdo qué color en Y.P.F., así como otros lugares y favores oficiales.

Ese grupo desarrolló actividades tan vastas y costosas que solamente podían concretarse si se contaba con la financiación de la CIA. En fin, a esta altura querría saber si estoy o no incurso en la ley que se proyecta, y aquí vuelvo, como anuncié que lo haría hacia el término de mi exposición, a algunos conceptos fundamentales.

¿Qué es una revolución? En términos lo más aproximativos posible, no es por cierto un mero agitarse de los acontecimientos ni el tumbar gobiernos, ni el mejorar las condiciones de vida, aunque esto se realice de manera apreciable y aceleradamente. Ni científicamente ni de acuerdo con la experiencia política se puede decir que hay revolución mientras no se hayan cambiado las bases de sustentación del poder. Pues bien, yo declaro orondamente y puedo estar metiendo la cabeza en el cepo de esta ley, que no se conoce en la historia ejemplo alguno de revolución que no haya contado en algún momento con el ingrediente de la fuerza. Es por ello que como profesor de ciencia política, como dirigente político y como diputado, no se me va a arrancar nunca una condenación abstracta y absoluta de toda posibilidad de violencia. Desde luego que con ciertos resguardos éticos, pues ciertos medios no son lícitos jamás, y está aquello del consenso popular mínimo. Pero pretender revoluciones auténticas y que, al mismo tiempo, sean totalmente pacíficas, hablando en serio, no pasa de ser una mojigatería.

Además, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que es la subversión, porque se ha abundado en un palabrerío coincidente en querer demostrar que la subversión se opera siempre desde abajo, como si se tomara al pie de la letra el prefijo «sub». Pero no es así, señor presidente.

Subversión significa verter o poner hacia abajo, no necesariamente desde abajo, es decir, colocar patas arriba o tumbar determinados resortes básicos en lo institucional o la carta de los valores de un sistema imperante. Resulta, entonces, que más de una vez se opera la subversión también desde arriba.

Aquella frasecita «la violencia de arriba engendra la de abajo» nunca me convenció del todo, porque a veces la violencia no viene como represión desde arriba —ahora parecería que puede volver a venir—, sino que llega de un lado y de otro, de los cuatro costados, y porque además de la violencia física importa, como lo recordó muy bien el señor diputado Musacchio, otra violencia social que yo llamo también subversión.

Recorriendo provincias en cumplimiento de mi deber político, suelo encontrar tristes comparaciones. Parecería que sólo están en tela de juicio gobernadores cuya eficiencia no corresponde discutir aquí pero cuyo pecado sería exclusivamente de tipo ideológico. Otra vez la obsesión patológica que está devorando a la República: lo ideológico. En cambio, gozan de total

impunidad y de certificado de buena conducta otros gobernantes insospechables de tal desviacionismo de izquierda, pero ya puestos bajo la picota de sus propios conciudadanos: copartidarios, por nepotismo, por abuso del poder en muchas formas, por financiar la formación de gremios paralelos a fin de destruir los existentes, etcétera

En una provincia, un grupo de jóvenes representativos de las principales tendencias políticas, que a su vez están aquí representadas, me enseñó un montón de voluminosas carpetas, penosamente probatorias de gestiones administrativas irregulares. Tengo presente en mi memoria un negociado de alrededor de 700 millones de pesos, muy difícil de probar con medios de indole forense, porque se usó como testafierro a un quebrado insolvente. En ese caso habría habido un remate de tierras que se hizo previo arreglo de que él sólo percibiría 50 millones de pesos. Artificialmente se hizo subir el valor de la tierra hasta 700 millones y aparece en ese momento un funcionario público que, en nombre del Estado, compra las tierras en 705 millones, pagándolos nominalmente al ejecutado, que no percibió, por cierto, la totalidad de ese precio.

Entonces los jóvenes —no los adultos—, que los había de todas las afiliaciones políticas principales, me preguntaron: ¿Cree usted, señor diputado, que eso que no podemos probar ni administrativa ni judicialmente y por eso no lo denunciarnos, tiene remedio a través de los recursos convencionales?

Sr. Colello. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sueldo. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Colello.

Sr. Colello. — Le pediría al señor diputado Sueldo que, por favor, y dada la solvencia moral que lo acredita para ello, diga a esta Honorable Cámara, en primer lugar, quiénes son las personas amenazadas en las diferentes facultades que acaba de enunciar, y, en segundo lugar, a quién atribuye ese negociado de setecientos millones de pesos, quién los recibió y, en forma especial, el funcionario que intervino en esa negociación.

Sr. Pedrini. — Señor diputado Sueldo, ¿me permite una interrupción?

Sr. Sueldo. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Evidentemente, la acusación del señor diputado Sueldo es de suma gravedad, por lo que yo lo sugeriría, y lo hago en nombre de la bancada mayoritaria de un gobierno que defendemos y que pretendemos y deseamos sea honesto, que si algún gobernador de provincia o algún funcionario del Estado ha cometido este tipo de delito, el señor diputado haga público su nombre para poder hacer la investigación. Tenga la absoluta seguridad el señor diputado

de que nuestro movimiento y nuestro gobierno sabrán hacer justicia con este funcionario que no ha sabido cumplir con su deber.

Sr. Sueldo. — Agradezco las dos interrupciones y prosigo, señor presidente.

Hago presente a mis colegas que me acaban de hacer los pedidos de referencia que no estoy más armado de pruebas judiciarmente válidas que los jóvenes autores de la denuncia, porque yo no soy autor de ninguna denuncia, estoy comentando un hecho político y, además, como abogado sé perfectamente que no me voy a largar a la piletta si no tiene agua. No me voy a hacer responsable...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Sueldo. — Concederé las interrupciones si se me piden como es debido.

Sr. Presidente (Lastiri). — La Presidencia ruega al señor diputado Sueldo que no conceda más interrupciones y a los señores diputados les solicita que atiendan a la palabra del señor diputado, dado que en la oportunidad correspondiente podrán hacer uso de la palabra.

Sr. Sueldo. — He traído a colación un episodio cuya importancia está en el final del diálogo. Yo sé lo que es formular denuncias o acusaciones. La importancia está en que ese grupo de jóvenes, en el que había peronistas, radicales, demócratas cristianos y socialistas, me interpeló finalmente poniéndome a mí contra la pared, más que a los funcionarios públicos que ellos inculpaban, con este desafío: «¿Usted cree, señor diputado, que puede haber saneamiento por las vías pacíficas?». Y otro interrumpiendo, sentenció así: «Solamente secuestrando al testafarro y haciéndolo cantar tendremos las pruebas necesarias para liquidar el asunto».

Quiero señalar con esto que la tentación a la violencia guerrillera y subversiva no viene únicamente ni a veces viene principalmente de focos ideológicos, sino de hechos políticos, sociales y económicos, y es el conjunto de las causas lo que tenemos que erradicar.

Yo comprendo las reacciones instintivas de mucha gente que frente al aumento de la violencia aplauden o piden el incremento de las penas e incluso hablan de la pena de muerte; pero nosotros somos legisladores, hombres de Estado con otras responsabilidades y no podemos actuar sólo por instinto sino mediante un profundo y sereno raciocinio. Si obrásemos por instinto, a esta altura treinta o cuarenta delitos contemplados por el código tendrían ya la pena de muerte votada por nosotros. Para el tipo de delito de que se trata no hay remedio legislativo sino de naturaleza política y, por ende, soluciones a mediano o largo plazo. En lo inmediato, esa violencia desgraciadamente seguirá e, incluso, se incrementará a despecho del aumento de las penas.

Los grupos de ultraizquierda atacan la reforma, pero lo que en realidad sucede es que la desean. La dialéctica marxista siempre quiere empujar las contradicciones del sistema vigente hasta llegar a la polarización total. Quieren dar esa batalla así, porque a ellos les conviene. Pero debemos preguntarnos: ¿aceptamos dar la batalla donde ellos quieren? ¿Aceptamos colocarnos en la polarización que ellos buscan? ¿Qué pasará dentro de varios meses cuando este régimen popular tenga, sin haberlo querido, decenas, centenas, y hasta quizá miles —como dijo el señor diputado Sandler— de presos políticos? Pero la mayor parte de ellos no serán guerrilleros, sino quienes firmaron manifiestos, propiciaron huelgas o retuvieron en sus oficinas al director de una fábrica, o promovieron mítines con o sin permiso oficial. Entonces, ¿cuál será el rostro de este régimen que todos defendemos, incluso más allá del mero raciocinio, con una manifestación espiritual de afecto? En definitiva, ¿cuál será su destino si empieza ahora a jugarlo en gran medida a la represión, a la suerte veleidosa de las armas, que un día apuntan para un lado y al siguiente para otro?

Todos estos interrogantes no resultan respondidos, ni siquiera contemplados en lo mínimo, por el largo informe del señor diputado Porto, que en un alarde de erudición se ha ido por las ramas en cuanto al fondo del problema. Aquí no interesan las citas de códigos extranjeros; un poco más y nos íbamos a enterar de las penas que corresponden al robo de canguros en Australia. No interesan las opiniones de los autores clásicos y modernos, porque en este caso nos hallamos ante un asunto de naturaleza política y estrictamente argentino, con condiciones propias de esta etapa del proceso que vivimos, y eso es lo que demanda nuestra celosa atención.

Los sucesos de Azul —bárbaros, sin duda— prueban, entre otras cosas, la imposibilidad de la guerrilla de tomar el poder, ni siquiera de copar un cuartel y, por lo tanto, mucho menos de afectar los mecanismos institucionales. Entonces, ¿por qué se los invoca sosteniendo que la reforma es necesaria para defender la estabilidad de las instituciones? Lo que sí agravia y daña a los mecanismos institucionales es esta escalada represiva en que ya estamos inmersos. No tenemos que defender las instituciones rodeándolas de verjas de seguridad, emplazando ametralladoras en su derredor; tenemos que defenderlas yendo a las verdaderas raíces de esta enfermedad social que es la violencia crónica que nos está asolando.

Mientras tanto, hemos retornado a un estribillo fatídico que viene de los años inmediatamente anteriores a la reconquista de la institucionalidad. Fueron tres los presidentes que en el último lustro nos expresaron que estábamos en guerra ideológica: Onganía, Levingston y Lanusse. Hoy, nuevamente se notifica a la Nación que estamos en guerra contra un extre-

mismo ideológico. Por eso alguna vez he discrepado incluso con jóvenes que defendían de algún modo ciertas actividades guerrilleras, en cuanto les he reprochado haberse dejado llevar por la atracción de esa frase: «estamos en guerra». ¡Cuántas cosas se justifican en nombre del estado de guerra! En todo caso, ¿con qué aliados estamos o queremos actuar en esta guerra? ¿Con los que aplauden la represión?

No saldremos de la violencia distribuyendo años de cárcel, sino repartiendo efectivamente y no de palabra los poderes concentrados de los círculos minoritarios típicos de la sociedad capitalista; no solamente resultados deseablemente buenos, sino distribuyendo los poderes. En otras palabras, socializando definitivamente las estructuras vigentes.

Sólo así defenderemos las instituciones, las presentes y también las futuras, las que deberán nacer del vientre de la revolución fecundada por el pueblo, cuando la maduración y la fuerza necesarias instauren en la Argentina la socialización popular y la culturalización nacional que esperan no sólo quienes creyeron en las promesas electorales, sino también las grandes masas latinoamericanas que anhelan escuchar ese grito socializante y emancipador de la Argentina. Entonces, quedarán atrás para siempre las tinieblas de la desorientación y del miedo, que hoy obnubilan la vista de tantos argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: los diputados de la Unión Cívica Radical entramos con una absoluta tranquilidad en este debate y participamos de él con nuestro espíritu también completamente tranquilo, porque jamás hemos aplaudido la violencia criminal. No hemos hecho discriminaciones de víctimas ni de victimarios. Hemos condenado el asesinato cobarde de Aramburu y el asesinato cobarde de Rucci.

Hemos estado y estamos en contra de todas estas manifestaciones que son la negación de lo más sano, de lo más puro y de lo más espiritualmente argentino que tiene nuestro pueblo. No incurrimos al hacer esta afirmación, y al dar nuestro voto en contra del proyecto, en la contradicción que se ha pretendido encontrar entre las palabras de los señores senadores de la Rúa y Perette y el voto también contrario a la reforma del Código Penal.

No hay tal contradicción, porque no decimos que no se combata la violencia. Lo que sostenemos es que se la combata con los medios adecuados e idóneos, que no puedan convertirse mañana en una herramienta en contra de los intereses del pueblo que venimos aquí a representar, y que puede dar un sustento legal a algún gobierno que pueda surgir también en alguna noche de la historia para atacar a ese pueblo por la espalda, tomando como pretexto las mismas normas que nosotros le estamos brindando en ban-

deja en este momento, en vez de cortar la violencia en las propias raíces que la originan.

No tenemos ningún compromiso sino con el país y con el pueblo, y quizás, o sin quizás, con su destino histórico, al que nosotros hemos contribuido y estamos contribuyendo a realizar.

Por otra parte, nunca hubo necesidad, después de un gobierno radical, de derogar la legislación represiva, sencillamente porque ésta no existió. Son exactas las palabras del señor senador Perette de que entre 1963 y 1966 se derogó la legislación represiva que se encontraba, por iniciativa del Poder Ejecutivo y por obra del Parlamento. No hubo —y esto es lo más importante— un solo preso político, un solo preso gremial, o un solo preso social durante la vigencia del gobierno del radicalismo. En cuanto al sentido del artículo 213 bis del Código Penal, ya se ha referido brillantemente a él mi compañero de bancada el señor diputado Day.

Por eso somos coherentes ahora al oponernos a la reforma del Código Penal. Pensamos que es volver a una legislación represiva que todos estuvimos de acuerdo en derogar, no sólo por su origen ni porque fuera el producto de un gobierno de facto, sino porque era mala en sí misma, porque de lo contrario, si hubiera sido exclusivamente porque estaba originada en un gobierno que no era de jure hubiéramos tenido que derogar muchas otras normas legislativas que, sin embargo, continúan en vigencia. E inclusive hemos escuchado alguna palabra justificativa del mantenimiento de las normas, de boca de algunos diputados de la mayoría, que afirmaron que se debía aceptar lo que era bueno. A contrario sensu, podemos señalar que no se aceptaron las normas represivas porque eran malas y no por su origen. Por consiguiente, no podemos retornar a ellas con un criterio que es más político que jurídico y que es el que está informando el proyecto que tratamos. La consecuencia de él es la de que se restablecen delitos y penas con la misma concepción y casi con las mismas palabras de la legislación penal represiva —tan atacada— del gobierno militar.

Se viene así por una vía que no es tan indirecta a justificar lo injustificable: una acción que se reprochaba, una manera de actuar que nosotros hemos condenado. Y esto es peligroso, no solamente porque puede resultar un justificativo ante la historia de algo que sabemos que realmente es injustificable, sino porque también puede sentar un antecedente para otras posibles aventuras que quiera reeditar una pretendida revolución que tampoco tuvo la pretendida condición de argentina.

Pero se va mucho más allá aún, ya que sin siquiera tener en cuenta la necesaria correlación con la parte general del Código Penal, se crean nuevas figuras de neto sentido político.

Y aquí tenemos que señalar también que la Comisión de Legislación Penal no recibió a los

funcionarios que quería recibir sino a asesores técnicos exclusivamente, que por propia definición, de lo único que pudieron hablar era del aspecto técnico del proyecto. Pero no contestaron observaciones sobre el sentido político que informa el proyecto. Tampoco pudieron explicar las razones que lo fundamentan. No explicaron cuál era la causa de la urgencia. No dieron ninguna de las razones que hubieran podido brindarnos precisamente los señores ministros, de haber éstos concurrido al seno de la comisión a hablar con todos sus integrantes y no únicamente con los diputados de la mayoría. A corregir esa falencia tendía precisamente el pedido de que se invitara a los señores ministros a concurrir a este recinto, no con un sentido de interpelación, sino para saber cuáles eran sus razones. Quizás del diálogo hubiéramos podido aclarar nosotros los motivos. De allí que no nos haya satisfecho en absoluto que a la comisión concurrieran asesores a exponer exclusivamente la mecánica jurídica del proyecto, lo que no se justificaba mayormente, dada la integración de la comisión, presidida por un jurista de nota, profesor de derecho penal, como tantas veces lo ha recalcado, el señor diputado Porto.

También con un criterio político —que es el sustento de toda la filosofía del proyecto— se aumenta la escala de penas en los topes mínimo y máximo, olvidando no sólo las enseñanzas de los autores de derecho sino la experiencia legislativa de los países modernos, que entienden que el problema no radica en la mayor o menor gravedad de las penas. Este tipo de medidas es absolutamente inoperante.

Dejo a cargo de otros compañeros de bancada el análisis jurídico, pero a él debo referirme también tangencialmente en este enfoque, que es de característica política. El gobierno tiene en sus manos instrumentos legales suficientes: lo que hay que hacer es usarlos como corresponde y con eficacia. Y para ello es necesario también encontrar a los asesinos no solamente a los asesinados. Es decir que ya existen en el Código Penal los mecanismos idóneos para perseguir y castigar el delito. Lo que es preciso es contar también con los elementos y medios idóneos para dar con los delincuentes.

Por medio de este proyecto se posibilita el discrecionalismo, que no puede tener cabida en el derecho penal. Tal el caso de las armas de guerra, que dependen exclusivamente de la calificación del Poder Ejecutivo. Aquí quiero destacar que se ha señalado que, en el año 1960, «durante la vigencia del gobierno radical» se dictó la ley referente a las armas de guerra. Al respecto quiero aclarar que en ese año no estaba el radicalismo en el gobierno, de manera que doy traslado de esta imputación a los señores diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo, para que la contesten.

... figuras sujetas a juicios sub-
... que hacen que la

potestad de los jueces —sin límites normativos y con un campo sin fronteras— pueda anular toda garantía e inclusive todo derecho.

Hay un artículo, el 149 ter, que señala en su parte *in fine* la circunstancia de que «las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país...», lo que está denotando en su propia redacción la influencia de algunos señores vinculados a empresas multinacionales que temen que la actitud de un pueblo viril, de un pueblo de pie defendiendo su soberanía, pueda querer que no estén mancillando su territorio los representantes de ninguna clase de imperialismos.

Muchos actos de violencia desaparecerán cuando desaparezcan sus causas, que eso es lo más importante. No se ha solucionado todo con el advenimiento de un nuevo gobierno, así sea un gobierno popular respaldado por una indiscutible mayoría. Hay problemas sociales; hay problemas gremiales; hay problemas económicos, y hay quienes —ya lo ha dicho el mismo general Perón— dentro del propio movimiento justicialista y dentro del propio gobierno procuran su fracaso, con intenciones que no son siempre confesables.

Los ejemplos están a la vista en el campo gremial, en el campo económico y en el educacional, y allí se generan también formas de violencia de arriba que pueden traer la respuesta de la violencia de abajo y que hay que extirpar desde sus principios. Hay que hacer que nunca más vuelva a ocurrir que cinco integrantes de la Federación de Cooperativas Agrarias, en la provincia de Córdoba, sean confundidos con delincuentes y atacados a mansalva. Hay que hacer que no se vaya creando así un clima que posibilite también la negación de un federalismo que los cordobeses estamos dispuestos a defender a toda costa. Y es necesario también que no se repita el hecho de que nueve trabajadores de un periódico, nueve trabajadores de la revista peronista «El Descamisado», hayan sido detenidos por la policía, sin las garantías necesarias a la libertad de trabajo que asiste a todos los hombres argentinos.

Señor presidente: se carga todo el platillo en la izquierda y en la ultraizquierda; pero es necesario pensar que hay una derecha peligrosa y una ultraderecha más peligrosa todavía. Esta ultraderecha es la que está trabajando precisamente más que esa ultraizquierda de que tanto se habla, en contra de un gobierno que tiene un respaldo popular. Y así se propugnan medidas irritantes; se arrasan y secuestran libros; se va en contra de la cultura; se procura que se dicten leyes que desconocen las coincidencias programáticas; se trata de hacer retroceder el reloj de la historia y se procura, no tan paradójicamente, por medio de la violencia, obtener leyes que tengan el pretexto de reprimir la violencia.

Ayer fue el ataque contra Solari Yrigoyen; hoy ha sido el ataque, que todos condenamos,

contra el Ejército en Azul. Siempre es el pueblo que no pueden atajar, la patria que no pueden inmovilizar, la historia que no pueden detener. No nos prestemos a su juego que es un peligro a que nos exponemos: no solamente nosotros, sino al que exponemos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que tendrán derecho a reclamarlos y hacernos responsables si su país no es el país que merecen y al que pueden aspirar. Y no nos prestemos al juego de un golpismo trasnochado, que puede encontrar un pretexto para su acción y aplicar después de la noche negra de su actuar estas mismas normas que nosotros estamos sancionando, en contra del pueblo, diciendo que son leyes aprobadas por los representantes de ese mismo pueblo.

Señor presidente: se ha dicho con argumentos jurídicos brillantes —y no es el caso de repetirlos— que las reformas que se proponen implican notoriamente un retroceso de la política penal concretada a través de las leyes 20.508, 20.509 y 20.510. Recuerdo con emoción argentina que cuando se derogó la legislación represiva, todos —mayoría y minoría, oficialistas y opositores—, unidos en nuestro sentido de pueblo y con nuestros espíritus levantados y el corazón en alto, cantamos el Himno Nacional, recalcando la palabra «libertad».

Y recuerdo también que en una de esas oportunidades el señor diputado Mira expresó con fervor un deseo y una esperanza: que toda esa legislación represiva que se enterraba lo fuese tan hondo que nadie la pudiera desenterrar. Quisiera que así hubiere sido, para que de lo más profundo de nuestra tierra no naciese un árbol de la represión sino la flor de la paz.

A la vez desearía que ahora también pudiéramos cantar el Himno Nacional y que estuvieran aquí —sin distinción de sectores— todos aquellos diputados elegidos por el pueblo, tranquilos con su conciencia y su espíritu, para entonarlo con orgullo de pasado, con fe de presente y con esperanza de futuro. Para ello, señor presidente, el de las reformas que se proponen no es el camino deseado. El camino es, en cambio, el de la unión de los esfuerzos en la paz y la comprensión, el de hacer la auténtica revolución tantas veces prometida al pueblo y otras tantas postergada, y el de hacer en todos sus aspectos efectiva la justicia en libertad.

Y así, de ese modo y por ese medio, nos encontraremos todos, sin necesidad de legislación represiva, sin necesidad de retroceder en el camino de la historia y sin necesidad de imitar a los dictadores, pues con los dictadores se pueden hacer muchas cosas menos imitarlos, ante el común denominador que es la patria. Ese sí —en esa unión, en esa comprensión y en esa paz— será el fin de la violencia, salvo la fecunda violencia del trabajo, que transforma materiales, que abre horizontes y que rompe la tierra. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra la señorita diputada Sanguinetti.

Sra. Sanguinetti. — Señor presidente: nos encontramos hoy, los diputados de nuestro bloque y, fundamentalmente, los que pertenecemos a la juventud peronista, ante una situación que entendemos es necesario dejar debidamente aclarada, en la medida en que ciertos sectores, a los cuales no son ajenos los que contribuyen a una mala información de la opinión pública, han tratado de distorsionar nuestras actitudes, haciéndonos aparecer como borrando con el codo lo que ayer nomás escribimos con la mano.

Y esto es así, señor presidente, porque hace ocho meses esta Honorable Cámara, con el concurso de todos los sectores políticos, sancionó la derogación de una legislación represiva y la libertad de miles de compañeras y compañeros, de muchos hombres y mujeres argentinos.

No voy a entrar en el plano de la discusión legal en sí, porque entiendo que el señor miembro informante y los que forman parte de las comisiones respectivas poseen la idoneidad técnica necesaria como para llevar adelante esa discusión.

Simplemente, como miembro de la juventud peronista deseo hacer algunas consideraciones de carácter político y de carácter organizativo y metodológico sobre ese proceso que lleva a la liberación de muchos argentinos a partir del 11 de marzo próximo pasado.

Antes del advenimiento del gobierno del pueblo nosotros entendíamos que la misión fundamental de todo peronista y de todo argentino bien nacido era luchar por la liberación de la patria y por la liberación del pueblo, es decir, luchar por la reconquista de nuestra soberanía, por la independencia económica y por la plena justicia social.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sra. Sanguinetti. — Pero nuestras aspiraciones, que eran comunes a todo el pueblo argentino y por lo tanto a la juventud peronista, nos enfrentaban con intereses internos y externos, es decir, nos enfrentaban con los intereses de los imperialismos que, así como se habían dividido el mundo en Yalta, también pretendían dividirse áreas de influencia en América latina; y nos enfrentaban con los aliados internos de esos imperialismos que se oponían al proceso electoral en nuestra patria logrado mediante la lucha del pueblo. Concretamente, nos enfrentaban en lo interno a la dictadura militar y sus aláteres.

Por eso, durante toda esa época, la lucha contra los imperialismos y contra sus aliados vernáculos en ninguna forma pudo ser disociada. Por eso nuestro movimiento y nuestro frente enarboló dos consignas que resultaron ser de carácter eminentemente estratégico: «Perón al poder» y «Liberación o dependencia», emanada

esta última directamente de nuestro jefe. Con la consigna «Perón al poder», adaptándonos a las circunstancias concretas de cada momento, enarbolando firmemente las banderas de nuestra Nación, nuestro movimiento y nuestro frente, a partir de etapas sucesivas fue progresivamente conquistando el poder para el pueblo y para el general Perón, que era uno de los objetivos permanentes y estratégicos de nuestro movimiento.

Así, a través de distintas etapas de nuestra revolución y merced a una justa línea política, nuestro movimiento supo aglutinar en torno de sí a todas las fuerzas de carácter nacional capaces de enfrentarse con el enemigo común de la patria, de no dividir la fuerza del pueblo y de aceptar su suprema voluntad.

Es por eso que como miembros de la juventud peronista y de nuestro movimiento peronista, de ninguna manera vamos a aceptar que la gran victoria alcanzada por el pueblo argentino y, en especial, la derogación de la legislación represiva y la libertad de tantos compañeros y compañeras argentinos sea usada como reivindicación de determinado sector, porque ello es patrimonio de todo el pueblo argentino.

El triunfo del 11 de marzo, la derogación de la legislación represiva y la puesta en libertad de tantos compañeros tiene un solo protagonista, el pueblo argentino, y tiene una sola base fundamental, que es la superioridad de nuestro pueblo, superioridad que es absoluta desde el punto de vista moral, ético y político porque nunca el pueblo defeccionó de su causa, así como también desde el punto de vista de la fuerza considerada en sí misma.

Y ese mismo pueblo como superior que es, sin ningún tipo de exceso en la victoria, supo acordarse de todos aquellos hombres y mujeres que habían luchado contra los enemigos comunes de la patria. Nuestro pueblo fue el que determinó que nosotros, en esa jornada memorable, derogáramos la legislación represiva y diéramos la libertad a quienes habían luchado por la libertad del pueblo. Sabemos que esa legislación represiva sirvió ayer para perseguir a muchos de nuestros compañeros y a las organizaciones del pueblo. Lo sabemos porque hubo hombres y mujeres no sólo de nuestro partido, sino también de las bancadas opositoras, que fueron perseguidos por el solo hecho de llevar la divisa de su partido. Esto es así, y si esto es así nuestro pueblo supo comprender esa situación y supo ponerlos en libertad tal cual lo habían decretado las pautas programáticas de casi todos los partidos políticos en el proceso electoral.

Pero hoy la situación es diferente. Hoy el presidente de los argentinos posee el poder y ese poder emana directamente del pueblo, es decir que es legítimo y la voluntad del pueblo, expresada el 23 de septiembre pasado, no deja lugar a dudas. Sin embargo, pareciera que para algunos sectores las cosas no han cambiado. Se critica esta ley calificándola de idéntica a la que

antes utilizó la dictadura militar. Eso es pensar en las leyes antes que en los hombres, es pensar que las leyes tienen vida propia. Pero las leyes no son buenas o malas en sí mismas; son instrumentos, medios puestos al servicio de un determinado fin. Es decir, las leyes de la dictadura militar son condenables porque sirvieron para reprimir a nuestro pueblo, y esta ley es para nosotros aceptable y es necesaria porque sirve para combatir a aquellos que pretenden implantar en nuestra patria el caos y a aquellos que enfrentan los intereses del pueblo. (Aplausos.)

Toda revolución necesita del poder para derrotar a sus enemigos, y oponerse a una legislación que proteja a esa revolución es oponerse a la revolución, y más aún, es oponerse al pueblo que eligió esa revolución y, por encima de ello, es oponerse al jefe de esa revolución. Y quienes sabemos que el general Perón es el único jefe de esta revolución, sabemos que oponerse a esta ley es atarlo de manos, como él mismo nos lo ha dicho, y es quitarle al gobierno el instrumento que necesita para gobernar y para eliminar a los enemigos de esta revolución.

Por último, señor presidente, y como reflexión final, quisiera decir que pese al uso abusivo de la dialéctica que se hace para confundir a nuestro pueblo acerca de cuál es el carácter de la violencia revolucionaria, que en manos del pueblo no es violencia sino que es justicia, y cuál es el carácter de la violencia contrarrevolucionaria, que sí es violencia y es condenable porque emana de una élite y no del pueblo, el alto nivel de la conciencia política de nuestro pueblo jamás le permitirá confundirse, porque el pueblo quiere esta ley porque el general Perón la ha pedido y sabe que el que no junta con el general Perón es porque está desparramando. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados felicitan a la oradora.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Arbo.

Sr. Arbo. — Señor presidente: hablo en nombre del Pacto Autonomista Liberal y de los diputados del acuerdo parlamentario que nuclea a representantes de provincias para coordinar su acción en este recinto. Complementando, entonces, lo expresado ya por el señor diputado Monsalve, deseo fundar y explicar nuestro voto contrario al proyecto en debate.

Nuestra posición opositora, razonada y constructiva, y a la vez patriótica, no es caprichosa. Es la misma actitud que nos impulsó muchas veces a apoyar iniciativas del gobierno, pero no a ciegas o incondicionalmente. Mantenemos una posición crítica, pensada e independiente, aun a pesar de las amenazas que de ambos extremos se nos ha hecho llegar, porque creemos que así cumplimos nuestro deber de legisladores tratando de evitar errores como el de sancionar este proyecto, que estimamos peligroso y nocivo.

Debo significar que nuestra opinión no es superficial ni improvisada. Hemos estudiado a fondo el problema. Lo hemos consultado con colegas y con técnicos. Incluso hemos consultado con las autoridades de nuestros partidos, cuyo pronunciamiento da mayor respaldo y autenticidad a la actuación de los diputados de nuestro bloque.

Nuestro objetivo es el mismo que hemos perseguido desde mayo de 1973 en esta Cámara: afianzar el prestigio del gobierno elegido por el pueblo, jerarquizar su imagen, contribuir a que el pueblo recupere su fe en las instituciones y adquiera tranquilidad y seguridad como respaldo de su trabajo en pro del país y de su mejor desarrollo material y espiritual.

El proyecto, según el señor diputado Porto, consiste en una simple modificación de las escalas penales para algunos delitos. Solamente se crea —decía— una figura extraña a la ley vigente. Bajo ese inocente enfoque se esconde, si bien miramos, un viraje en la conducción política por parte del Poder Ejecutivo; viraje de grave trascendencia y cuyas consecuencias son realmente difíciles de medir.

La iniciativa se proyecta ante la expectativa pública a raíz de los recientes y lamentables hechos de Azul, a través de los cuales se trata de configurar una situación premiosa que exigiría la sanción del proyecto que estamos considerando.

Antes de entrar al examen del proyecto en cuestión, debemos recalcar, y en esto insistimos, que somos enemigos de la violencia en todas sus formas, venga de donde venga y en cualquier ocasión. La violencia es siempre negativa y nociva; sea en favor o en contra de nuestros intereses. La violencia es la antítesis del orden, de la convivencia pacífica, de la civilización.

No hace mucho tiempo, por otra parte, hemos escuchado de una fuente muy calificada que la violencia sólo engendra violencia. No se puede razonar a tiros, se decía. Donde la lucha empieza termina la razón. De tal manera, la violencia debe ser erradicada del cuerpo social. No podemos hablar, entonces, de violencia legítima o de violencia ilegítima, como se ha pretendido justificar por parte del señor miembro informante de la mayoría. Esto es lo que nos lleva a condenar los hechos violentos de ahora, de la misma manera que condenamos los de antes.

Es por ello que en el mes de mayo de 1973, como expresión de nuestro sentir, como medio de colaboración útil con el gobierno, como prenda de paz y de concordia, votamos las leyes 20.509 y 20.510, la primera para derogar la llamada legislación represiva y la segunda con el fin de suprimir los organismos judiciales encargados de aplicarla.

Estamos así en contra de la violencia, tanto de la de arriba como de la de abajo, venga de

donde viniere, porque sólo engendra rencores, revanchas y luchas, provocando la anarquía y el caos.

La escalada de violencia que el país soporta requiere una especial y detenida consideración. Pero resulta que contra ella el Poder Ejecutivo encuentra un solo remedio a través de este proyecto, aduciendo, para exigir su sanción, que sin esta reforma el gobierno se encuentra inermemente contra la subversión guerrillera y la delincuencia organizada. Y nos preguntamos: ¿ataca este proyecto las causas de la escalada violenta? ¿No favorece acaso el caos, la anarquía legislativa? ¿Es eficaz como remedio la agravación de penas? ¿Es oportuna, necesaria o conveniente la reforma?

En lo que hace a las causas, es evidente que ni siquiera se han tenido en cuenta, según resulta del proyecto e informe del Poder Ejecutivo. No se consideran sino los efectos, los hechos producidos; no la enfermedad, sino los síntomas. Sin ánimo de entrar en debate sobre este tema, las causas radican en la tolerancia, el estímulo y hasta la apología de la violencia como supuesto medio o instrumento normal en la lucha política. Son también causas la crisis de autoridad y jerarquía que nos aqueja y se agrava cada día más; la anarquía educacional, la inseguridad política; la crisis económica; el fracaso incluso de una generación de padres y maestros absorbidos y agotados en una lucha estéril, que sólo ha hecho perder en gran medida al país la fe en su destino de grandeza.

Nada de eso se ve en el proyecto, y por supuesto, todo eso no puede plasmarse en una sola ley. Pero sí es el terreno en que el gobierno debe programar su acción y plasmar sus objetivos.

La reforma, tal cual resulta del proyecto, implica institucionalizar la anarquía legislativa, que se manifiesta en marchas y contramarchas, al compás de hechos que ayer no más eran descartados por la autoridad que afirmaba la efectividad del proceso de normalización institucional y social.

En este aspecto, no pretendemos eludir nuestra responsabilidad por la superficialidad con que, en su momento, apoyamos la sanción de la ley 20.509. En tal sentido, Sebastián Soler, en meduloso artículo que tengo sobre mi banca, aparecido en «La Nación» del 15 de agosto de 1973, enjuició certeramente la ley señalando sus fallencias.

Como resultado de esa improvisación —señala Soler— numerosas figuras delictivas quedaron excluidas y, en cambio; otras —suprimidas con anterioridad— quedaron rehabilitadas al suprimirse la ley 17.567.

Menos mal que, por lo menos, se salvaron algunas hipótesis delictuales a través del artículo 4º de la ley 20.509, lo cual evidencia, como señaló el señor diputado Musacchio, que el propósito de la reforma de mayo de 1973 no fue una

exquisitez jurídica sino la eliminación de una legislación que se estimó excesiva y hasta vergonzosa en algunos aspectos.

Cabe recordar también que por la misma ley 20.509 se auspicia la creación de una comisión encargada de proyectar el nuevo Código Penal. La comisión está en funciones y su trabajo adelantado. Me pregunto: ¿con qué ánimo podrá seguir trabajando? ¿Con qué criterio podrá de aquí en más encarar los arduos problemas de política criminal, de penología, de rehabilitación social, etcétera? Del mismo modo, ¿cómo se explica un proyecto como éste, respecto del cual no se consulta a la comisión especial?

Sancionar así este proyecto, sin fundamentos fácticos, jurídicos, políticos o sociales suficientes, equivaldría a incurrir en una nueva y dolorosa improvisación en desmedro del Congreso y del propio Poder Ejecutivo.

En cuanto al aumento de las penas, único y universal medio que se exhibe contra el delito, estimamos que no constituye el más adecuado en la situación.

Señaló en el Senado el doctor de la Rúa que la pena no es el único remedio ni el más eficaz para evitar el delito. La experiencia y las estadísticas evidencian que el mero aumento de la pena no tiene ningún efecto en la producción de los delitos. El remedio contra el delito es el objeto propio de la política criminal que articulará medios represivos, educativos, de readaptación social, económicos, etcétera.

La pena no es un remedio sino un castigo. Su efecto no es meramente intimidatorio y debe armonizarse con los demás medios y elementos mencionados.

En nuestro caso particular, la agravación de las penas solamente tendrá un efecto práctico: imposibilitar la excarcelación, configurando con ello otra contradicción con la política anterior del Poder Ejecutivo y del Congreso.

Eso sin dejar de pensar que este aparato represivo tan riguroso, que se complementaría, al parecer, con la reforma de la ley 48, pueda servir, en manos propicias, para la persecución sistemática y para implantar un régimen dictatorial, consecuencia que quiero pensar no ha sido prevista por los autores del proyecto.

En cuanto a la necesidad y urgencia del proyecto, no creo que estén justificados, máxime cuando estamos aún bajo la impresión de los luctuosos acontecimientos de Azul.

Hay en la requisitoria oficial una contradicción insalvable ya aludida por el señor diputado Monsalve. Pero también hay una evidente falla en la apreciación de los medios de que dispone el Estado. El gobierno tiene medios suficientes para combatir y reprimir la subversión guerrillera y la delincuencia organizada. Hay todo un aparato legal y organizativo con los medios y competencia adecuados. Cabe citar, por ejemplo, la ley 16.970, sobre planeamiento y acción para la seguridad de la Nación; la ley 19.081,

que incluye normas complementarias de la anterior; la ley 19.793, referente a propaganda subversiva; la ley 20.318, sobre conmoción interna, especialmente esta última.

A través de todo ello el Poder Ejecutivo puede utilizar todos los medios del Estado, incluidas las fuerzas armadas, hasta aplicar, si conviene, las leyes que regulan el estado de sitio y el de guerra interno.

Aparte de ello, el Código Penal —tal cual quedó después de la ley 20.509— contiene numerosas disposiciones que incriminan situaciones y hechos hoy mencionados en el proyecto; entre ellos, los artículos 80, 140 a 142, 145, 149 bis, 186, 187, 189 a 195, etcétera. Además de todo ello, está la legislación anticomunista, no derogada en buena parte y que está dirigida a situaciones parecidas a las que regula el proyecto que tenemos bajo examen. Solamente faltarian algunas figuras delictivas suprimidas al derogarse la ley 17.567, que Soler señala y detalla en su citado artículo del 15 de agosto de 1973.

En suma, se puede afirmar que no se ve la razón de esta reedición de figuras y criterios que el Congreso, a pedido del Poder Ejecutivo, suprimió en mayo del año pasado. Quiérase o no, apunta la duda sobre el origen y la finalidad de esta reedición, con penas agravadas, de figuras que merecieron ácida repulsa aun por parte del miembro informante de la mayoría. No se trata de una inocente modificación de penas: hay algo más trascendente, más serio y que atañe a la política criminal. Está en juego no solamente el encasillamiento de hechos de determinada entidad sino también el prestigio del gobierno, la seriedad de su gestión, porque se afectan la fe y la esperanza que el pueblo ha depositado en la acción pacificadora y constructiva del gobierno.

Por todo eso es que nuestro voto será contrario a este proyecto que significa un mentís y una marcha atrás en el desenvolvimiento del país. Si seguimos esta línea, la ley, que en la democracia es norma de convivencia, se transformará en mero instrumento de gobierno, perdiendo seriedad, prestigio y, lo que es más fundamental, perdiendo estabilidad, que es fundamento de paz y seguridad social, como lo afirmara Napoleón al poner en vigor el código civil de 1804.

Este es, en suma, el fundamento de nuestro voto negativo, que lo expresamos a conciencia como el mejor modo de evitar errores y de colaborar con la rehabilitación institucional del país. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Amaya.

Sr. Amaya. — El 25 de mayo asistimos esperanzados e incluso con regocijo al advenimiento del nuevo gobierno, que no era de nuestro par-

tido pero que era la posibilidad del acceso de las clases populares para concretar un proceso de liberación.

Era la derrota de un régimen represivo y de entrega que al grito de «Se va . . . , se va . . . , se va y nunca volverá» cerraba un ciclo, dejando paso al pueblo en un nuevo ámbito, en una nueva dimensión que avizorábamos y esperábamos habría de ser provechosa para el futuro del país.

Dimos así los primeros pasos: derogamos las leyes represivas, aprobamos la ley de amnistía. El pueblo comenzó a ser protagonista del proceso de liberación con esa nueva dimensión. Sabíamos de los escollos no ignorábamos que en el nuevo medio existiría convulsión, que la marcha sufriría los avatares de un camino no andado y que nuevas formas del antiguo régimen volverían a la carga.

Pero estaba el pueblo y el clima que las libertades públicas conformaban, y entonces sabíamos que mientras viviéramos ese clima el proceso de liberación continuaría adelante, proyectado por la concientización popular. El aparente desorden era el precio para el diálogo fecundo del pueblo en la calle, para conformar, entonces sí, un nuevo orden —no impuesto ni opresor—, consecuencia de una nueva relación social que permitiera avizorar, en un futuro no lejano, nuevas formas en nuestra sociedad, nuevas estructuras y, sobre todo, la cesación de un régimen explotador del hombre.

Así lo esperábamos, pero lamentablemente nuestras esperanzas en alguna medida se frustraron. El pueblo abandonó la calle —debió abandonar la calle—; no era el nuevo orden sino el mismo orden. El «Se van . . . , se van . . . , se van y nunca volverán» se perdió en el silencio de la calle vacía. Y volvieron, pero en ese mismo silencio no tuvieron eco nuestros reclamos por la concreción del proyecto de liberación en el que todos estábamos empeñados. Y este Congreso, que había sancionado la amnistía, la derogación de las leyes represivas, nuevas formas de excarcelación, y aun una comisión para reordenar la legislación penal, consideró un paquete de medidas económicas que mereció nuestros reparos, pues no modifica de ningún modo nuestra estructura dependiente; concretó el pacto social y sancionó las leyes de asociaciones profesionales, de arbitraje obligatorio, de prescindibilidad, y ahora quiere sancionar una reforma al Código Penal que prácticamente restablece —si no va más allá— el régimen punitivo y opresor que había instaurado la dictadura militar.

Este es el aspecto que me importa destacar: cómo se quebró un proceso que lo esperábamos rico y generador de una nueva proyección para nuestro pueblo.

No vamos a hacer el análisis jurídico específico de cada una de las reformas proyectadas —mis compañeros de bancada ya lo han hecho sobradamente—, pero vamos a destacar este aspecto, esta clara connotación política que tiene

el proyecto, no por el solo hecho de ser reiteración —prácticamente— de la legislación represiva de la dictadura sino porque tras la reforma se oculta la consolidación definitiva de los mismos grupos que antes la impusieron y la ejecutaron y que hoy, embozadamente, buscan precisamente mantener su situación de privilegio.

Me permito reflexionar respecto de lo señalado por la señora diputada Sanguinetti. Creo, sí, que las leyes son instrumentos, pero también que pueden ser buenas o malas, que sean buenas o malas depende de la finalidad y los objetivos que pretendan cumplir. La reforma que estamos tratando no pretende defender al Estado sino que tiende a defender un estado de cosas.

No puede pretender eliminar formas de delincuencia común —sobradamente sabemos que el agravamiento de penas, por sí mismo, no lo logra—, porque no es idónea para ello, pero sí pretende modificar las relaciones de poder, en favor de los grupos que están contra el proceso de liberación.

Adviértase que las reformas no pretenden ser remedio que elimine ciertos actos considerados como disvalores, sino que lo que más le importa es la aplicación de sanciones; no es preventiva sino represiva, habiendo sido destacado este aspecto por el señor diputado Day cuando señaló que no se fija plazo alguno para su vigencia; no lo hace porque le importa más que evitar el delito, el reprimirlo. Aun cuando, por el contrario, la legislación penal debe tender a evitar los elementos que pueden ser generadores de causas de delito.

Es indudable que el Congreso está facultado, es idóneo, es competente para dictar la legislación penal, pero no sólo es necesario, para dictar esa legislación, que emane del organismo competente, sino que además este organismo debe concretar la ley como resultante de una necesidad social que venga a ser cubierta, donde el pueblo sea su protagonista principal y a quien está dirigida para su defensa y no para su opresión.

Con esta reforma no sólo coartamos un amplio margen de libertades públicas. Nosotros esperamos, y somos real y efectivamente defensores del gobierno, en cuanto éste lleve a cabo un proceso de liberación y continúe siendo un gobierno popular. Pero con esta iniciativa se ve coartado el proceso de liberación, impidiéndose el ejercicio real y efectivo de una democracia capaz de formar un nuevo modelo de país al que aspiran los argentinos para su realización. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.

Sr. Acevedo. — Señor presidente: no es casual que el proyecto ahora en discusión en esta Honorable Cámara haya dado origen a un encumbrado debate donde se han examinado no sola-

mente los aspectos técnicos de la iniciativa, sino —y quizá sea esto lo más importante— las proyecciones políticas que encierra.

Mucho se ha dicho, y muy bien, tanto en uno como en otro tenra. Pero nosotros, los conservadores de Buenos Aires, nos sentimos aún obligados a insistir en algunos aspectos particularizados del proyecto.

Vaya esta primera afirmación, aunque ya el señor diputado Falabella lo dejó bien sentado: somos enemigos declarados de la violencia; no la justificamos de ninguna manera, y mucho menos si, como ocurre actualmente en la Argentina, están dadas las condiciones apropiadas para vivir en democracia. La democracia no solamente significa adoptar un punto de vista político para la organización del Estado. Es, sobre todo y particularmente, haber escogido un modo de vida, donde la convivencia sea posible, fundada en el respeto y la consideración mutuos, que constituyan sus principios esenciales.

Si tenemos fe en la democracia estamos obligados, pues, a prestarle toda nuestra adhesión y apoyo, pero mediante aquellos instrumentos que cada día tiendan más y más a perfeccionarla, porque sólo de ese modo será posible una vida en paz y en orden, donde todos nos respetemos y donde, además, mirada desde el ángulo que a nosotros nos interesa en este instante, la delincuencia y, en particular, la ideológica, vaya cediendo ante la persuasión, porque son las ideas y la razón las que sirven, en este terreno, para disuadir del empleo de la violencia.

Por supuesto que cuando formulamos nuestra oposición al proyecto no es que querramos atar las manos del Poder Ejecutivo o del gobierno para la lucha contra la criminalidad que, ciertamente, a todos preocupa. Nosotros decimos otra cosa completamente distinta: hablamos de la insuficiencia de los instrumentos proyectados en la ley que examinamos. ¿Y por qué esa insuficiencia? Porque en la lucha contra la criminalidad no basta incrementar penas o instaurar algunas nuevas figuras delictivas. La lucha contra la criminalidad es el resultado de la articulación de una serie de medidas coherentes, producto de una política criminal bien pensada y con una finalidad perfectamente definida y orientada.

En este caso particular, por lo que sabemos, se nos remite un proyecto que se limita a restablecer algunas figuras que fueron derogadas no hace siquiera un año y, además, a castigar con mayor severidad otros delitos que ya figurar en el catálogo del Código Penal. No se nos dice de ninguna otra medida que sirva a integrar los medios que completen el arsenal de recursos a emplearse, a los fines de una adecuada lucha contra esta criminalidad, que a todos nos inquieta y angustia, como recién decía.

Librada así la lucha contra el crimen, pura y exclusivamente a la sanción de esta ley, desde ya nosotros podemos decir que, lamentablemen-

te, no sobrevendrá sino un fracaso; y nosotros seremos responsables de haber vertido una ilusión que muy pronto habrá de desvanecerse, pues no es éste el modo como se puede luchar contra la criminalidad común y tampoco contra la ideológica.

Sobre esto se pueden hacer afirmaciones que nacen, por cierto, de la evolución científica del derecho penal en el transcurso de los últimos ciento cincuenta años. Fue una ilusión de la escuela clásica creer que mediante la instauración de penas que comportaran una debida retribución a la índole y gravedad del delito se podía luchar contra la criminalidad. En su momento la escuela clásica hizo otros aportes al derecho penal, que son eternos y que me voy a preocupar por destacar en su instante. Pero la verdad es que en la lucha contra el crimen no pudo sino exhibir un lamentable fracaso. El progreso de la escuela positiva, orientada por Ferri desde Italia, hizo hincapié, entre otros factores, en ese fracaso que la escuela clásica evidenció en su lucha contra el delito. Desde ese instante se sabe que en la lucha contra la criminalidad es insuficiente actuar sólo sobre la base de querer coaccionar psíquicamente a los integrantes de la comunidad, mediante la amenaza de la pena. A partir de aquel momento el análisis y la reflexión reparan que hay una serie de causas que provocan el crimen y que la lucha debe afrontarse principalmente ahí, atacando las anomalías del delincuente en su personalidad, o atacando los subproductos culturales, que son el motivo y la causa del crimen.

No basta, entonces, si se piensa en términos de eficacia razonable, proveer un instrumento de este tipo al gobierno que tiene la responsabilidad de conducir el país. Es más: toda la moderna tendencia en materia penal está estrictamente vinculada con esa lucha contra las causas que lo provocan. Desde la escuela positiva primero y desde la política criminal después, es decir desde fines del siglo pasado y en el transcurso de este siglo en particular, está claramente demostrado que no hay otra posibilidad en la lucha contra el crimen que no esté vinculada con esto del ataque a las causas que provocan el delito.

En todo caso también es menester que se lleven a la práctica otra serie de medidas encaminadas a prevenir el delito. Ya se ha señalado aquí por conducto de otros señores diputados qué grandes son nuestras falencias en este orden, primero porque no contamos, ni hemos contado nunca, con una política criminal debidamente articulada; y en segundo término porque, progresivamente, se ha ido deteriorando todo el aparato —de por sí insuficiente— de la lucha contra el crimen; en particular de aquellos que hacen a la prevención inmediata del delito, aspecto en el que cada día es más notoria esa falencia, al punto que no es exagerado decir

que la seguridad de los ciudadanos ha quedado librada prácticamente a su sola posibilidad de defensa.

Debo decir ahora que, desde luego, el esfuerzo del señor miembro informante ha radicado sustancialmente en querer persuadir a los sectores integrantes de esta Honorable Cámara de que la pena cumple una función disuasiva. Yo no voy a entrar en el examen particularizado de todos los autores que mencionó el señor miembro informante, pero sí podría clasificarlos suficientemente como para demostrar la falsedad de su afirmación. Cuando él ha hecho esa larga enumeración ha tenido que recurrir en particular a todos aquellos penalistas que integraron preferentemente la escuela clásica, porque ellos sí estaban persuadidos de que ésa era la forma eficaz de luchar contra el crimen; pero en la medida en que ha hecho otras citas que corresponden a los integrantes de la escuela positiva, mal ha podido hacerlo, porque ellas sirven precisamente para fundar el aserto contrario. Cuando estos últimos aluden a la función de la pena desdeñan, precisamente, la función de prevención general general que le atribuyeron los clásicos para resaltar, por el contrario, la función de prevención especial.

Además es la propia escuela positiva la que se encargó de demostrar la insuficiencia de la pena como medio de lucha contra el crimen; y es justamente la escuela positiva la que articula toda esa serie de medidas, algunas de eficacia remota, los sustitutivos penales, y otros de actuación próxima, tendientes todos a evitar que se produzca el delito mediante un complejo aparato estatal articulado específicamente a servir al propósito expuesto. Producido el delito la pena se hace presente con la idea de prevención especial que recién recordaba.

Digo, pues, que la afirmación del señor miembro informante, que quiere persuadirnos de que es bastante el aumento de la penalidad para disuadir del delito, es un argumento falso. Se utilizó en su época, pero en este instante no es suficiente, ni mucho menos; en todo caso, constituye uno de los tantos factores de lucha contra el delito, y que sirve en particular para disuadir a aquellos que están más espontáneamente dispuestos a observar las leyes y a cumplir con los preceptos del ordenamiento jurídico. Pero es del caso recordar que la gran dificultad de este instante en el ámbito de la criminalidad radica en que esa lucha debe librarse en particular contra los reincidentes; ellos constituyen el gran cáncer que debe preocupar a toda sociedad, y no los delincuentes ocasionales que sólo accidentalmente, como resulta de su propia denominación, caen en el delito.

De manera que no nos puede bastar la argumentación desplegada por el señor miembro informante, porque si la instrumentación que se nos propone no viene acompañada de otra serie

de medidas, como recién lo recordaba, y si se cree que es suficiente el solo aumento de la penalidad, nosotros vamos a encontrarnos con que en el transcurso de pocos días la realidad nos va a golpear duramente para decirnos de nuestro error y de la ligereza de haber creado una ilusión gratuita en el ánimo de toda la población de que realmente estamos ahora capacitados para luchar eficazmente contra el tipo de delincuencia que nos asola. Entonces sí será inevitable decaiga aún más nuestra fe en la posibilidad de la lucha contra el crimen, aun cuando en verdad pudieran ser otras las posibilidades que realmente existan.

Digo más, señor presidente, si se trata de la delincuencia común, descartado el supuesto del delincuente ocasional, sólo la reeducación o la readaptación pueden proporcionar resultados eficaces a este tipo de preocupaciones; y si se trata de la delincuencia ideológica, menos que en ningún caso la pena tiene eficacia disuasiva, porque aquel que está motivado por ideas que muchas veces se sostienen de buena fe y que hacen a la creencia de la posibilidad de la instauración de un Estado más justo, cae en un apasionado fanatismo que está muy lejos de disuadirse por la sola amenaza de la pena. Es más, en muchísimas ocasiones ese apasionado fanatismo sirve para imaginarse a sí mismo como el héroe o el mártir del episodio que está dispuesto a protagonizar.

Desde otro punto de vista, señor presidente, y ya se ha señalado con reiteración en el transcurso de este debate que las figuras que se incorporan al Código Penal presentan una defectuosidad técnica que nos debe preocupar y que, incluso, nos debe alarmar.

Algunos de esos tipos están concebidos con una generalidad excesiva que pueden determinar, aun de buena fe, a aplicar penalidades en aquellos casos en que no nos encontremos frente a conductas verdaderamente antisociales. En el transcurso de este siglo se ha incorporado como una de las características del delito a la tipicidad, que no es sino una versión moderna de la aplicación del principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, incorporada por supuesto por la escuela clásica y que, en esencia, significa la tipicidad.

La tipicidad, señor presidente, constituye una garantía política y significa que los tipos deben estar concebidos con un rigor tal que haga a la imposibilidad, en su aplicación concreta, de extenderla más allá de aquello que la voluntad del legislador así lo cree conveniente. La tipicidad importa un criterio restrictivo de interpretación de la ley penal.

Estoy persuadido, señor presidente, que no es la voluntad de esta Honorable Cámara y que no es la voluntad del Honorable Congreso de la Nación crear ciertos tipos de delitos en donde algunos inocentes o muchos inocentes vayan a caer atrapados por la malla de una ley que no

quiso, en definitiva, aplicar sanción alguna a esas mismas personas. Es muy de lamentar este aspecto no cuidado debidamente. Además de incongruencias muy notorias que quiebran la coherencia del sistema, también se ha señalado esa excesiva latitud a la que recién me refería. Pero se minimizaría el problema si no se insistiera en los riesgos políticos que la sanción de esta ley va a traer. Desde un primer punto de vista es un riesgo político, por el que pagaremos muy alto precio, el crear esas ilusiones a las que hace un rato aludí. Va a ocurrir dentro de pocos días que el pueblo va a tener noticias si no se arbitran otros medios de que éste no ha sido el instrumento lo suficientemente idóneo y eficaz para combatir el delito, como con alguna ligereza lo cree la opinión pública.

Nosotros somos políticos y muchas veces tenemos derecho a actuar con la pasión que la política impone porque, en definitiva, nos mueven hondas preocupaciones referidas a la suerte y al porvenir de la República. Empero, en estas circunstancias estamos obligados a dejar de lado nuestras pasiones. En estas circunstancias estamos actuando como legisladores en el tema que es más caro a toda comunidad: el resguardo debido de las libertades públicas. Por eso debemos poner mucha cautela y gran prudencia en la elaboración de este tipo de leyes porque de lo contrario muy pronto nos vamos a arrepentir.

No entro en el juzgamiento de las intenciones del gobierno, pues ellas pueden ser las mejores, pero pensemos que mañana, si estos mismos instrumentos quedan en manos de quien no está bien dispuesto y tiene otro tipo de finalidades, como pudiera ser la instauración del autoritarismo o del totalitarismo, va a tener a su disposición instrumentos sancionados por un Congreso cuyos integrantes son todos partícipes de las ideas de la democracia.

Está ya dicho: nos hemos decidido a votar negativamente el proyecto porque no es un instrumento útil, ni idóneo, ni satisfactorio para cumplir la finalidad que se denuncia y porque los riesgos que su aplicación puede entrañar son de tal género que no pueden determinar vacilaciones de ninguna índole. Así lo señaló el señor diputado Falabella y también otros señores diputados.

Amén de lo expuesto, concurre a formar nuestra convicción el saber que uno de los propósitos de la sanción de esta ley que se menciona en el propio mensaje del Poder Ejecutivo, es impedir la excarcelación. No es difícil predecir que muchos ciudadanos van a sufrir la privación de su libertad por espacio de meses y años, quizás, es decir mientras se prolongue el proceso, para que finalmente una sentencia diga: libremente absuelto. Entre tanto se habrá originado un daño de por sí irreparable y además la pérdida de fe de la comunidad acerca de los instrumentos que el gobierno debe usar para lograr una conducta pacífica y armoniosa. Todo ello es más que bas-

tante para substraernos en el propósito de contribuir a la sanción de una ley de este tipo. Más aún, también aquí corresponde decir que aun cuando no se trata de juzgar intenciones del gobierno, vamos cayendo sutil y lentamente en una actitud gradualmente autoritaria, y esto no lo queremos ninguno de los señores diputados. De esto estoy absolutamente persuadido. Graves son los riesgos de esta actitud, porque el día menos pensado estaremos quizás inmersos en una inercia que nos va a ser muy difícil retrotraer, porque el autoritarismo siempre se va dando alimento a sí mismo y, lamentablemente, aquí están dadas las condiciones para que esto pueda ocurrir.

Nosotros dijimos en oportunidad de la sanción de la ley de amnistía, que nos preocupaba —de la misma manera lo manifestó el señor diputado Balestra— que cierto tipo de delitos pudiera merecer los beneficios de la amnistía. Pero también dijimos en aquella ocasión, porque se vivía un momento solemne en la vida del país, que nosotros, entre los recaudos que imponía el conocimiento científico de estos temas y el desplegar un acto de fe que tuviera aptitud creadora o capacidad de impulso en la ciudadanía del país, para facilitar una convivencia que deseábamos armónica y pacífica, dejábamos de lado los escrúpulos científicos y votábamos en favor de la ley de amnistía. Lamentablemente los hechos nos han negado la razón. Aquel acto de fe no ha tenido suficiente correspondencia.

No obstante, reafirmamos en este instante nuestra fe en la democracia. Por supuesto que en los países totalitarios la delincuencia ideológica o política casi no se conoce, porque todo el aparato represivo está montado de manera tal que este tipo de criminalidad no puede existir. No creo que la haya en la Cuba de Castro, ni en el régimen soviético, ni en la China de Mao; tampoco, por supuesto, donde ha habido o donde hay totalitarismos de derecha. No la hubo en la Italia de Mussolini ni en la Alemania de Hitler. Pero la democracia tiene también sus riesgos, que son inevitables, porque la democracia es, entre todos aquellos sistemas que tienden a posibilitar la vida política del país, el único que pretende sustentarse sobre la base de la razón, cumpliendo una tarea de docencia, iluminando el espíritu de cada uno y de todos los ciudadanos.

Por eso duele, señor presidente, que nosotros hayamos escuchado a líderes responsables —no, por supuesto, en esta Honorable Cámara— señalar la eficacia de la violencia, procurando de manera evidentiísima, en algunos casos, obtener el rédito del concurso de votos de algún sector sobre la base de afirmaciones de este tipo. Nada más destructor de una comunidad que dejar de cumplir con los sublimes deberes que impone el liderazgo. El liderazgo político importa la gravísima responsabilidad de orientar, de iluminar y de esclarecer. Y nosotros, persuadidos

de los valores perennes de la democracia, que-remos combatir a la criminalidad ideológica, si de ella se trata, mediante el convencimiento impuesto por la razón, sin perjuicio, por supuesto, de crear todos aquellos mecanismos que sean compatibles con la idea misma de la democracia y donde las garantías individuales se encuentren suficientemente resguardadas para tranquilidad de todos y cada uno de los habitantes de la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

Sr. Fernández Bedoya. — Señor presidente: voy a tratar de sobreponerme a la fatiga que nos ha creado esta larga sesión, que comenzó ayer por la noche y se prolonga hasta este instante, las 5 y 20 de la mañana.

En realidad, no va a ser una tarea fácil dada la circunstancia anotada, pero tampoco va a ser ardua en función de los múltiples y repasados argumentos que se esgrimieron por parte de los distintos sectores políticos en el transcurso de la sesión.

Nuestra bancada lamenta profundamente no poder compartir en esta ocasión un trabajo en coincidencia con el sector de la mayoría con el que en muchos aspectos venimos edificando la reconstrucción del país y elaborando las herramientas del presente para construir un porvenir que esperamos será venturoso para todos los argentinos.

Y decimos que lamentamos profundamente esa circunstancia porque no es precisamente nuestro partido el que está desertando de una responsabilidad, de lo que debería ser un trabajo meditado, sereno, concienzudo y responsable.

Advertimos de la necesidad de obrar con suma cautela, sopesando todos los factores en juego para encarar la reforma de la legislación penal. Es necesario que estudiemos este problema con seriedad, con tiempo y cuidadosamente. Es fundamental que no borremos con el codo lo que ayer escribimos con la mano.

Nosotros, que hemos sancionado la ley 20.509, que crea la comisión que estudiará las reformas del Código Penal, no podemos menospreciar el trabajo exhaustivo, ponderado, científico y rodeado de las mayores garantías de solvencia técnica para venir así, en una sesión trasnochada, a analizar en forma más que precipitada un proyecto de ley que, según todos los sectores lo han denunciado y la propia mayoría lo ha reconocido a través de su miembro informante, está plagado de deficiencias técnicas. Debemos trabajar con seriedad. El país es testigo de nuestra preocupación y de nuestras tareas, y no podemos defraudarlo.

Esta noche vamos a oponernos con nuestro voto a la sanción de estas reformas, pero queremos que quede perfectamente en claro que no venimos a constituirnos en cómplices de la violencia. El radicalismo ha sido claro y categórico al repudiar y condenar a la violencia en

todas las oportunidades en que fue preciso, y de ninguna manera va a quedar desmentida esa conducta esta noche.

Lamentamos esta forma inconsulta de trabajo y no podemos menos que destacar, por vía de una comparación, este procedimiento que utiliza hoy la Cámara con el que le cupo al gobierno radical en 1964, oportunidad en que previo a la derogación y reforma de las leyes penales tuvo el tino y el acierto de consultar a las universidades para conocer la opinión de los profesores e ilustrarse por intermedio de especialistas en la materia antes de adoptar una decisión definitiva. Con énfasis marcamos la diferencia porque no venimos a oponernos simplemente por hacerlo así, sino porque queremos contribuir positivamente a que marchemos todos por la senda del acierto.

Nuestra bancada deplora la aprobación de este proyecto que pretende suprimir o, por lo menos, disminuir el auge delictivo que está haciendo presa a nuestro país y que en los últimos meses ha cobrado un ritmo sin precedentes. Nos llama la atención el hecho de que promueva esta iniciativa un gobierno surgido de las urnas con el apoyo masivo y multitudinario de la ciudadanía y también, más allá del 11 de marzo, con el apoyo de todos los sectores políticos que quieren que este gobierno triunfe, porque no será el triunfo de una parcialidad sino el triunfo del pueblo argentino, que es lo que nos interesa en definitiva.

Tenemos puesta la mirada en lo alto y, por ello, lamentamos que el gobierno orille el problema, marginando la consulta, que podría ser ilustrativa, de la comisión que estudia la reforma del Código Penal.

Este proyecto de reformas, a la postre, no es ni más ni menos que la elevación de las penas. Como se ha dicho y reiterado aquí esta noche, ese no es el único factor, ni siquiera el más importante, que juega en la promoción de la delincuencia. Si ésta dependiese de la graduación de las penas, sería muy fácil terminar con ella, pero todos sabemos que este planteo es absurdo. La delincuencia se genera en una constelación de múltiples factores cuyos ingredientes son económicos, sociales, culturales y políticos; generalmente son una consecuencia del estallido de sentimientos reprimidos y contenidos que las más de las veces se dan cuando los pueblos se sienten defraudados, cuando los pueblos, luego de montar una esperanza y cabalgar sobre una ilusión, de pronto se estrellan contra la realidad que los llama, que los despierta y que los hace retornar de ese sueño. Y entonces se encuentran con que han sido nada más y nada menos que defraudados, y cuando la máquina empieza a montarse y les empieza a cerrar los caminos, entonces comienza esta forma del delito a tomar cuerpo.

Por eso nosotros, que hemos acompañado en la esperanza a este gobierno y que lo vamos a

acompañar en el trabajo de reencauzarse, porque nosotros no vamos a desfallecer y no nos vamos a fatigar en nuestro propósito de ayudar al gobierno para que avance, esta noche también le vamos a decir que venimos a hacer una crítica, no una crítica demoledora, pero que es necesario que la tenga en cuenta y que tome debida nota de ella, porque nosotros no venimos a perturbar los objetivos del gobierno; simplemente venimos a ayudarlo para que se apuntale.

Y decimos que el gobierno debe contribuir sobremanera porque es el protagonista principal de lo que sucede en el país. En ese sentido queremos anotar la preocupación de nuestro sector.

Se advierte un notable contrasentido en la actitud del partido gobernante, porque no se puede pedir al Congreso de la Nación la sanción de las leyes que reprimen la violencia, los secuestros, los crímenes, las extorsiones y otros delitos cuando al mismo tiempo se admite complaciente, o por lo menos con indiferencia, la existencia de las denominadas formaciones especiales, que son verdaderas facciones armadas que operan al margen de los carriles legales.

Nosotros no podemos entender esa actitud. Nadie ignora la existencia de esos aparatos que funcionan, como decimos, en la ilegalidad o contra la ley. Esos aparatos son también forma de violencia porque persiguen informar el pensamiento o eliminar la disconformidad. Perseguimos desterrar las disonancias oprimiendo las conductas. Esas formas de violencia que operan dentro del propio partido gobernante lo están mostrando en contradicción, y es necesario que se ponga coto a esa situación.

Repasando los conceptos que pretendí desarrollar esta noche, arribo a la conclusión de que nos demandaría un tiempo que en todo caso no sería útil, pues se trataría de argumentos demasiado trillados, reiteradamente usados y repetidos por los distintos sectores.

Por ello, como una exhortación más, en nombre de la bancada de la Unión Cívica Radical, y bajo la advocación de la figura de ese célebre criminalista que fue José Peco, señalamos que se debe respetar el Código Penal, no incorporando en él medidas precipitadas que puedan crear en el tiempo serios peligros para los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. Repitamos con Peco que el Código Penal es el termómetro político de la libertad, y en ese sentido merece nuestra consideración. (Aplausos.)

Sr. Ariani. — Si me permite, señor presidente...

Deseo formular algunas preguntas al señor diputado preopinante. La exposición del señor diputado no me ha resultado clara e interpreto que en cierto sentido ha formulado manifestaciones que podrían ofender al peronismo. Como viejo militante peronista —lo soy desde el año 1944— me siento sumamente afectado.

El señor diputado ha expresado que la reforma del código no es correcta. Pero yo le pregunto: ¿cree que cualquier persona decente puede sentirse dolorida por el hecho de que se dicte una ley que va a penar un acto indecente?

Si bien es cierto que en determinado momento hemos sacado los presos de las cárceles que estaban luchando al igual que ustedes para derrocar a quienes nos oprimían, luego esas personas siguieron un camino desencontrado con la realidad y con la decencia. Entonces, ¿es lógico que las dejemos continuar con esa actitud?

Sr. Presidente (Busacca). — Ruego al señor diputado se dirija a la Presidencia.

Sr. Ariani. — De acuerdo, señor presidente.

Considero que el señor diputado ha seguido en su exposición un método poco claro y difícil de entender, afirmando conceptos sin concretar nada. Lo que quiero, y me parece oportuno, es que cuando se diga algo se aclare bien lo que se desea expresar.

Sr. Presidente (Busacca). — No hay nada en discusión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Fernández Bedoya. — Pido la palabra para una aclaración, ya que se me ha formulado una pregunta.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una breve aclaración, tiene la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

Sr. Fernández Bedoya. — De ninguna forma quiero complicar la marcha del debate a esta altura de la sesión, pero no es posible que dejemos también al señor diputado preopinante con una pregunta sin contestar.

Cada uno tiene una forma de sentir y de apreciar las cosas. No puedo ocultar mi sentimiento respecto de cómo se han generado todas estas cosas. De ninguna forma he querido empañar el espíritu de conciliación que campea en estos tiempos de la política argentina. Por eso ni siquiera he hablado de las marchas y de las contramarchas, que son notorias.

Tengo entendido que mi exposición ha sido suficientemente clara. En todo caso la pregunta del señor diputado no ha resultado del todo coherente, por lo que no puede imputarme culpa alguna si en algo no le respondo.

Sr. Presidente (Busacca). — El incidente ha quedado aclarado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Romero.

Sr. Romero (C. A.). — Señor presidente: del bloque de la Unión Conservadora ya han intervenido sus restantes componentes, los señores diputados Falabella y Acevedo, por lo que mis palabras a esta altura del debate son simple-

mente para dejar constancias de mi voto en contra del proyecto. Para ello me son suficientes y bastantes los argumentos expuestos por los distinguidos colegas de bancada, que han brindado una exposición razonada a esta Honorable Cámara. Así, el diputado Acevedo trajo la nota eficaz del abono científico de sus consideraciones, pues en definitiva, tratándose de una reforma a la ley penal, estamos actuando sobre una disciplina que es científica, que como tal no puede ni debe aceptar otras fundamentaciones que no sean las proporcionadas por la propia ciencia y por los datos que le suministre el conocimiento científico que le es inherente.

Como ya lo expresara, muy abonada está la postura. Para abreviar, teniendo presente lo avanzado de la hora y dados los sólidos argumentos expuestos por nuestro bloque, expreso finalmente que adhiero en un todo a los fundamentos de nuestro voto en contra que fueran vertidos por mis compañeros de sector.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Stecco.

Sr. Stecco. — Señor presidente: la clase trabajadora, a través de sus organizaciones sindicales, se ha expedido en estos días a favor de la reforma del Código Penal. Un año atrás esto hubiera parecido increíble; pero los trabajadores del país, sus dirigentes y los diputados que los representamos entendemos que ha llegado el momento de que este gobierno tenga en su mano una ley penal que le permita terminar con los crímenes y los secuestros que nuestros propios dirigentes y trabajadores han sufrido en carne propia.

A nadie escapa que el movimiento sindical argentino ha sido en los últimos años el más perseguido, el más castigado, el más encarcelado. Y cuando hablo de los últimos años, también podría decir lo mismo con respecto a otras décadas en las que los trabajadores fueron fusilados sin ningún miramiento. Podemos así traer a este recinto recuerdos tristes y trágicos de las jornadas que vivió la clase trabajadora. En aquella época no se preguntaba qué decía el Código Penal: primero se fusilaba y después se aplicaba el código. Claro que en aquella época no gobernaba el pueblo sino la minoría, y no teníamos derecho a voz ni voto. En aquella época éramos verdaderos parias.

Han pasado muchos años y los trabajadores, gracias a la genial conducción de nuestro líder, el general Perón, podemos hoy estar presentes no sólo en los sindicatos y demás organizaciones gremiales sino también en este recinto.

Por eso, señor presidente, nosotros, los trabajadores, quienes tendríamos que sostener que el Código Penal debe ser más benigno, hoy decimos que debe ser una ley fuerte puesta al servicio del pueblo que gobierna el país. Por eso nos llama la atención el hecho de que en estos últimos tiempos ciertos sectores adversarios al

peronismo y al Frente Justicialista de Liberación se golpeen el pecho repudiando los crímenes y secuestros, afirmando que constituían una barbaridad, porque a algunos de ellos les tocaban en carne propia y habían sido ultrajados o atacados directamente.

Nosotros comprendemos que hemos llegado al gobierno para lograr una verdadera democracia, con una real libertad, pero no debe confundirse libertad con libertinaje. Hasta ahora nuestro gobierno ha permanecido calmo y tranquilo, observando los hechos acaecidos en estos últimos meses; y hemos sufrido, como lo ha sufrido todo el pueblo, los asesinatos cometidos contra muchos de nuestros dirigentes, quienes por el solo hecho de ser fieles a Perón fueron baleados sin ningún miramiento delante de su propia esposa o de sus propios hijos. Recordamos especialmente en ese sentido a nuestro compañero José Rucci, secretario general de la C.G.T. Frente a esos crímenes, los trabajadores pudimos haber salido a la calle para tomar por propia mano la justicia que en ese momento podíamos legítimamente reclamar. Sin embargo, pese a todas esas violencias, los trabajadores no guardamos odios ni rencores, como lo hemos dicho en este recinto. Comprendemos que el país se gobierna entre todos, o no se gobierna; pero tampoco puede continuar gobernándose la República con leyes que no contemplan la circunstancia que vivimos, en que se está obrando contra los intereses del pueblo.

Por este motivo, los trabajadores de todo el país y las organizaciones que los representan estamos y estaremos en favor de esta reforma del Código Penal. Nosotros nos pronunciamos en contra del crimen y de los secuestros, en contra de las bandas de asaltantes y de mercenarios extranjeros que hace pocos días han asesinado a un alto jefe de las fuerzas armadas, pero que también asesinaron a un joven soldado que cumplía el servicio militar y a una mujer indefensa.

Consideramos que debemos tener una ley fuerte para parar esos crímenes, y quienes consideraran que debe haber una ley débil o frágil que permita que los que vayan a la cárcel puedan salir quince días más tarde, debo pensar que no quieren una ley fuerte para vivir en libertad y democracia.

Es preciso que todos tengan la absoluta seguridad de que el gobierno que el país tiene es el gobierno del pueblo, y el pueblo jamás habrá de utilizar esas leyes fuertes para atentar contra los trabajadores o contra la libertad y la democracia.

Aprendamos todos a vivir en libertad y democracia, y podemos afirmar que no han aprendido a hacerlo aquellos que no quieren dejar las armas y aquellos que las usan para finalidades de provecho propio o para propósitos que son extraños al quehacer nacional; son aquellos dedicados a otras causas que de una manera u otra no responden al interés nacional.

Me llama poderosamente la atención que se nos acuse de borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Eso es una mentira. El 25 de mayo aprobamos una amplia amnistía para todos los compañeros que habían caído presos en la lucha contra la dictadura, para todos aquellos que se jugaron por la libertad y que lucharon por la reconstrucción nacional; pero debemos entender que de hoy en más ese pueblo debe dejar las armas, tomando el arado, el yunque, el torno o las aulas de la universidad, para trabajar en bien de la patria y no de un sector mezquino que está en contra de los intereses del país.

Nuestro gobierno necesita de estas leyes, y nosotros, los diputados del sector sindical, le daremos nuestro apoyo votando favorablemente tales instrumentos. No nos va a temblar la mano, porque sabemos que es la única manera de defender los intereses populares y de combatir la piratería y el pillaje que existen en el país. Como dice nuestro conductor, se acabó la hora de gritar viva Perón, ahora hay que defender a Perón. Y nosotros sabemos que con esta ley no solamente defendemos a Perón sino también al país.

Con estas emocionadas palabras y en la seguridad de que interpretamos a los trabajadores del país, a los que cayeron fusilados y a todos los que lucharon por esa noble causa antes del 25 de mayo, esta noche queremos aprobar el proyecto de ley que reforma al Código Penal. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Zamanillo.

Sr. Zamanillo. — Señor presidente: evidentemente no tengo la fuerza necesaria para oponerme a la violencia, pero sí hace a mi conciencia afirmar que la repudio enérgicamente en todas sus manifestaciones, tanto la de arriba como la de abajo. Tanto es así, que hoy lo hemos expresado en esta Cámara y, a su vez, hemos aplaudido las palabras del señor presidente de la Honorable Cámara cuando condenó la violencia desatada en Azul.

Estimamos que no somos nosotros los destinatarios de las palabras pronunciadas por el señor diputado Stecco, ya que no creemos ser los mercaderes que vienen a rasgarse las vestiduras pensando en otra cosa.

Es por eso, señor presidente, que quiero llamar a la mesura y a la reflexión a mi dilecto amigo el señor diputado Stecco, quien pienso, si no interpreto mal, que ha incurrido en un desborde pasional cuando en tono apocalíptico ha hablado de hacer justicia por sus propias manos.

En su oportunidad, nosotros también, por boca del señor presidente de este bloque, hemos repudiado enérgicamente el asesinato alevoso del secretario general de la CGT, señor José Rucci. En aquel entonces nos hubiera complacido, señor presidente, que se hubiera podido hacer justicia,

pero había que encontrar a los asesinos de Rucci; y eso es lo que le impide seguramente al señor diputado Stecco hacer la justicia que pregona.

Pero si estamos dando una ley, a la que nosotros nos oponemos porque creemos conscientemente que no es la necesaria para el país, espere el señor diputado Stecco y espere el gobierno, que al tener esa ley la justicia, estará en manos de ella su ejecución.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Fonte.

Sr. Fonte. — Señor presidente y señores diputados: he asistido a este debate con el mismo estado de ánimo y con la misma predisposición que suscitan múltiples circunstancias que rodean el tratamiento de este tema referido al proyecto de la reforma penal. Fundamentalmente estoy conmovido por las palabras del señor presidente de la Honorable Cámara cuando tributó su homenaje con motivo de la violencia desatada en Azul, ya que interpretó el sentimiento del pueblo de la República ante hechos que todos condenamos y que los hombres del radicalismo venimos condenando desde 1930, en todas las circunstancias en que los hombres y mujeres de este país fueron víctimas de cualquiera de las formas de violencia. Por eso nosotros nos unimos al duelo de las familias argentinas y compartimos profundamente ese homenaje que el presidente de esta Honorable Cámara rindió a las últimas víctimas inmoladas por el desborde pasional de una guerrilla insensible a la realidad de nuestro país.

Nosotros tenemos plena conciencia de cuál es el origen de la violencia, y por eso la hemos combatido en todos los tiempos y en todas sus formas. Nosotros conocemos la característica de esa violencia y sabemos que esos grupos delictivos tienen un móvil y un trasfondo que los ubica más allá de la delincuencia común, porque persiguen fines que van a trastocar la realidad social, política e institucional del país. Por ese motivo esas organizaciones continuaron su enfrentamiento contra el gobierno actual como lo habían hecho contra la dictadura, alentados en su lucha por los aliados que perseguían la institucionalización del país. Nosotros, ahora, no queremos que encuentren sus aliados entre quienes quieren destruir esta institucionalización.

Estamos en el convencimiento pleno y absoluto de que el país debe marchar por esta senda trazada por el pronunciamiento popular del 11 de marzo. Tenga la plena seguridad la bancada de la mayoría de que el pensamiento que exponemos no está signado por ningún cálculo electoralista, ni responde a circunstancias de expectativas actuales o posibilidades futuras.

De esta manera lamentamos —como lo ha manifestado otro de los integrantes de esta bancada— que no se hubiera invitado desde un principio a los ministros del Poder Ejecutivo nacional a participar de este debate y exponer su opinión, que no es la opinión de los asesores,

eminentemente técnica, sino que es la opinión política del Poder Ejecutivo nacional, que interesa sobremanera a la República y que nosotros queríamos fuera debatida en este recinto como un aporte esclarecedor de la realidad política institucional que vivimos y del drama que a todos nos preocupa, como consecuencia del desborde de la violencia, condenada por todos.

Por eso, porque conocemos cuál es el origen de esa violencia, como lo conocen todos los miembros de esta Cámara, y porque sabemos que esos métodos y fines no se pueden borrar ni combatir con la sola expresión de una ley punitiva, y que esta gente está más allá de la ley y no les interesa siquiera la vida, entendemos que esta medida, esta forma de legislar, esta enmienda al Código Penal no constituye el elemento idóneo necesario para acabar con ese mal, al que hay que atacar en sus causas, que reconocemos no son actuales, sino que vienen de lejos en la historia argentina y en el panorama social del país. Todos estamos perfectamente compenetrados de que a ese problema hay que buscarle una solución definitiva.

Por eso quiero referirme brevemente a estos grupos, que alguien los ha ubicado en el plano internacional, atribuyéndoles conexiones en el exterior, con su centro —como alguien ha dicho— en Francia. Si es así, o si solamente actúan en el ámbito nacional, lo que siempre buscan es sembrar el caos y procuran conseguir su objetivo de cualquier forma. Tomemos el ejemplo que se ha dado recientemente en España, donde un grupo de guerrilleros hizo volar al primer ministro, heredero del trono de Franco. Al señor diputado Acevedo, que señaló que no se daba en regímenes dictatoriales como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, yo los recuerdo a él y a esta Honorable Cámara que el pueblo se alzó en armas contra esos regímenes dictatoriales, liberándose como se liberó en la Roma de los Césares, en la Rusia de los zares, en la Francia de los Luises y en la Argentina después del 11 de marzo de 1973.

De manera que nosotros tenemos una conducta perfectamente definida en este problema, que arranca de 1930, cuando fuimos despojados ilegítimamente del poder otorgado por el pueblo y comprendimos en toda su dimensión cuál es el alcance que se le quiere dar a esa lucha contra la guerrilla y la violencia. Reiteramos permanentemente, con la convicción profunda de haber recorrido la experiencia que también el oficialismo recorrió, que no es por medio de una ley de tipo persecutorio y excesivamente represiva, que finca únicamente en la severidad de la pena la eficacia de su realización, como se ha de poner término a la violencia. Ella no nace porque las penas sean benignas, ni desaparece porque las penas sean severas. Terminará cuando el pueblo argentino entre definitivamente en su institucionalización, que se conso-

lidará cuando desaparezca la violencia social y la violencia política que frustró a la Argentina durante 40 años, enfrentándola con problemas estériles; cuando desaparezca la violencia ideológica y comprendamos todos que la convivencia en la democracia y en el pluralismo partidario es la manera de vivir en una República y de avanzar en un país.

Por eso deseo señalar que algunas de estas reformas no van a cumplir los fines para los que han sido proyectadas. No los van a cumplir no sólo por los argumentos que acabo de exponer, sino también porque considero que este proyecto tiene deficiencias técnicas y hasta aberraciones jurídicas que no pueden ser toleradas. Si el oficialismo entiende que debe votar un instrumento de esta naturaleza para combatir la violencia, yo le señalo que procede bien al hacerlo, si es ése su convencimiento, pero le advierto que este instrumento, en la forma en que está elaborado, no responde ni a la mínima concepción científica o jurídica de una legislación moderna.

Voy a señalar al respecto dos o tres hechos que lo connotan. Por el artículo 142 bis «se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años, al que substraigiere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad». Inmediatamente esa pena pasa a ser de diez a veinticinco años de prisión o reclusión si la víctima fuere un menor o si fuere —en los términos en que está concebido el texto de este artículo— una mujer, siempre que fuese nada más que para mirarla, porque si se tratara del agravante del artículo 170 y se requiriera rescate, la pena baja de cinco a quince años. Esta sola circunstancia desacredita totalmente a este instrumento. Tiene tres penas distintas para el secuestro: según se pida o no se pida algo, según no se haga nada o según se solicite rescate. Cuanto menor es el daño que se infiere, mayor es la pena con que se lo sanciona.

Quiero señalar también que esta ley, que pretende acabar con la violencia, no constituye, por la simple circunstancia de las penas que impone, el medio idóneo para lograrlo. Ya se ha señalado en esta Cámara que la ciencia penal moderna dispone de otras medidas preventivas más eficaces y más persuasivas que la pena. La pena tiene distintas finalidades según la escuela que la ha estudiado y según los objetivos que se persiguen. Vemos aquí que se pretende combatir la violencia y la delincuencia asociada. Pero yo observo a la Cámara los métodos a emplearse cuando la delincuencia común no puede ser frenada en sus mínimas expresiones. Se ha dicho, y lo reitero, que bandas de muchachones asaltan los trenes, que los trabajadores llegan a sus casas y les roban los salarios, que raterías de este tipo se producen sobre todo en los grandes centros urbanos, y que no hay

forma posible, cualquiera sea el tipo de legislación que se aplique, de proteger a la sociedad de estos delincuentes comunes.

Lo que se impone, pues, es dotar al Estado de todos los instrumentos técnicos, materiales y científicos necesarios para que tenga organismos de seguridad eficaces, para que haya prevención contra la delincuencia y para que, en definitiva, el país, avanzando en una etapa de liberación nacional, pueda crear las condiciones que erradiquen definitivamente todas las clases de violencia, desde la guerrillera hasta la que causa el hambre, la ignorancia o la enfermedad.

Deseo decir que no se trata, como se ha dicho, de tolerar la violencia, sino de impedirla. Nosotros participamos de ese criterio, pero creemos que no puede vulnerarse una estructura jurídica como la del Código Penal, que en este momento está sometido a una revisión por una comisión especial designada por el propio Poder Ejecutivo de la Nación, la que ni siquiera ha sido consultada para tener en cuenta el criterio con que esta comisión, elaborada ya la parte general, puede insertar las penas de la parte especial de acuerdo con la reforma que la mayoría pretende sancionar.

De manera que ni siquiera se ha tenido en cuenta a esa comisión que, como se dijo alguna vez en el seno de esta Honorable Cámara, porque estaba funcionando impedía tratar reformas parciales al Código Penal, como la que propició la Comisión de Legislación Penal al artículo 26 y que fue enviada a comisión por esta misma Cámara.

Nos encontramos entonces en la tesitura de que criterios dispares ante alternativas o circunstancias casi similares orientan la forma de actuar de la mayoría de la Honorable Cámara. No quiero hacer un llamado a la reflexión porque no tengo autoridad para ello, pero sí quiero que se comprenda que estamos en una tarea compartida, de la que todos somos partícipes por igual y en la que todos estamos dispuestos a deponer cualquier actitud personal para lograr el anhelado encauzamiento definitivo del país.

Por las circunstancias que he señalado deseo que esta reforma al Código Penal no sea sancionada, por lo menos en la forma que se pretende; y pido a los integrantes de la mayoría de la Cámara que esta iniciativa vuelva a comisión para una revisión adecuada, aunque más no sea de los tipos de pena.

Con estas palabras quiero dejar establecida la posición final del radicalismo frente a esta reforma en cuanto al alcance que nosotros atribuímos a nuestro voto negativo. Entendemos que no cumple ni con la finalidad que se ha impuesto ni cumplirá, en definitiva, con los objetivos que todos deseamos se pueda lograr. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Porto, en su carácter de miem-

bro informante de la mayoría, para contestar algunas observaciones formuladas en particular por distintos señores diputados.

Sr. Porto. — Señor presidente: no voy a contestar los asuntos que ya he tratado en general, ni tampoco las afirmaciones que no me parecen atendibles y de fuerza. Si voy a contestar algunos argumentos generales y voy a informar cada uno de los artículos cuestionados en particular.

Ha dicho mi distinguido amigo, el señor diputado radical Lavalle, que si Peco viviera seguramente no hubiera apoyado este proyecto. Le contesto diciendo que Peco, felizmente, nos dejó en el año 1941 un magnífico proyecto de Código Penal y que en él aumenta casi todas las penas que eleva la ley que estamos tratando. Me voy a referir a cuatro o cinco casos para no fatigar la atención de la Honorable Cámara.

El artículo 141 del actual Código Penal fija una pena de prisión de un mes a un año. En el proyecto de Peco (artículo 165) se establece una sanción de uno a tres años de reclusión o prisión. El artículo 142 del Código Penal fija una pena de prisión de uno a cuatro años y en el proyecto de Peco (artículo 166) la pena es de dos a seis años de reclusión o prisión.

Peco trata el delito de amenazas en los artículos 176 y 177 que, como señalé anteriormente, es el único que introduce el Poder Ejecutivo. También trata Peco el delito de extorsión, que en el Código Penal tiene sólo cuatro años de prisión como máximo y mi maestro le fija una pena de reclusión o prisión de diez años como máximo. También trata Peco la fabricación y tenencia de explosivos en el artículo 220 de su proyecto.

Lamento haber hecho de todo esto una película de largo metraje, pero estoy demostrando que si mi maestro viviera seguramente hubiera inculcado con más fuerza los delitos que estamos tratando. (Aplausos.)

También deseo contestarle a mi distinguido amigo el señor diputado radical Day que si bien es cierto que cuando se trató la ley 16.648, que introduce delitos ideológicos en el artículo 213 bis del código y que modificó 25 artículos del mismo código, aumentando todas las penas, se tomó en cuenta la opinión de tres insignes juristas: el doctor Ricardo C. Núñez, el profesor don Luis Jiménez de Asúa y el profesor Sebastián Soler, debo destacar que solamente el doctor Ricardo C. Núñez se expidió por que se sancionara el artículo 213 bis. Tengo sobre mi banca el libro, un registro de informes, leyes y debates —puedo leerlo si algún señor diputado me lo pide—, en el que consta que Jiménez de Asúa y Soler se opusieron terminantemente a ese artículo. No obstante, con el apoyo, incluso escrito, de dos conservadores, los diputados Belgrano Rawson y Bilbao, la bancada de la Unión Cívica Radical logró sancionar la ley 16.648, que significó la creación de tres delitos nuevos y el aumento de las penas para otros veinticinco delitos. (Aplausos.)

Quiero señalar también al señor diputado Day que no es exacto lo que ha dicho, de que este proyecto de 1964, que luego fuera la ley 16.648, no es sino la consecuencia de compromisos internacionales. En la páginas 2089 de *Anales de Legislación Argentina*, tomo XXIV —no lo leeré, pero podría hacerlo si algún señor diputado tiene interés—, el propio profesor Núñez, que es el que introdujo, por influencia de su amigo el entonces ministro del Interior, doctor Palmero, el artículo 213 bis del Código Penal, dice en el título correspondiente, repito textualmente, que «los compromisos internacionales no obligan a instituir el delito de opinión».

Quiero también señalar al señor diputado Day que los delitos correccionales no tienen ninguna pena de un mes a tres años de prisión. La clasificación tripartita francesa, que tiene en nuestra legislación un resabio en la Constitución Nacional para el caso del legislador que es sorprendido in fraganti en la comisión de un delito «que merezca pena de muerte, infamante, u otra afflictiva» (artículo 61), tiene previstas penas para las contravenciones, los delitos y los crímenes. Los crímenes son aquellos que tienen previsto más de tres años de prisión, de modo que no se trata de contravenciones.

Sr. Day. — Correccional...

Sr. Porto. — Correccional y contravencional es exactamente lo mismo, señor diputado, y le pido que no me interrumpa. (*Aplausos.*)

Quiero decirle también al señor diputado Day que nunca he leído una palabra en esta Cámara, pero por la responsabilidad que tenía en este debate trascendental me vi precisado a leer textualmente una gran cantidad de opiniones de autores y citas de diversos códigos penales. Pero de ninguna manera puedo aceptarle la acusación de que he leído íntegramente mi discurso.

Sr. Day. — Yo no lo he acusado.

Sr. Suárez (L. M.). — Por otra parte, es un hecho real.

Sr. Porto. — Estoy convencido de que esta ley es necesaria porque mi jefe la pide, y él tiene la responsabilidad de conducir la República. (*Aplausos.*)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Porto. — Soler dijo que el Código Penal sancionado en 1922 era bueno, pero cuando en 1967 la dictadura le dio la oportunidad de reformarlo, lo hizo respecto de 124 artículos. Vale decir que no lo habrá considerado entonces tan bueno.

Sr. Day. — Pero eso es cosa de la dictadura. ¿A quién se está refiriendo?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Porto se refería al profesor Soler y no al profesor Day. (*Risas.*)

Sr. Day. — Yo no soy profesor.

Sr. Porto. — Yo no dije en ningún momento que la pena sea una panacea o la única forma de contrarrestar el delito. He dicho, creo que dos veces, y ahí está la versión taquigráfica como prueba, que el delito es producto de factores antropológicos, físicos y sociales y que, de estos últimos, el principal elemento era la pena.

Ha dicho el señor diputado Day que el Código Penal sancionado por la ley 11.179 dio un plazo, que creo fue de seis meses, para entrar en vigencia, a fin de que todos lo conocieran, pero quiero recordarle que cuando la Unión Cívica Radical sancionó la recordada ley que reformó veinticinco artículos del Código Penal, la ley 16.648 del año 64, la puso en vigencia en el mismo plazo que indica el artículo 2º del Código Civil, en el cual también será puesta en vigencia la ley que estamos tratando. (*Aplausos.*)

Quiero decirle también al señor diputado Day que el artículo 213 bis de este proyecto no es sino el inciso 1º del propio artículo 213 bis que fuera introducido por la bancada de la Unión Cívica Radical, y que el inciso 3º es el que pasa a ser hoy el artículo 212 del Código Penal.

Quiero reiterar además lo que ya he dicho antes, por si no me escucharon en la anterior oportunidad: este proyecto del Poder Ejecutivo está suprimiendo dos de los cuatro delitos que existen en el artículo 213 bis por obra de la Unión Cívica Radical.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Raúl Alberto Lastiri.

Sr. Presidente (Lastiri). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto, quien está por terminar su exposición.

Sr. Porto. — Señor presidente: estoy solamente por terminar con el último argumento del señor diputado Day, porque luego voy a contestar a todos los demás señores diputados.

El señor diputado Day ha dicho que en los artículos 292 y 293 del Código Penal, que tratan sobre la falsedad material y la falsedad ideológica de documentos, se ha introducido un agregado que pena con tres a ocho años de prisión, el cual no tiene ningún sustento; y yo le digo que sí, que tiene el mismo sustento del artículo 299 del Código Penal para los casos de quien tiene instrumentos conocidamente destinados a la falsificación de moneda, documentos, etcétera, de que trata el capítulo XII del libro II del código, donde están todos estos artículos 292, 293 y 299. Yo le digo que quien tiene documentos falsificados de identidad personal, de identidad de vehículos o para circular, tiene instrumentos que son preparatorios de delitos de mayor envergadura y eso constituye un gran

peligro social que tiene que ser condignamente castigado con pena que no puede ser de ninguna manera excarcelable. (Aplausos.)

Y le contesto ahora al señor diputado Musacchio, por quien tengo la mayor de las estimas. (Risas.) El ha dicho lo que hemos dicho nosotros: que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Y ha enumerado una serie de falencias que están, según él, todavía vigentes en la Argentina. Le digo a esta Honorable Cámara que desde que nosotros nos hicimos cargo del gobierno, mucho es lo que ha mejorado la justicia social y las condiciones de vida de nuestra patria. Se ha dictado una ley de alquileres que los ha congelado al último día del año pasado; se han aumentado las jubilaciones; se han fijado los precios máximos de los artículos de consumo indispensable; se ha dominado una inflación que había llegado hasta el 70 por ciento anual. Tenemos hoy en las cajas del Banco Central 1.400 millones de dólares, mientras que antes teníamos nada más que 300 millones. También quiero significar que hemos reanudado relaciones con Cuba, hemos recibido la visita del presidente de Panamá y la del tristemente asesinado presidente de Chile, del que siempre me senti amigo y a cuya asunción del mando fui invitado.

Sr. Day. — Pero le han mandado armas...

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Lastiri). — Señores diputados: hemos llevado hasta ahora un debate con altura, responsabilidad y jerarquía, por lo que les encarezco lo terminemos en igual forma.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto, a quien la Presidencia solicita termine su exposición a la mayor brevedad.

Sr. Porto. — Continúo, señor presidente, y advierto que no aceptaré interrupciones. Voy a contestar las distintas objeciones formuladas por los señores diputados e informar en particular respecto de cada uno de los artículos del proyecto en consideración.

El señor diputado Musacchio ha sostenido que las penas no sirven como intimidación. Lamento que haya sustentado ese criterio porque todos los autores del mundo enrolados dentro del utilitarismo, sostienen que las dos funciones primordiales de la pena son la prevención general y la prevención especial, y dentro de la primera está precisamente la intimidación contra el crimen.

Sr. Presidente (Lastiri). — Señor diputado: la Presidencia le informa que se ha excedido en el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra, y le invita en consecuencia a concluir su exposición.

Sr. Porto. — Entiendo, señor presidente, que dispongo de media hora del tiempo que le correspondía y que me ha cedido el presidente de nuestra bancada, más otro lapso similar que me

corresponde para contestar las objeciones formuladas, todo lo cual hace un total de una hora.

Sr. Presidente (Lastiri). — Le reitero al señor diputado que se ha excedido en el tiempo de que disponía, por lo que la Presidencia le concede cinco minutos para concluir.

Sr. Porto. — En ese plazo no podré terminar, señor presidente.

Sr. Presidente (Lastiri). — La Presidencia lo lamenta, señor diputado, pero deberá ajustarse al término concedido.

Sr. Porto. — Se ha dicho que los jueces tienen que interpretar y aplicar la ley. Ya Raimundo Salelles, insigne jurista, dijo que hay tres individualizaciones penales: la individualización legislativa, la judicial y la administrativa. Por tanto, los jueces no tienen sino que interpretar las leyes, pues ya ha pasado la época de Beccaria, cuando publicara en 1764 en forma anónima su libro *Delitos y Penas* a instancias de su amigo el conde Pedro Verri, tiempos en los que se consideraba al juez sólo como la boca que pronunciaba las palabras de la ley.

Desco señalar que el jurista Soler, cuando se refiere en su obra a los artículos 141 y 142, que están agravados por este proyecto de ley —como también los agravaba Peco, según comenté precedentemente—, expresa con respecto al primero de los artículos indicados que la comisión redactora del Código Penal sancionado por la ley 11.179 «se limitó a introducir la fórmula del código italiano de 1890, artículo 146; pero en este punto comienza el referido proyecto a introducir modificaciones realmente inexplicables en las escalas penales, modificaciones tan extraordinariamente arbitrarias que casi llegan a transformar en contravenciones insignificantes ciertos hechos de tradicional gravedad». Estos mismos conceptos los repite al considerar el artículo 142, expresando: «Tampoco podemos silenciar la censura por el escaso monto de la pena conminada». El libro a que me estoy refiriendo data del año 1946, en su primera edición.

Quiero destacar, para la interpretación futura de esta ley, que cuando en el artículo 142 bis se incrimina con cinco a quince años al que «substrañere, retuviere u ocultare» a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, en los dos últimos casos —cuando dice «retuviere u ocultare»—, debe entenderse que se refiere a una persona que ya ha sido substraída. Vale decir que el ocultar o el retener es con respecto a una persona que ya estaba privada de su libertad, secuestrada, substraída.

El artículo 142 bis incrimina, como alguien ha dicho, con penas importantes algunos casos agravados. La pena normal es de cinco a quince años, pero cuando se trata de mujer o menor de dieciocho años de edad, o de los casos de los incisos 2º y 3º del artículo 142; es decir, cuando se trata de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge, o de otra persona a la que se debe

respeto particular, o cuando se ha ocasionado grave daño a la persona, la salud o a los negocios del ofendido, la pena puede llegar a veinticinco años, la que, incluso, puede ser de reclusión perpetua cuando se ocasiona la muerte de la persona que ha sido substraída.

Quiero poner de relieve que penas de esta misma naturaleza —de diez a veinticinco años de reclusión o prisión— traen, por ejemplo, en el código actual los artículos 191, inciso 4º; 192, 194; 199, y 200. De manera que acá no estamos ante nada extraordinario, ni que no figure ya en el Código Penal, en diversas disposiciones.

Para abreviar, voy a dejar de contestar a los demás diputados opositores una serie de cosas que tenía anotadas, tanto de carácter doctrinario como personal, porque he sido aludido injuriosamente algunas veces por distintos oradores, y me voy a dedicar exclusivamente, en adelante, a los artículos modificatorios del Código Penal, que son los que deben tener una interpretación en cierto modo, no auténtica porque no la podemos dar, sino cuando hay leyes de tal carácter, pero si que refleje el pensamiento y el espíritu con que los estamos sancionando.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Day. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Porto está haciendo una exposición muy importante sobre la interpretación que varios señores diputados le han pedido, como miembro informante de la mayoría. Por lo tanto, ruego al señor diputado que postergue el planteamiento de la cuestión de privilegio hasta tanto el señor diputado Porto finalice su exposición.

Sr. Day. — Tengo que plantear la cuestión de privilegio, porque si no quedo descalificado como legislador.

Sr. Presidente (Busacca). — Entiendo que no le causa ningún perjuicio que el señor diputado finalice su exposición.

Sr. Day. — Es que no va a terminar nunca.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia considera que debe esperarse que el orador termine de hablar para plantear la cuestión de privilegio, y que no se lo puede interrumpir. Esa es mi interpretación del reglamento.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Porto. — Penas del mismo carácter que ésta del artículo 142 bis traía la ley 15.293 del año 1960, en sus artículos 4º y 6º, estableciendo la reclusión o la prisión perpetua o la de quince a veinticinco años de privación de libertad, reclusión o prisión.

El decreto ley 738/63, que la derogó, en su artículo 26 contiene la reclusión o la prisión perpetuas o las de quince a veinticinco años, lo mismo que en los artículos 30 y 32; y en el

artículo 34, la de reclusión o prisión perpetuas o la de privación de la libertad de diez a veinticinco años.

Quiero señalar que entre el artículo 170, cuya pena también se aumenta por este proyecto de cinco a diez años, y el artículo 142 bis hay algunas diferencias. En primer lugar, este último es un delito contra la libertad, y está situado en ese título, o sea el IV del código. En segundo lugar, el artículo 170 está ubicado en el subtítulo de extorsión, en los delitos contra la propiedad. Por otro lado, quiero destacar que el artículo 142 bis es más amplio que el 170, y que en definitiva —con respecto a las agravaciones que tiene aquél para las mujeres, menores y dos de los casos del artículo 142— serán los jueces quienes tendrán que interpretar si corresponde la aplicación del artículo 54 del Código Penal, o la del 55, o si se está frente a una relación de consunción o de especialidad. Deseo dejar bien en claro que el artículo 142 bis no es sino una agravación máxima de la figura básica del artículo 141.

En lo que se refiere al delito de amenazas y coacción, he sido bastante amplio en mi informe en general, en cuya exposición me referí a todos los antecedentes nacionales anteriores y posteriores a la promulgación de nuestro Código Penal, así como a todos los códigos penales que casi uniformemente en el mundo lo sancionan. El maestro Peco también lo tenía en su proyecto. Y aquí se trata no de cualquier amenaza, sino de la amenaza para alarmar e intimidar, es decir, con una finalidad subjetiva. Cuando además fuera con armas o anónima, quedan agravadas las sanciones; y cuando fuera con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo, se las agrava más. En el supuesto de que esta última forma de amenaza lo sea con armas o en forma anónima o para obtener una concesión de un miembro de los poderes públicos, como, por ejemplo, cuando se nos mandó a los diputados cartas amenazantes para que no votáramos esta ley —que éste es precisamente el caso actual a que se refiere esta norma—, tenemos sanciones agravadas, lo mismo que cuando se comete a alguien a hacer abandono de una provincia, del país, o de los lugares de residencia habitual o de trabajo.

Deseo también hacer notar que este delito de amenazas y coacciones estaba en el primer Código Penal nacional de 1887, y fue suprimido por la ley 4.189 en el año 1903, en forma inconsculta y criticada por todos los tratadistas.

En lo que se refiere a robo, el proyecto incorpora como una de las máximas agravantes de estas figuras con pena que si mal no recuerdo es de diez a quince años, en caso de que esto ocurra con armas, lo que se justifica por la mayor peligrosidad del autor, por la indefensión de la víctima y por la potencia ofensiva que tiene aquél. Desde luego que si se incorpora como un agravante la máxima en el artículo 166

con pena de cinco a quince años de prisión o reclusión en todo caso de robo que ocurra con armas, hay que quitar estas dos palabras del artículo 167, que tiene solamente una pena de tres a diez años.

Quiero hacer resaltar, señor presidente, que son concordantes con la redacción que trae el proyecto para los artículos 166 y 167 el proyecto Coll-Gómez de 1937, así como el artículo 36 del proyecto del Poder Ejecutivo peronista de 1951 y los artículos 166 y 167 del proyecto de 1960 del doctor Soler.

El proyecto incrimina también con una pena mayor que la actual a la extorsión simple, que en el código tiene sanción de uno a cuatro años de prisión y que Peco, como he dicho hace un momento, en su proyecto la eleva a diez años de reclusión o prisión. Nosotros hemos puesto de cinco a quince años, de estas mismas penalidades, siguiendo la fórmula básica del artículo 142 bis.

Hemos también agravado la pena del chantaje, que está reprimido en el artículo 169 del código actual con una de seis meses a cuatro años, estableciendo una sanción que va de tres a ocho años de reclusión o prisión y que hará también inexcusable a este delito. Concuerdan con esta disposición sobre el chantaje el proyecto peronista de 1953, con una pena de dos a ocho años; el proyecto de 1960, con pena de dos a ocho años; el de 1937, de dos a seis años, y la mal llamada ley 17.567, de uno a ocho años; el código de Perú establece de uno a seis años, y el de Costa Rica de tres a siete años.

Para abreviar, omito la cita de códigos con respecto al artículo 168. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que, por ejemplo, en el proyecto argentino del año 1941 tiene pena de hasta diez años; en el proyecto Soler, de hasta ocho; en el código uruguayo, de hasta diez años; en el código italiano, de tres a diez años; en el código suizo, hasta de diez años; en el alemán, de hasta quince años, y en el código francés, de diez a veinte años.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia ruega al señor diputado que se limite a los casos de interpretación del texto del proyecto, a fin de abreviar este debate.

Sr. Porto. — Estoy tratando de abreviar, dejando inclusive sin contestación algunos cargos de tipo injurioso y personal que se han hecho.

Sr. Mastolorenzo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado no puede interrumpir al orador.

Sr. Mastolorenzo. — Es para una moción de orden que, de acuerdo con el artículo 109 del reglamento, es de tratamiento previo.

Sr. Presidente (Busacca). — Le ruego que escuche, señor diputado.

Sr. Mastolorenzo. — No me puede negar la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia le ruega que escuche primero lo que desea decirle.

Si para interrumpir a un orador necesita la venia de la Presidencia, el señor diputado no puede interrumpir al diputado que está haciendo uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Mastolorenzo. — He pedido la palabra para una cuestión previa.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia se la concederá después que lo haya hecho al señor diputado Day.

Sr. Porto. — En el artículo 189 bis se incrimina la fabricación o tenencia de materiales explosivos...

Sr. Mastolorenzo. — Pido la palabra para una cuestión de orden.

Varios señores diputados. — ¡No interrumpa!

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Porto. — En el artículo 189 bis se incrimina el delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos...

Sr. Mastolorenzo. — Señor presidente: pido que se lea el artículo 109 del reglamento.

—Suena la campana.

Sr. Porto. — Se expresa en él que aquellos que con el fin subjetivo de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, fabricaren, tuvieren en su poder, etcétera, bombas, materias explosivas, etcétera, tendrán de cinco a quince años de prisión. Esta misma pena se dará al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de estos delitos, diere instrucciones para la preparación de tales elementos.

La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo del artículo tiene pena no como dijo el señor diputado Valenzuela en su disidencia, de tres a ocho años, sino de tres a seis años; de tres a ocho años tiene el acopio de armas, y si se tratara de armas de guerra la pena será de tres a diez años. La tenencia o el acopio de municiones para armas de guerra, piezas de éstas o instrumental para producirlas, tiene las mismas penas anteriores.

Advierto, señor presidente, que existe un decreto ley, por autorización de un artículo de una ley que he leído en mi informe en general, por el cual en el año 1960 se estableció cuáles eran las armas de guerra y las armas de uso civil.

Quiero señalar, señor presidente, que éste es un delito que fue introducido por la ley 15.276, de 1960, y que está en el actual artículo 212 del Código Penal. También lo incluyeron los artículos 8, 9 y 10 de la llamada ley de emer-

gencia contra el terrorismo, número 15.293, también de 1960. Igualmente concuerda con el proyecto de Tejedor, de 1881, con el código de 1886, con el proyecto de 1937, con el proyecto de 1960, y con los códigos de Suiza, Uruguay, Brasil, Italia, Alemania, Grecia, Perú, Cuba, Unión Soviética, Polonia y España.

La instigación pública a delinquir está prevista en el artículo 209 del actual Código Penal, y lo único que hace el proyecto que estamos considerando es aumentarle un poco la pena, que pasa de hasta cuatro años de prisión, como es ahora, a una pena de dos hasta seis años, y que tiene como concordancia el proyecto del año 1937, que establece hasta seis años, y el proyecto de 1960, que fija hasta cuatro años.

En lo que respecta a la asociación ilícita...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

El bloque al que ustedes pertenecen ha hablado por medio de sus integrantes durante más de tres horas, y los oradores han sido respetados en el uso de la palabra a pesar de haberse excedido del tiempo reglamentario.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Porto. — En el artículo 210, en el que se incrimina la asociación ilícita o banda, lo único que hace el proyecto es aumentar la sanción que en el actual código es de hasta cinco años y en el proyecto pasa a ser de tres a diez años de prisión, agregándose un último párrafo por el cual para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión. Es un simple aumento de la pena que hará también inexcusable este delito, lo que me parece muy bien, ya que la banda es la asociación permanente de individuos que se unen para cometer indeterminados delitos, y no se puede poner en libertad a un hombre cuando hay indicios fehacientes o la semiplena prueba de un delito que, por su índole, hace presumir fundadamente que si se lo pone inmediatamente en libertad seguirá cometiendo delitos, ya que para ello se ha asociado.

Quiero señalar que la mal llamada ley 17.567 tenía para este delito la pena, en el caso más leve, de tres meses a seis años de prisión o reclusión; pero si tenían armas, uniformes, etcétera, era de dos a ocho años de las mismas penas, y si tenían armas de guerra u organización militar, ella se elevaba de tres a ocho años. El doble de esta pena, es decir, hasta 16 años de reclusión o prisión, correspondía aplicar si estaban organizados bajo el sistema celular; y un tercio más para los cabecillas, o sea que la pena podía llegar, en definitiva, a 21 años y cuatro meses de reclusión o prisión. Nosotros hemos sido cautelosos; solamente llegamos hasta los diez años.

En lo que respecta al artículo 211, que se refiere a la intimidación pública, queremos señalar que, en la forma en que está redactado, fue introducido por la ley 15.276, de 1960, y que lo único que hacemos nosotros es aumentar un poco sus dos penas. El actual Código Penal fija para el primer caso la sanción de un mes a tres años, y para el segundo caso de seis meses a cinco años. En el proyecto que estamos considerando la pena para el primer caso es de dos a seis años, y para el segundo de tres a diez años.

El artículo 212 se modifica de la siguiente manera: «Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación». Quiero hacer resaltar que en este caso la reforma es mucho más moderada y cautelosa que en la proposición del bloque de la Unión Cívica Radical, que llevó este mismo texto al artículo 313 bis, inciso 3º, ya que en este caso quedaba incriminada la violencia individual, mientras que en el nuestro se incriminaba solamente la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.

Repito que cuando la bancada de la Unión Cívica, siguiendo a Ricardo C. Núñez, introdujo el artículo que ahora está vigente, fue acompañado en el informe de la comisión respectiva por la firma de los señores diputados Belgrano Rawson y Saturnino Bilbao, perteneciente el primero de ellos al partido Liberal de San Luis y el segundo al partido Demócrata de Entre Ríos.

Sr. Day. — Eso no es cierto...

Sr. Presidente (Busacca). — Para una mejor ilustración de la Honorable Cámara, por Secretaría se va a dar lectura del artículo 166 del reglamento.

Sr. Mastolorenzo. — Que se lea el artículo 109.

Sr. Secretario (Rocamora). — El artículo 166 dice así: «Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de una explicación pertinente, y esto mismo sólo será permitido con la venia del presidente y consentimiento del orador. En todo caso son absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo. En el Diario de Sesiones sólo figurarán las interrupciones en el caso de que hayan sido autorizadas o consentidas por la Presidencia y el orador».

Sr. Mastolorenzo. — Pido que se lea el artículo 109.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a dar lectura al artículo 109 del reglamento.

Sr. Secretario (Rocamora). — Dice así: «Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aun al que esté en debate, y se tomarán en consideración en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior».

Sr. Day. — Esta forma de actuar implica violar el reglamento.

Sr. Presidente (Busacca). — Oportunamente la Presidencia otorgará la palabra al señor diputado Day.

Sr. Mastolorenzo. — Me voy del recinto en este momento, pero volveré para votar en contra del proyecto en consideración.

—Se retira del recinto el señor diputado Vicente Mastolorenzo.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

Sr. Porto. — El artículo 213 bis del proyecto no es sino la reproducción mejorada del artículo 213 bis, inciso 1º, que fuera introducido por la Unión Cívica Radical en 1964. Por él se reprime con «reclusión o prisión de 3 a 8 años al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor...», etcétera.

En lo que respecta al artículo 226 del código, que se refiere al delito de rebelión, lo único que hace el proyecto que estamos tratando es simplemente aumentar la pena, que de dos a diez años de prisión pasa a ser de tres a diez años de prisión, porque evidentemente quien trata de rebelar a las fuerzas armadas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos nacionales, etcétera, no puede merecer una pena excarcelable. Yo, personalmente, si tuviera que redactar este artículo, e imponer mi voluntad, establecería una sanción mínima y una sanción máxima de, por lo menos, el doble de las del proyecto que estamos considerando.

El artículo 292 del Código Penal incrimina la falsedad o adulteración material de documentos y establece pena de uno a seis años de prisión o reclusión cuando se trata de un documento público, y de seis meses a dos años de prisión cuando se trata de un instrumento privado. La reforma consiste en introducir un agregado que elevará la pena de tres a ocho años de reclusión o prisión, es decir que no será excarcelable, para los que hubieran falsificado o adulterado materialmente un documento que acredite la identidad personal, la propiedad de un automotor o el permiso para circular.

Respecto del artículo 293, que trata de la falsedad ideológica en documentos públicos, la reforma consiste también en aumentar, para estos casos de adulteración de instrumentos que acrediten la identidad de las personas, de los automotores o el permiso para circular, la pena de tres a ocho años de prisión. Se trata de que sean delitos no excarcelables. Lo que se está haciendo aquí, igual que en el artículo 292, es atrapar conductas ilícitas antes de que se produzcan los hechos más graves a que están destinadas esas falsificaciones, porque evidentemente quien tiene una máquina para falsificar dinero o el que tiene estos instrumentos, no los posee para guardárselos sino para secuestrar, robar o asesinar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Day.

Sr. Day. — Mejor dicho, señor presidente, para contestar algunas observaciones o realizar algunas aclaraciones.

Sr. Pedrini. — Que el señor diputado cumpla con el reglamento y plantee la cuestión de privilegio. Hemos sido muy tolerantes, pero el señor diputado no puede contestar ahora. Que plantee la cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Busacca). — Señores diputados: a fin de evitar la cuestión de privilegio, y como el señor diputado Day ha sido citado varias veces por el señor diputado Porto, para abreviar este debate puede permitírsele una brevísima aclaración.

Sr. Day. — En primer término, no veo en qué consiste la tolerancia. La Presidencia es la que ha tenido tolerancia al permitir que pudiéramos fijar nuestro criterio y nuestra posición con amplitud, y quedamos perfectamente reconocidos. Por otra parte, creo que esta hora crea un clima de nerviosidad que no corresponde después de estar debatiendo aquí con altura y exponiendo nuestros puntos de vista durante largo tiempo.

Además, señor presidente, no creo en ningún momento haber hecho ningún agravio a nadie como para encontrar la reacción que he notado en el señor diputado Porto, que desde luego estoy seguro no es por un problema personal, aunque le toca como personal lo relativo a la materia penal, que con cariño de maestro la toma muy a pecho. Lo reconozco, pero esto me obliga a dejar la cuestión bien aclarada.

Sr. Presidente (Busacca). — Entiende la Presidencia que no ha habido agravio de ninguna de las partes.

Sr. Day. — No puedo quedar aquí como legislador que hace citas como un mentiroso.

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Porto no le ha dicho tal cosa, señor diputado.

Sr. Day. — Sé que no lo ha dicho, porque de hacerlo no lo hubiera aceptado.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia le solicita al señor diputado que formule su aclaración.

Sr. Day. — En cuanto a la aclaración debo manifestar, en primer lugar, que no es exacto y no podría haberlo sido nunca que la derogación de las leyes represivas y la reforma del Código Penal de 1964 salieran únicamente con los votos radicales y conservadores. Los radicales y conservadores no tenían número para formar quórum y el señor presidente es testigo de esta circunstancia, porque en esa época integraba la Honorable Cámara.

En segundo lugar, es útil conocer a través de la crónica taquigráfica de entonces cómo fue el problema. Se hizo un despacho de primera

mayoría —hubo como cinco o seis despachos— y se coincide en puntos fundamentales. El despacho de la mayoría lo firman en ese momento los señores diputados Contini, Bravo, Rouzaut, Solari, Ortiz Hernández, Santiago Felipe Lla-ver, Grau, García, Bachini, Schapira y Adolfo Constantino. También se firman otros despachos.

Se decide votar el dictamen de la mayoría y todos en general apoyan el despacho, pero luego, en la discusión en particular, se plantean distintas discrepancias como es lógico y correcto. Llega el momento en que se considera este artículo 213 bis y en primera instancia la bancada justicialista manifiesta que no lo va a votar, pero luego el señor diputado Caro, en la página 3355 del Diario de Sesiones del 9 de septiembre de 1964 dice lo siguiente: «Desde luego, sin que personalmente resigne los puntos de vista expuestos oportunamente, doy la opinión de mi bloque, que se asienta también en otra consideración: en la necesidad imperiosa de que se derigue con una sanción rápida todo tipo de legislación represiva».

Más adelante el mismo señor diputado manifiesta que votará el artículo si se hace un agregado. Y dijo lo siguiente: «Este aspecto también tiene que preverlo la ley y nosotros, al rechazar todo tipo de discriminación, racial o religiosa, vamos a propugnar que se modifique el despacho en el sentido de incriminar todo tipo de discriminación política que tienda a la segregación y desunión de la familia argentina. Por estas consideraciones, propongo concretamente a la comisión que acepte la redacción del inciso 2º en los términos que lo hizo el señor diputado De Cara».

El último problema que considero necesario aclarar es el siguiente: se manifestó que había una contradicción en lo que habíamos expresado con respecto a que estas reformas entrarán a regir de inmediato, lo cual no sería jurídico, porque en el año 1964 el radicalismo actuó de otra manera.

Debo recordar que el radicalismo no tenía mayoría y actuó de ese modo porque en un mismo proyecto, en su artículo 1º, se derogaban todas las leyes represivas, que significaban la persecución al peronismo y al comunismo. Además, en muchos casos se trataba de la disminución de penas, y el justicialismo coincidió en la vigencia inmediata de la ley como medio de terminar con la proscripción. Lo que se derogaba y lo que se quería con urgencia se colocó en el mismo cuerpo de la ley. Por el artículo 1º se derogaron decretos leyes y leyes represivas, y por los artículos 2º y 3º se incorporaron al Código Penal algunas disposiciones: es decir que el modo como se actuó en ese momento fue coherente, amplio y correcto, siguiendo el principio penal de que siempre hay que beneficiar a quienes en un mo-

mento dado se encuentren concretamente en peor situación, aun a costa de algún hipotético caso en que pueda existir un pequeño perjuicio de información.

Esos son los detalles y la forma en que se procedió. Creo que hay coherencia en la línea con que actuó el radicalismo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Queda aclarado el pensamiento del señor diputado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Raúl Alberto Lastiri.

Sr. Presidente (Lastiri). — Se va a llamar para votar en general el despacho de la Comisión de Legislación Penal.

Sr. Fonte. — Solicito que la votación sea nominal.

Sr. Pedrini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Lastiri). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: nosotros no tenemos ningún tipo de problemas ni de inhibiciones para votar en forma nominal. Si el pedido de votación nominal significa que alguien pueda pensar que algún diputado de este bloque tiene temor en marcar su voto por la afirmativa, le decimos que está profundamente equivocado.

Sr. Day. — Está prejuzgando.

Sr. Pedrini. — No estoy prejuzgando.

El peronismo y quienes ocupamos estas bancas perdimos el miedo hace mucho tiempo. Dieciocho años de persecución, cárceles y muertes nos enseñaron a perder el miedo. (*Aplausos.*) Por lo tanto, que quede bien en claro que vamos a aceptar el pedido de votación nominal. (*Aplausos.*)

Realizamos esta votación absolutamente convencidos de que cumplimos con nuestro deber y con nuestras conciencias. Queremos dar a este gobierno el instrumento legal necesario para terminar con esta ola de secuestros y de actividades que quieren poner en peligro al gobierno popular. Y a este gobierno que hemos alcanzado después de tantas luchas vamos a defenderlo a cualquier precio.

Aceptamos, pues, el pedido de votación nominal. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Lastiri). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Lastiri). — Se va a votar en general, en forma nominal, el despacho de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se introducen reformas en el Código Penal.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Secretario (Lavia). — Sobre un quórum de 9 señores diputados, han votado 127 por la afirmativa y 62 por la negativa. La votación ha resultado afirmativa. (Aplausos.)

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Acuña, Aguirre, Aguirre de Saibene, Amado Saleme, Amaolo, Amerise, Aragonés, Arce, Ariani, Arrúa, Asmar, Auyero, Avila, Bárbaro, Barrionuevo, Bartomioli, Béhéran, Bellisio, Blanco, Bonás, Bonifatti, Brito Lima, Busacca, Bustos, Cabana, Cabezas, Calabrese, Campbell, Camus, Carral Tolosa, Casazza, Catalano, Citati, Colello, Cossy Isasi, Chaquierez de Palacios, D'Angelo, Davico, De Aparici, De Luca, Desperbasques, Egüirreñ, Esquivel, Farias, Fernández (D. D.), Fernández (J. M.), Ferreyra, Flores, Franco, Fuentes, Gaitán, Gallo, Ganem, García, Garré, Giménez, González, Gualco, Guerrero, Hughes, Imbaud, Kelly, Labake, Lazzarini, Lépez, Literas, López (D.), López (M. A.), López de Gallo, Lumello, Márquez, Martínez (J. A.), Martínez (P. N.), Mera Figueroa, Migliozi, Molina (G. H.), Molina (M. I.), Mónaco, Moreno Ferrer, Musso, Naranjo, Osella Muñoz, Palacio Deheza, Patalagoitia, Paz, Pedrini, Pereira, Ponce, Porto, Racchini, Rafael, Ramirez, Ritvo, Rizo, Rodríguez (A. S.), Rodríguez Flores, Rojas, Rolando, Román, Romero (J. N.), Rota, Rubeo, Ruiz Villanueva, Salim, Salomón, Salvatierra, Sambueza, Sánchez Toranzo, Sanguineti, Sarboli, Saúl, Servini García, Silva, Slamovits, Stecco, Suleta de Araya, Svrsek, Tachella, Tagliaferro, Toller, Urdinez de Volpe, Vateri, Vergara, Villada, Villalba, Vinardell Molinero, Zapata.

—Votan por la negativa los señores diputados: Acevedo, Alvarez Guerrero, Amaya, Arana, Arbo, Araya, Azurmendi, Balestra, Benedetti, Borrás, Bravo (F. S.), Comínguez, Day, Espondaburu, Estigarria, Fernández Bedoya, Fernández Gill, Fonte, Freschi, Galván, Garona, Gass, Grau, Guzmán de Andreussi, Halek, Hueyo, Loncharich Franch, Lorences, Lucena, Llorens, Macris, Martos, Massolo, Mastolorenzo, Mira, Molina Zavalla, Molinari Romero, Monsalve, Montero Tello, Moral, Morini, Moyano, Musacchio, Natale, Nicoliche, Nosiglia, Parente, Portero, Rabanal, Romero (C. A.), Rosas, Sánchez Ahumada, Sandler, Sarli, Suárez (L. M.), Traboulsi, Tróccoli, Valenzuela, Vázquez Pol, Viale, Zamanillo.

Sr. Presidente (Lastiri). — En consideración en particular el artículo 19.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Lastiri). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

4

LICENCIA DEL SECRETARIO PARLAMENTARIO

Sr. Presidente (Lastiri). — Por Secretaría se va a dar lectura de una nota remitida en el día de ayer por el señor secretario parlamentario de la Honorable Cámara, doctor Alberto Luis Rocamora.

Sr. Secretario (Lavia). — Dice así:

Buenos Aires, 24 de enero de 1974

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Raúl A. Lastiri.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, y por su intermedio a la Honorable Cámara, solicitándole quiera concederme licencia en el cargo de secretario con que me honrara oportunamente y he desempeñado hasta la fecha.

Motiva este pedido el ofrecimiento y perspectiva de ocupar el cargo de ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, acompañando al nuevo mandatario que surgirá por renuncia de su actual titular y la consecuente implementación de las normas constitucionales de aplicación. Dicha licencia la solicito por el tiempo en que ejerza tal función.

Esperando de la ponderación de la Honorable Cámara una resolución favorable, saludo al señor presidente con mi respeto.

Alberto Luis Rocamora.

Sr. Presidente (Lastiri). — En consideración la solicitud de licencia presentada por el doctor Rocamora.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

5

INDICACION

Sr. Presidente (Lastiri). — Corresponde considerar los órdenes del día 353 y 356, que se refieren a la aprobación de tratados celebrados por nuestro país con las repúblicas del Uruguay y del Paraguay.

Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Solicito que se considere primero el dictamen que figura en el orden del día 356, por no encontrarse en el recinto en este momento el miembro informante del despacho de comisión contenido en el orden del día 353.

Sr. Presidente (Lastiri). — Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor diputado Pedrini.

—Asentimiento.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.